



401

RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN

John Edwin Ortiz Cuellar <john.ortiz@udla.edu.co>

11 de abril de 2024, 14:58

Para: Liesel Joullieth Correa Forero <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>

Cc: Edgar Medina Perez <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

Florencia, 11 de abril de 2024

SEÑORES

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

E.S.D

REFERENCIA:

APELACIÓN CONTRA

DE PRUEBAS CONFORME A LOS ARTS. 24 Y

LEY 610 DE 2000

TIPO DE PROCESO:

RADICADO:

ENTIDAD AFECTADA:

PRESUNTO RESPONSABLE:

VALOR DETRIMENTO PATRIMONIAL: \$96.032.548 M/CTE COP

RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE

AUTO QUE NIEGA SOLICITUD

51 DE LA

ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PRF-1148

MUNICIPIO DEL PAUJIL

RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT

JOHN EDWIN ORTIZ CUÉLLAR, identificado con cédula de ciudadanía N°11.449.452 expedida en Facatativá Cundinamarca, estudiante de Décimo Semestre de Pregrado en Derecho de la universidad de la Amazonia, con código estudiantil N°1910087014, como **DEFENSOR DE OFICIO** designado en el proceso de la referencia, presento de manera respetuosa ante su Despacho, **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN**, contra el **AUTO No.008**, de fecha 03 de abril de 2024, que en su parte resolutoria NIEGA la prueba testimonial solicitada por el SUSCRITO, en calidad de Defensor de Oficio del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, quien fuera imputado con responsabilidad fiscal mediante **AUTO DE IMPUTACIÓN MIXTA No. 001, de fecha 26 de febrero de 2024**, a título de **CULPA GRAVE**, en virtud de las presuntas irregularidades en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 420-109661, el cual no fue adquirido a precios del mercado, presentándose un sobrecosto en la compra del mismo que derivó en un presunto detrimento al patrimonio del municipio de El Paujil, en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/Cte. COP.

Respetuosamente,

JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR

Defensor de Oficio

Cédula de ciudadanía 11.449.452 de Facatativá Cundinamarca

Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonia

Adscrito al Consultorio Jurídico Código Estudiantil N°1910087014

Número de Celular 318 549 4034 e-mail Institucional: john.ortiz@udla.edu.co



Recurso de Reposición y en subsidio de apelación Decreto de Pruebas PRF-1148.pdf

950K

402

Florencia, 11 de abril de 2024

SEÑORES

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

E.S.D

REFERENCIA:

**RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL
DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE NIEGA
SOLICITUD DE PRUEBAS CONFORME A LOS
ARTS. 24 Y 51 DE LA LEY 610 DE 2000**

TIPO DE PROCESO:

ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

RADICADO:

PRF-1148

ENTIDAD AFECTADA:

MUNICIPIO DEL PAUJIL

PRESUNTO RESPONSABLE:

RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT

VALOR DETRIMENTO PATRIMONIAL:

\$96.032.548 M/CTE COP

JOHN EDWIN ORTIZ CUÉLLAR, identificado con cédula de ciudadanía N°11.449.452 expedida en Facatativá Cundinamarca, estudiante de Décimo Semestre de Pregrado en Derecho de la universidad de la Amazonia, con código estudiantil N°1910087014, como **DEFENSOR DE OFICIO** designado en el proceso de la referencia, presento de manera respetuosa ante su Despacho, **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN**, contra el **AUTO No.008**, de fecha 03 de abril de 2024, que en su parte resolutoria NIEGA la prueba testimonial solicitada por el SUSCRITO, en calidad de Defensor de Oficio del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, quien fuera imputado con responsabilidad fiscal mediante **AUTO DE IMPUTACIÓN MIXTA No. 001, de fecha 26 de febrero de 2024**, a título de **CULPA GRAVE**, en virtud de las presuntas irregularidades en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 420-109661, el cual no fue adquirido a precios del mercado, presentándose un sobrecosto en la compra del mismo que derivó en un presunto detrimento al patrimonio del municipio de El Paujil, en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/Cte. COP.

Al respecto, debo manifestar que la **Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, con su decisión**, inadvierte el contenido normativo, jurisprudencial, constitucional y del Bloque de Constitucionalidad en materia de Derechos Humanos, que fue puesto de presente en los ARGUMENTOS DE DEFENSA presentados, así como los postulados de la necesidad de la prueba, la petición de pruebas y la importancia de éstas, respecto del debido Proceso en punto del ejercicio del Derecho de

Defensa y Derecho de Contradicción, como garantías que le asisten a mi Defendido.

Debe advertirse que la decisión proferida en el **AUTO No.008**, de fecha 03 de abril de 2024, que, en su parte resolutoria:

- i) NIEGA, sin mayor sustento, la prueba testimonial solicitada por el SUSCRITO, por considerarla: "inconducente, impertinente e inútil y;
- ii) Refiere que, contra tal decisión, sólo es procedente el Recurso de Reposición ante la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, por tratarse de Proceso de única instancia...

Desconoce de manera flagrante, contenidos normativos en materia Procesal para la valoración de la prueba y del Debido Proceso" que al ser inobservados por el Ente Acusador, vulneran en manera grave, por un lado, el ejercicio de los derechos de Defensa y Contradicción que deben acudir a instancias del Debido Proceso como garantía y derecho Fundamental que le asiste a mi PROHIJADO, en punto de las Garantías y el Derecho a la Protección Judicial, reconocido y expresado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 25), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14) y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y de otro, los Artículos 22, 23, 24, 26 y 32 de la Ley 610 de 2000, así como, en virtud de remisión normativa así contenida en el Artículo 66 de la Ley 610 de 2000, las consagradas en los Artículos 164, 165, 167, 169, 171, 173 y 176 del Código General del Proceso, respecto del "principio de unidad de la prueba".

Dicho principio, previsto en los Artículos 26 de la Ley 610 de 2000 y 176 del Código General del Proceso, en virtud del cual "las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos", por cuanto, como así lo ha señalado la honorable Corte Constitucional, en sentencia **No. C-830 de 2002**:

"en el campo probatorio rige otro importante principio denominado "unidad de la prueba", en virtud del cual se considera que todas las pruebas del proceso forman una unidad y por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto, esto es, en forma integral. La razón de ser del mismo es que la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es suficiente para establecer la verdad de los hechos y se requiere, además de ella, efectuar la confrontación de tales medios para establecer

403

sus concordancias y divergencias y lograr conclusiones fundadas y claras sobre aquella verdad.

Así mismo, desconoce el contenido normativo referente a la procedencia de los recursos contra el Auto que rechaza la solicitud de pruebas, como así se consagra en los Artículos 24 y 51 de la Ley 610 de 2000, toda vez que:

- i) La denegación total o parcial de las pruebas solicitadas o allegadas por parte del Investigado, deberá ser motivada y notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación. **(Artículo 24 Ley 610 de 2000)**
- ii) Contra el auto que rechaza la solicitud de pruebas procederán los recursos de reposición y apelación. **(Artículo 51 Ley 610 de 2000)**

Razones todas las anteriores, por las cuales, procedo, amparado, especialmente en lo contenido en los artículos 24 y 51 de la ley 610 de 2000 y recabando los argumentos ya esgrimidos, a interponer **EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL RECURSO DE APELACIÓN**, siendo procedente éste último, en contra de las decisiones tomadas en el **AUTO No.008**, de fecha 03 de abril de 2024, de conformidad con los siguientes:

I. HECHOS

PRIMERO-. A petición del municipio de **EL PAUJIL** el señor **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO** realiza el día 10 de mayo de 2012 informe de avalúo del predio correspondiente a la **FICHA CATASTRAL N°00-01-00031-0004-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA N°440-88285**. En dicho informe, determina que el valor comercial total del terreno corresponde a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$240.000.000) DE PESOS M/Cte. COP.**

SEGUNDO-. Por medio del **ACUERDO MUNICIPAL N°011** del 22 de junio de 2012, el **CONCEJO MUNICIPAL** del **PAUJIL** Caquetá, autorizó al entonces **ALCALDE MUNICIPAL**, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, para que con el lleno de todo todos los requisitos legales, presupuestales y técnicos, adquiriera en nombre del municipio, un terreno, previos los estudios técnicos adelantados por la secretaría de **PLANEACIÓN MUNICIPAL**, con el fin de ejecutar los programas de interés social y/o interés prioritario, consignados en el plan de desarrollo.

TERCERO-. Posteriormente, el día 26 de diciembre de 2013, por medio de **CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA N°001**, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT** en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL** y el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, se comprometen a comprar y vender respectivamente, un terreno para la construcción de un proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del municipio de **EL PAUJIL**, Caquetá, por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$240.000.000) de PESOS M/Cte. COP.** Cabe señalar que el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, había adquirido por compra en los términos de la escritura pública número 452 del 10 de diciembre de 2013, el terreno identificado con **FICHA CATASTRAL N°00-01-00031-0004-000**, a su anterior propietario.

CUARTO-. Es así como, mediante escritura pública número 3078 del día 26 de diciembre de 2013 y bajo el folio de **MATRÍCULA INMOBILIARIA 420-109661**, el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, vende al municipio de **EL PAUJIL**, Caquetá, el inmueble correspondiente a la **FICHA CATASTRAL N°00-01-00031-0004-000**. Dicha venta, fue autorizada por la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**, mediante **RESOLUCIÓN NÚMERO 019** del día 17 de diciembre de 2013. Finalmente, es preciso citar, que por medio del **COMPROBANTE NÚMERO 3783**, el municipio de **EL PAUJIL**, Caquetá, efectuó el pago con dineros del rubro código 020204050201020103, del terreno ya referido, cuyo objeto era la construcción del proyecto de vivienda.

QUINTO-. Por medio del memorando CF -066 del 5 de abril de 2016, la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral remitió la denuncia D-003-16 relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en municipio de El Paujil. De acuerdo con el traslado de dicha denuncia, se estableció que el municipio ya referido, suscribió el contrato de compraventa N.º001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila Puentes, en cuantía de DOS CIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) Moneda Cte. COP, con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP.

II. ULTIMAS ACTUACIONES PROCESALES:

PRIMERO-. El señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, quien fungía como **ALCALDE** del **MUNICIPIO DE EL PAUJIL**, según manifiesta el ente acusador, no

454

observo el principio de responsabilidad, transparencia y economía al adquirir y pagar por el terreno identificado con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-109661**, destinado a construcción del proyecto de vivienda de interés social y/o interés prioritario consignado en el plan de desarrollo, un sobrecosto cuya cuantía asciende a **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP**, conllevando con ello un daño patrimonial al estado y en contra del **MUNICIPIO DE EL PAUJIL**, materializando además, una gestión antieconómica e ineficiente en los términos prescritos en la ley 610 de 2000. Es por ello que la **DIRECTORA TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, mediante **auto de apertura N°025 del 18 de diciembre de 2018** y, con fundamento en la denuncia D-003-16, **AVOCA CONOCIMIENTO Y DECLARA ABIERTO** proceso de responsabilidad fiscal ordinario N°1148, en contra de los señores **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, HERIBERTO ARCILA PUENTES y a la COMPAÑÍA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.**, ésta última, bajo la calidad de **TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**, por las presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto ya referido, y que fuera constatado a petición del ente de control, por el **INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI**, entidad que determinó que de acuerdo con el avalúo comercial, el valor estimado del bien con **FICHA CATASTRAL N°00-01-00031-0004-000**, a diciembre de 2013, correspondía a la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$143.967.452) M/Cte. COP**.

SEGUNDO- Mediante Auto de Imputación Mixta N.º001, de fecha 26 de febrero de 2024, dentro del proceso Ordinario de única instancia PRF-1148, la **DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, resolvió **IMPUTAR** responsabilidad fiscal a título de **CULPA GRAVE**, a mi defendido, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP** y Archivar la responsabilidad fiscal a favor del Investigado **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, quien obrara como vendedor del bien inmueble a que se ha hecho referencia.

TERCERO- La honorable Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, profirió Mediante **AUTO No.008** de fecha 03 de abril de 2024, y notificado el día 04 de abril de 2024 a través de correo electrónico, que en su parte resolutoria NIEGA la prueba testimonial solicitada por el **SUSCRITO**, en calidad de Defensor de Oficio del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**.

III. MARCO NORMATIVO GENERAL Y BLOQUE DE CONVENCIONALIDAD

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:

Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 14:

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
- b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
- c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;
- d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
- e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
- f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
- g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991:

ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

ARTÍCULO 230: Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO:

ARTÍCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:

...

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga.

3. Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.

406

ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.

ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

ARTÍCULO 171. JUEZ QUE DEBE PRACTICAR LAS PRUEBAS. El juez practicará personalmente todas las pruebas...

ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión

de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción.

ARTÍCULO 212. PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE TESTIMONIOS. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. (...)

LEY 610 DE 2000:

De conformidad con lo establecido en la ley 610 de 2000, se advierten los siguientes articulados:

Aspectos Generales:

Artículo 2º. Principios orientadores de la acción fiscal. En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 5º. Elementos de la responsabilidad fiscal. (Modificado por el At. 125 del Decreto 403 de 2020) La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concorra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores".

Artículo 6 Daño patrimonial al Estado (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020) Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e

402

inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.

De las pruebas:

Artículo 22. Necesidad de la prueba. Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso.

Artículo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado.

Artículo 24. Petición de pruebas. El investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación.

Artículo 25. Libertad de pruebas. El daño patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

Artículo 26. Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.

Artículo 32. Oportunidad para controvertir las pruebas. El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

Del Trámite del Proceso:

Artículo 47. Auto de archivo. *Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente*

de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma.

Artículo 50. Traslado. Los presuntos responsables fiscales dispondrán de un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la notificación personal del auto de imputación o de la desfijación del edicto para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. Durante este término el expediente permanecerá disponible en la Secretaría.

ARTÍCULO 51. Decreto y práctica de pruebas. Vencido el término anterior, el funcionario competente ordenará mediante auto la práctica de las pruebas solicitadas o decretará de oficio las que considere pertinentes y conducentes, por un término máximo de treinta (30) días. El auto que decrete o rechace las pruebas deberá notificarse por estado al día siguiente de su expedición.

Contra el auto que rechace la solicitud de pruebas procederán los recursos de reposición y apelación; esta última se concederá en el efecto diferido. Los recursos deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 54. Fallo sin responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, cuando en el proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.

Artículo 66. Remisión a otras fuentes normativas. En los aspectos no previstos en la presente ley se aplicarán, en su orden, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal. En materia de policía judicial, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

DECRETO REGLAMENTARIO 1420 DE 1998:

Artículo 2º: "Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien".

DECRETO NACIONAL 734:

Artículo 3.4.2.6.1. Arrendamiento y adquisición de inmuebles. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.

Toda vez que el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, advierte que la **DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, en virtud del **AUTO No.008, de fecha 03 de abril de 2024, RESOLVIÓ: "NEGAR" la prueba TESTIMONIAL solicitada por ésta Defensa y que en el mismo**, la honorable **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, de manera sucinta, argumenta para resolver de manera DESFAVORABLE a las solicitudes presentadas, debidamente argumentadas y sustentadas por EL SUSCRITO, aduciendo que:

" Que acuerdo a la solicitud de práctica de pruebas solicitadas por el estudiante derecho JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR, defensor de oficio investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT ante Ente de Control, debe señalar este despacho que EL INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES, realizado por el evaluador Fernando Gustavo Martínez Bravo, obra a folio 25 al 33, del expediente de responsabilidad fiscal No.1148, y tal como lo expresa el solicitante se traduce en un **PERITAJE RENDIDO** ante la Administración Municipal de El Paujil, Caquetá y por tanto cualquier interrogatorio sobre el mismo en nada conduce a dilucidar lo propiamente investigado por este Despacho, toda vez que el mismo está refrendado con su firma y dio pie para que el señor Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; procediera a realizar la mencionada compra del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No.420-109661, cuyo valor comercial alcanzó la cuantía de Doscientos Cuarenta millones de pesos (\$240.000.000) M/cte.

En la copia del informe de Avalúo de Previos y/o Mejoras Rurales emitida por el Ingeniero Civil Fernando Gustavo Martínez Bravo (folio

25 el 33), se encuentran condensadas todas las razones técnicas, fácticas y jurídicas mediante las cuales se estableció dicho evaluó comercial y cualquier interrogatorio acerca de su expedición en nada contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Por tanto, así como los jueces hablan a través de sus sentencias, los peritos expresan a través de peritajes realizados. En consecuencia, para este Despacho la prueba solicitada por el defensor de oficio el investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, se consideren conducente impertinente e inútil"

Por lo anteriormente expuesto no se accederá a la solicitud de prueba testimonial elevadas por el apoderado de defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el estudiante de Derecho JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR"

Apreciación que considera de manera respetuosa el SUSCRITO, no cumple con motivación suficiente y a partir de la cual, se colige, que no fue tenido en cuenta lo aportado y sustentado previamente, en materia Constitucional, legal y Normativa para demostrar las IRREGULARIDADES en las cuales incidió dicha Dirección y que, ante la NEGACIÓN de las pruebas solicitadas, vulnera entre otros, el Ejercicio de Defensa y Contradicción que le asiste a mi Prohijado, como garantía del Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO, dentro del asunto que nos ocupa.

Es por ello que, de manera respetuosa y con sustento en los Artículos 24 y 51 de la Ley 610 de 2000, a efectos de **RECURSO DE REPOSICIÓN** para que se reforme o revoque la decisión tomada en el AUTO ya mencionado por quien fuera proferido y en **SUBSIDIO, EL RECURSO DE APELACIÓN**, para que, en efecto, de no proceder la REPOSICIÓN, sea una instancia superior a la primera que lo profirió, quien revise y revoque lo actuado, me permito recabar las siguientes:

IV. CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS:

Con relación a DEBIDO PROCESO, el cual se hace extensible y debe aplicarse a toda clase de actuaciones administrativas y tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, en sentencia C-341 de 2014, la honorable Corte Constitucional, ha sido expresa en señalar:

5.3. El derecho al debido proceso:

5.3.1. El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios

409

y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas". La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la extensión del debido proceso a las actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones, "en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses"¹.

5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

¹ Sentencia T-442 de 1992.

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Muy a pesar de lo anterior y advirtiéndose circunstancia fundada y, ciertamente inconstitucional, en desmedro de las garantías que le asisten a mi DEFENDIDO, el Despacho de la Honorable **DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, procedió, en cambio, a Negar la Solicitud de Prueba Testimonial que fuera elevada por el SUSCRITO en el Escrito de Argumentos de Defensa, en los siguientes términos:

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el **INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES** entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N.º 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.º 312 312 73 02.

Nótese que, en tal solicitud, se cumplen los requisitos exigidos y contenidos en el Código General del Proceso, el cual exige en su Artículo 212, que "Cuando se

pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba".

En el Artículo 165 del Código General del Proceso, además, se establece que el TESTIMONIO DE TERCEROS, es un MEDIO DE PRUEBA.

Como así se expresó en el escrito de Argumentos de Defensa, obra en el Expediente Avalúo **adelantado por el IGAC y cuya INVESTIGACIÓN ECONÓMICA para determinar el MERCADO, se llevó a cabo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET.**

Así mismo, reposa en el Expediente, AVALÚO DE PREDIO RURAL, realizado por el Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, persona natural de carácter privado certificado por CORPOLONJAS DE COLOMBIA, debidamente registrado en el Registro Nacional de Avaluadores con MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE para la fecha en que éste, realizó tal Avalúo y quien se encontraba habilitado COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA. Aprobación certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004. Dicho Informe de Avalúo de predios y/o Mejoras Rurales, a diferencia del realizado por el IGAC, cuenta con un estudio de mercado directo, lo cual, incide en la veracidad de los datos que en su informe incorpora y que se constatan en el apartado "N.º 5 INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS – 5.1 METODOLOGÍA – COMPARACIÓN DE MERCADOS", en el cuadro estadístico contenido en el apartado "5.2 CUADRO ESTADÍSTICO", en el apartado "6. MEJORAS"- 6.1 CERCAS y 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO, que conllevan al resumen de valores parciales y a determinar el valor del avalúo, así expresado en el "RESUMEN DE VALORES PARCIALES" de dicho INFORME.

Debo decir, a contrario sensu de lo expresado por la **honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, que lo anterior, es razón suficiente para que se apruebe, decrete y practique el TESTIMONIO del PERITO AVALUADOR.** El TESTIMONIO del Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, es conducente, pertinente y útil, "porque va a permitir verificar no sólo la información contenida en el Avalúo realizado, las razones técnicas, fácticas y jurídicas a través de las cuales llegó a determinar el avalúo comercial del bien inmueble objeto de controversia, sino, que además, permitirá a mi PROHIJADO, en punto de las consideraciones que éste TESTIMONIO aporte al fallador, controvertir el PERITAJE APORTADO por la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ y porque las respuestas y aportes al proceso, que haga el señor MARTÍNEZ BRAVO, COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA, registrado en el

Registro Nacional de Avaluadores con MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE para la fecha en que éste, realizó tal Avalúo, pueden servir para contradecir el avalúo presentado por el ENTE ACUSADOR y para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

Es posible que, advirtiendo tal situación, haya negado la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, la solicitud realizada por el SUSCRITO en su escrito de ARGUMENTOS DE DEFENSA.

Encuentra lamentablemente el suscrito Defensor de Oficio, que el Despacho no ofrece en su Auto No.008, de fecha 03 de abril de 2024, motivación suficiente para NEGAR LA SOLICITUD de la prueba testimonial Solicitada, más que la simple afirmación ya referida, para concluir que la misma, es inconducente, impertinente e inútil.

Advierte el SUSCRITO en el mismo sentido, que la DECISIÓN proferida por honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en punto de la importancia que reviste tal TESTIMONIO, es una decisión arbitraria por parte del despacho, puesto que "materializa una clara vulneración al Derecho a la Defensa y Contradicción que le asiste a mi prohijado como verdadera garantía procesal", por cuanto lo que se pretende a través del TESTIMONIO del Perito AVALUADOR, es la búsqueda de la verdad. No sólo valorar y dar fe de los procedimientos, las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido, sino, que se exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué se estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC, junto con todas aquellas preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

Tal ejercicio, conlleva a que nos refiera el PERITO EVALUADOR, en su saber, por ejemplo, por qué tal diferencia en el valor del avalúo comercial y si es que la forma en la que fue adelantada la **INVESTIGACIÓN ECONÓMICA para determinar el MERCADO, por parte del IGAC, esto es, de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET, puede ser la razón de ello.**

En síntesis, le acude a mi DEFENDIDO, que pueda en pleno ejercicio de su Derecho de Defensa, contar con los procedimientos y mecanismos que permitan el efectivo ejercicio de su Derecho de contradicción, en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos materia de investigación y por los cuales se le ha imputado. No en vano las consideraciones respecto de la carga de la prueba y el deber que le acude al JUEZ, tanto, en punto del Artículo 42 del C.G.P, como EN EL DECRETO Y LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS, pruebas que en éste caso, por alguna razón que tampoco se explica el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, pese a

4M

que las ha conocido la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, nunca las consideró o decretó de oficio, ni, como en efecto se observa en lo actuado dentro del Proceso de la referencia, tampoco vinculó a todos los demás involucrados a efectos de la búsqueda de la verdad que debe acudir a instancias de la Acción Fiscal y la protección del patrimonio público que la misma persigue.

Hasta ahora, en lo actuado por la **honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá**, como en efecto se expuso en los argumentos de Defensa, en punto de lo consignado en Auto de Imputación Mixta N. °001 de fecha 26 de febrero de 2024, se advierte:

- i) ***Haberse imputado Responsabilidad Fiscal*** en contra de mi Prohijado por parte de la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, con sustento en normatividad cuya aplicación no era exigible al momento de la ocurrencia de los hechos que ésta señala para determinarla, ***motivando sus decisiones para IMPUTAR en procedimientos y reglas que se encontraban derogadas y que NO tenían por qué haber sido observadas por mi REPRESENTADO, IMPLICA***, advierte el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, ***una clara vulneración al principio de Legalidad contenido en el Artículo 29 superior, por cuanto Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.***

Como fuera argüido la normatividad vigente para la época en la cual se realizó el avalúo (10 de mayo de 2012), es, la precitada en el Artículo 3.4.2.6.1. del Decreto Nacional 734 y no la referida por la Honorable Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en punto de las reglas contenidas en los Decretos 855 de 1994 y 4117 de 2006, por encontrarse Derogados desde el año 2008.

Circunstancia ésta, que puede corroborarse de conformidad con las siguientes capturas de imagen, las cuales fueron aportadas dentro del Escrito de los Argumentos de Defensa, como adelante se muestra:

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal determina que el presunto detrimento patrimonial se establece en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, como lo expresó la Conclusión de la Denuncia D-003-16, toda vez que es el resultado cuantificado de la confrontación entre los avalúos realizados por el particular Fernando Gustavo Martínez a quien acudió el Municipio de El Paujil y el solicitado por la Contraloría Departamental del Caquetá ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En cuanto a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales encontramos:

La Ley 9 de 1989, "Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones", en su artículo 15 establece:

Página 13 de 36

CAPTURA N. °17 aportada en el escrito de los ARGUMENTOS DE DEFENSA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

"Artículo 15°.- El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones, de conformidad con el artículo 18 de la presente Ley.

La forma de pago, en dinero efectivo, títulos-valores o bienes muebles e inmuebles, será convenida entre el propietario y el representante legal de la entidad adquirente. Las condiciones mínimas del pago del precio serán las previstas en el artículo 29.

Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura pública de compraventa, la entidad adquirente deberá entregar simultáneamente una garantía bancaria incondicional de pago del mismo. La existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de contrato, sin perjuicio del cobro del saldo por la vía ejecutiva.

Facúltase a los establecimientos bancarios para emitir las garantías de que trata el inciso anterior."
(Subrayado fuera de texto).

CAPTURA N.° 18 aportada en el escrito de los ARGUMENTOS DE DEFENSA

412

Artículo 2°. El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

"Artículo 15. Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

Parágrafo. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".
(Subrayado fuera de texto).

Al respecto evidencia este Despacho, que no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo, que lo acredita como tal (folio 35), tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la Conclusión de la Denuncia D-003-16, evidencia este Despacho que no se requirió por parte del Municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino al particular facultado por la norma para la acreditación del

CAPTURA N.º19 aportada en el escrito de los ARGUMENTOS DE DEFENSA

- ii) **Refiere de manera reiterativa el honorable Despacho de la Contraloría Departamental del Caquetá, que (...) presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial". Presunción** que obra de manera reiterativa en las argumentaciones de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento, y que se observa, se queda sólo en ello, en la presunción. Advierte el SUSCRITO, que no figura en el expediente, prueba allegada por el ente acusador, que dé cuenta de la validez de tal afirmación.

Tal presunción y afirmación realizada por el ente acusador, quedó demostrada en el Escrito de los Argumentos de Defensa y se constata, así:

En la página 21 de 36 del Auto de Imputación Mixta N.º001 de fecha 26 de febrero de 2024:

413

Dicha compra presenta presunto detrimento patrimonial al Municipio, toda vez que por parte del de la Administración vigente para la época de los hechos, no se buscó un avalúo comercial del bien inmueble que favoreciera los intereses de Municipio y preservara los recursos institucionales y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador folio 35) y no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por tanto prefirió realizarlo ante un evaluador privado, el cual presenta sobrevaloración del precio del valor comercial, además de que presuntamente para la época del avalúo no se encontraba certificado por Fedelonjas, según certificación obrante a folio 35.

Captura N. °8 aportada en el escrito de los ARGUMENTOS DE DEFENSA

Se lee en dicho apartado:

(..) "y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador folio 35). (...)"

También, en la página 25 de 36 del Auto de Imputación Mixta N. °001 de fecha 26 de febrero de 2024:

En este sentido, se tiene el presunto sobrecosto producto del pago del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, comprado por el Municipio de El Paujil, Caquetá, sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado, con quien presuntamente para la época del avalúo no estaba certificado para realizarlo, como tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante Fedelonjas, condujeron a determinarse detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá.

Captura N. °9 aportada en el escrito de los ARGUMENTOS DE DEFENSA

Se lee en dicho apartado:

(...) y en cambio optar por la compra el mencionado bien producto un avalúo comercial privado con quién presuntamente para la época del Avalúo no estaba certificado para realizarlo" (...)

Así mismo, en la página 34 de 36 del Auto de Imputación Mixta N. °001 de fecha 26 de febrero de 2024:

44

**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA**

Nit. 891.190.246-1

con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, de propiedad del señor Heriberto Arcila Puentes, evidenciándose presunto sobrecosto en la compra del mismo, toda que el Municipio de El Paujil no acudió al avalúo comercial realizado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en su defecto lo hizo a través de avalúo particular que si bien está facultado por la Ley, presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial ni tampoco se evidencia haber acudido a Fedelonjas para que determinara la persona idónea para que lo realizara; sin embargo consultado por la Contraloría Departamental del Caquetá el avalúo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi se evidencia un sobrecosto en cuantía de Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte.,

Captura N. °10 aportada en el escrito de los ARGUMENTOS DE DEFENSA

Se lee en dicho apartado:

(...) presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial" (...)

Que se diga de manera reiterativa por parte del Ente Acusador, como se expuso en los Argumentos de Defensa, que "PRESUNTAMENTE SE CONTRATÓ A UNA PERSONA NO CERTIFICADA AL MOMENTO DE RENDIR EL AVALÚO COMERCIAL", pese a que se demostró que obra en el expediente certificación que da cuenta de lo contrario, es una formulación que adolece de responsabilidad, que pretende hacer caer en error al JUEZ y que da cuenta de un actuar temerario por cuanto carece de sustento, incluso legal, como así se demostró en punto de la legalidad de lo actuado. Basta precisar, que el PERITO AVALUADOR, estaba acreditado **COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES y contaba con Registro en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A., con Matrícula R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012**, fecha posterior en todo caso, a la fecha en la cual fuera elaborado y presentado dicho avalúo, con lo cual, no sólo se encontraba el Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, acreditado, sino también, habilitado para tales efectos, como así lo exigía el contenido normativo de carácter reglamentario vigente para la época de los hechos.

De ello dio cuenta el Suscrito en su escrito de Argumentos de Defensa, presentado ante la Contraloría Departamental del Caquetá, el día 11 de marzo de 2024, en donde se aportó CAPTURA DE IMAGEN N.º 12, tomada de a documento que obra en el expediente y que

corresponde a Certificación que obra en el mismo y en la cual se constata, como fuera referido, la ACREDITACIÓN y HABILITACIÓN del PERITO AVALUADOR, así:

352


CORPORACIÓN DE COLOMBIA

Corporación de Colombia

El Presidente de la Junta Directiva, con base en las matrículas de la
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS
"CORPOLONJAS DE COLOMBIA"

CERTIFICA QUE:

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
C. C. 10.541.581. Popayán

Presentó solicitud de inscripción en esta Lonja, la cual fue estudiada y aprobada por el Consejo Directivo de Avaluadores de CORPOLONJAS DE COLOMBIA Bogotá, D.C., comprobándose su idoneidad como Perito Avaluador Profesional, ejerciendo en las siguientes áreas:

INMUEBLES URBANOS: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA
INMUEBLES RURALES: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA
AVALUOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
AVALUOS MASIVOS - ESPECIALES
AVALUOS ESPECIALES: RONDAS, HUMEDALES, LOTES CUÑA,
SEMOVIENTES Y VALOR DE PLOTTAGE

Certifica además que es Miembro Activo de esta Entidad Gremial desde el año 2004 y le fue otorgado el Registro-Matrícula No. **R.N.A/C.C-25-1685**, que respalda esta determinación con vigencia hasta el día 31 de Julio de 2012, lo cual le faculta para avalar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional.

Se expide en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de Agosto de 2010


PATRICIA GONZALEZ GUIO
Gerente Administrativa
Junta Directiva

5006 NACIONAL: Carrera 11 No. 95 - 25 Oficina 309B - P.O.B. 480 50 50 Fax: 956 58 58
Celular: 310 571 12 00 - 300 785 50 44 - 315 315 4305 - E-mail: redinmoco@netnet.com
Bogotá D.C. - Colombia



Captura N.º 12 aportada en el escrito de los ARGUMENTOS DE DEFENSA

Si bien, ha querido la DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la honorable CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, generar confusión a partir de una impresión distinta y apartada de la verdad y la realidad respecto de la IDONEIDAD PROFESIONAL DEL PERITO AVALUADOR FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO, lo cierto es que dicha CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE y

415

por razones que desconoce el SUSCRITO, ha querido la honorable **Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, desconocer el valor probatorio de su contenido.**

Nota con franqueza el SUSCRITO DEFENSOR de OFICIO, que no se están valorando en conjunto todos los medios de prueba que contiene el expediente y que, en cambio, sólo se están teniendo en cuenta, al parecer, aquellos que convienen al proceso y, sobre todo, a las intenciones y motivaciones del Ente Acusador.

iii) Señala el honorable Despacho del Ente Acusador, presuntas irregularidades en el Avalúo comercial elaborado y presentado por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**. Respecto del contenido de dicho avalúo y la forma como se llevó a cabo para establecer el valor comercial del predio, objeto de controversia, me permito de manera deferente, recabar que:

- ✓ **Mencionado PROFESIONAL**, en efecto, el día 10 de mayo de 2012, a solicitud de la Alcaldía Municipal del Paujil, presentó informe de **AVALÚO DE PREDIO RURAL**, con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, ubicado en la vereda el Borugo del mismo municipio. En dicho informe destacan, entre otros aspectos, el apartado **"N.º 5 INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS – 5.1 METODOLOGÍA – COMPARACIÓN DE MERCADOS"**, en donde manifiesta el Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO**, lo siguiente:

"Para efectos de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso, estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3 variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación. el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior al 7.5%"

- ✓ Seguido a ello, aprecia el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, cuadro estadístico contenido en el apartado **"5.2 CUADRO ESTADÍSTICO"**, en el cual se observa el Ingeniero **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, consultó el valor por Hectárea con los señores **VÍCTOR GÓMEZ, LÁZARO RIVERA y ALEX MOISES**. Que los valores aportados por éstos, más el que aporta el PERITO, dan cuenta de un valor

estimado de \$39.250.000 por Hectárea, al cual, se le suman aquellos con ocasión de las mejoras, en virtud de los 1334 metros de Cerca Eléctrica en Alambre Acerado, por valor de \$2.001.000 y \$2.500.000, por los pastos mejorados, presentes en CINCO (5) de las SEIS (6) hectáreas del predio, como así se establece en el apartado "**6. MEJORAS**" - **6.1 CERCAS y 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO.**

- ✓ Es de todo lo anterior, que se concluye el "**RESUMEN DE VALORES PARCIALES**", en donde se constata el valor total del PREDIO objeto de dicho AVALÚO, por cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/Cte. COP. Es decir, CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/Cte. COP, por hectárea, lo cual es congruente con el análisis del mercado realizado por el PERITO AVALUADOR, de manera directa en la ZONA y que concuerda, además, con lo aportado por el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 6.681.291 de EL PAUJIL-CAQUETÁ, y quien fuera el propietario de la extensión de predio rural, objeto de compraventa con la Alcaldía Municipal del Paujil, como así obra en escritura pública N.º3078, debidamente registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos en Folio de Matrícula Inmobiliaria 420-109661, **quien manifestó en VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA rendida el día 06 de febrero de 2024 a las 09:15 a.m., lo siguiente:**

"Preguntado a: A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial

CONTESTÓ: "No señor eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 millones por hectárea".

Manifestación bajo la gravedad de juramento, que corrobora, además, que la Administración en cabeza de mi PROHIJADO, "**obró de conformidad con los valores contenidos en dicho avalúo y no aceptó o pactó un valor superior al allí establecido, esto es DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$240.000.000) DE PESOS M/Cte.**

- ✓ Nótese, también, que el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, consideró que el valor de cada hectárea de la que fuera su propiedad, correspondía a CINCUENTA MILLONES DE PESOS (**\$50.000.000**) M/Cte. COP. Por su parte, el estudio de mercado adelantado por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL y contenido en el avalúo presentado a la Administración Municipal, arrojó un valor en cuantía que daba cuenta de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/Cte. COP, menos

por hectárea, respecto del precio considerado por su propietario y que en tal sentido, la Administración municipal, en cuanto no pagó por el predio en mención, suma distinta a la contenida en el Avalúo realizado, le ahorró al municipio la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000).

- ✓ Tal ahorro, además de controvertir la gestión antieconómica predicada por el Ente Acusador, de conformidad con lo contenido en el Artículo 2° del Decreto Reglamentario 1420 de 1998, demuestra que tanto el comprador como el vendedor actuaron libremente y que, en todo caso, EL COMPRADOR, se sujetó a los valores señalados en dicho Avalúo. Que así se haya pactado, es prueba fehaciente e incontestable, que el Valor comercial del inmueble, así establecido en dicho avalúo, cumple con los presupuestos contenidos en el Artículo 2° del Decreto Reglamentario N.º 1420 de 1998, por cuanto "Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien"

iv) A pesar de lo anterior, la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, otorga mérito suficiente al AVALÚO aportado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual:

- ✓ Dista de la realidad del mercado en la zona, por cuanto éste, refiere que el AVALÚO de dicho predio, corresponde a la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/Cte. COP, ello**, en consideración del "dato de mercado número 10", contenido en la "página 14 de su INFORME DE AVALÚO COMERCIAL RURAL".
- ✓ No fue realizado de manera DIRECTA, por cuanto, como así se advierte en su estudio en la página 12, "**la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA, se llevó a cabo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET**", y es por intermedio de estos datos, que infiere "**NO ES NECESARIO REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DIRECTA**"

Ya en este punto, es menester insistir, **que obra mérito suficiente en la NECESIDAD DE LA PRUEBA SOLICITADA**, por cuanto, a pesar de las observaciones de consideración que ha advertido el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, que se consideran graves, puesto que al obrar como prueba por parte del Ente acusador un avalúo:

- i) Cuya **INVESTIGACIÓN ECONÓMICA para determinarlo, se llevó a cabo de manera indirecta a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET**
- ii) **Que no cumple con los presupuestos requeridos en punto del Artículo 2º del Decreto Reglamentario N.º 1420 de 1998, para determinar el VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE** y;
- iii) **a partir del cual, se establece la cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP, que hoy se estima como DETRIMENTO** patrimonial al estado y en contra del **MUNICIPIO DE EL PAUJIL** y de la cual se busca responsabilizar a mi PROHIJADO,

Se requiere con urgencia que sea EL INGENIERO CIVIL FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO, acreditado como PERITO PROFESIONAL EN AVALUÓS COMERCIALES y habilitado para tales efectos en la fecha de ocurrencia de los hechos, quien acuda al proceso para, entre otros:

- i. **Aclarar y explicar el por qué la diferencia del valor comercial establecido en su avalúo, respecto del valor comercial presentado por el IGAC.**
- ii. **Corroborar o desvirtuar con su testimonio la IDONEIDAD PROFESIONAL y su ACREDITACIÓN como PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, de la cual ha presumido de manera reiterativa y temeraria el Ente Acusador, "adolece el mismo".**
- iii. **Permitir al Titular de la Acción Fiscal, sobre todo al FALLADOR en su calidad de JUEZ, valorar el ejercicio de contradicción que representa su TESTIMONIO COMO PERITO AVALUADOR. Testimonio que, por presunto interés arbitrario e injusto, se le ha negado de manera tal a mi DEFENDIDO, al IMPEDIR EL DECRETO y PRÁCTICA del TESTIMONIO del INGENIERO CIVIL FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO, como prueba.**

He ahí, que se encuentra acreditada, **la pertinencia de dicha prueba**, en punto de la trascendencia del hecho que se pretende probar: "El Avalúo Comercial

417

realizado por el Perito Evaluador ya mencionado, la IDONEIDAD PROFESIONAL DEL MISMO, y la relación del TESTIMONIO REQUERIDO, con ese hecho. Por su parte, **es Conducente**, por cuanto EL TESTIMONIO corresponde a un medio de prueba establecido en el Código General del Proceso, con el que además, se busca el ejercicio de contradicción del Avalúo Presentado por la Contraloría Departamental del Caquetá y que fuera elaborado por el IGAC, y, por cuanto, finalmente, **es útil**, toda vez que la utilidad de la prueba, esto es, el TESTIMONIO del Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO, aportará al objeto de la Investigación por cuanto lo que este aporte al proceso, permitirá o servirá para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohiado, respecto de las conductas que se le IMPUTAN. (Ver. CSJ AP948-2018, 07 mar. 2018, [rad. 51882])
y Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00111-00(S) del honorable C.E)

Es que, como así lo tuvo a bien señalar el honorable DESPACHO en su Auto N°008, en mención a la Sentencia C-617 de 1996:

"Una de las principales garantías del debido proceso es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, "de ser oído(a) de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga"

Si bien, resulta su decisión, contradictoria de lo anterior, es claro que quien se beneficia con los fines que persigue, es ni más ni menos, que el TITULAR DE LA ACCIÓN FISCAL, puesto que, su inobservancia de lo que se ha demostrado y aportado, sumado a la NEGACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL SOLICITADA, conduce inexorablemente a una condena injusta, basada en lamentables yerros y vulneraciones a las prerrogativas, garantías y derechos que le asisten a mi PROHIADO.

Por parte de la Honorable, la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, **no sólo se le exigió a mi DEFENDIDO, que actuara conforme a ley derogada y distinta a las leyes preexistentes al acto que se le imputa**, también, se restó mérito al Avalúo en el cual basó sus actuaciones, así mismo, se atacó sin sustento probatorio alguno, la IDONEIDAD PROFESIONAL del PERITO AVALUADOR que lo realizó y a ello, se le debe sumar ahora, el hecho arbitrario e injusto, que representa la NEGACIÓN de las pruebas solicitadas por el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, a efectos del legítimo Derecho de Defensa y Contradicción que le asiste a mi Defendido, a instancias del proceso fiscal que se lleva en su contra.

Relevante resulta advertir, para finalizar, lo expresado por la honorable Corte Constitucional, en su sentencia T-544 de 2015, en punto de **la Vulneración al Debido Proceso, El Derecho a la Defensa y el Derecho de Contradicción:**

(...) 4.1.1. De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, **el derecho al debido proceso** tiene la finalidad de resguardar garantías básicas o esenciales de cualquier tipo de proceso, con el fin de "proteger a los ciudadanos contra los abusos o desviaciones de poder por parte de las autoridades, originadas no solo de las actuaciones procesales sino de las decisiones que se adopten y puedan afectar injustamente los derechos e intereses legítimos de aquellos". Algunos elementos consustanciales del debido proceso son: el derecho al juez natural, a presentar y controvertir pruebas, el derecho a la segunda instancia, al principio de legalidad, el derecho de defensa material y técnica; la publicidad de los procesos y las decisiones judiciales, la prohibición de jueces sin rostro o secretos.

4.1.2. **El derecho a la defensa** es una de las principales garantías del debido proceso y fue definida por esta Corporación como la "oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la otorga."

(...)

4.1.4. La doctrina ha establecido que **el derecho a la defensa** "concreta la garantía de la participación de los interlocutores en el discurso jurisdiccional, sobre todo para ejercer sus facultades de presentar argumentaciones y pruebas. De este modo, el derecho de defensa **garantiza la posibilidad de concurrir al proceso, hacerse parte en el mismo, defenderse, presentar alegatos y pruebas**. Cabe decir que este derecho fundamental **se concreta en dos derechos: en primero lugar el derecho de contradicción, y, en segundo lugar, el derecho a la defensa técnica.**"

4.1.5. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, **el derecho a la defensa** inicia con el acto procesal de informar al demandado de la existencia de un proceso judicial, por medio de las diferentes comunicaciones y notificaciones de las etapas del proceso, para que éste

418
pueda ejercer su defensa. **Defensa que se concreta particularmente en el derecho de contradicción.**

4.1.5.1. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, **el derecho de contradicción implica dos fenómenos diferentes, por un lado, la posibilidad de oponerse a las pruebas presentadas en su contra y, de otro lado, la facultad de la contradicción conlleva a un ejercicio legítimo de defensa directa, dirigido a que los argumentos o alegatos propios sean oídos en el proceso.**

No en vano, se establece en el artículo 29 de la constitución política de 1991, que:

"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable."

Y es que, a tenor de lo expuesto por parte de la honorable Corte Constitucional, la Finalidad del DEBIDO PROCESO, esto es, la finalidad de resguardar garantías básicas o esenciales de cualquier tipo de proceso, con el fin de "proteger a los ciudadanos contra los abusos o desviaciones de poder por parte de las autoridades, originadas no solo de las actuaciones procesales sino de las decisiones que se adopten y puedan afectar injustamente los derechos e intereses legítimos de aquellos", es resguardada por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14). Así como, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que considera que el derecho a la protección judicial, salvaguarda al ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder público, este "es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos".

De ahí que, como se ha advertido, si insiste la Honorable Contraloría Departamental del Caquetá en negar las pruebas solicitadas, en inadvertir lo corroborado con suficiente fundamento legal y elementos probatorios que obran en el expediente mismo, como así se expuso en el Escrito de Argumentos de

Defensa del proceso de la referencia, procurando con dicho comportamiento arbitrario, fallo desfavorable e injusto en contra de mi prohijado, vulnerando con ello entre otros: "el Derecho fundamental al Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y el Derecho a la Contradicción, que le asisten en punto, también, de la motivación contenida en el presente escrito de interposición de Recursos, habrá vulnerado entonces contenido que integra el Bloque de Constitucionalidad Colombiano en materia de Derechos Humanos. Hecho grave, susceptible por ello, en todo caso, de revisión ante estrados internacionales.

Es por ello que, advirtiéndolo además, que lo proferido en el AUTO N.º008 de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, para que se interponga solamente el Recurso de Reposición, es abiertamente contrario a lo establecido en el marco normativo de la Ley que rige la Acción Fiscal, el Suscrito Defensor de Oficio, con apego a la ley 610 de 2000 y con amparo en los Artículos 24 y 51 de la misma, considerando que el Auto en mención, de fecha 03 de abril de 2024, corresponde al DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS, interpone ante su DESPACHO:

- i) **EL RECURSO DE REPOSICIÓN** para que se reforme o revoque la decisión tomada en el AUTO ya mencionado por quien fuera proferido y;
- ii) en **SUBSIDIO, EL RECURSO DE APELACIÓN**, para que, en efecto, de no proceder la REPOSICIÓN, sea una instancia superior a la primera que lo profirió, quien revise y revoque lo actuado por **la misma**.

En tal sentido, habiendo recabado lo esgrimido, con el rigor y fundamento jurídico pertinentes, y en consideración de todo lo ARGÜIDO en el **APARTADO DE CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS**, el **SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO** del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, de manera respetuosa, se permite, en atención AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL RECURSO DE APELACIÓN, allegar las siguientes:

V. SOLICITUDES:

PRIMERA: En virtud del Derecho de Defensa y Contradicción contenido en el Artículo 29 Constitucional, también en consideración del Artículo 32 de la ley 610 de 2000, **SEAN VALORADOS**, en su conjunto, para su decisión, conforme a lo preceptuado en el artículo 26 ibidem, todas las capturas de imagen

419

incorporadas en el escrito de Argumentos de Defensa y los argumentos y consideraciones aportados en el mismo, así como los expresados en el presente escrito, con los cuales se busca la defensa real de las garantías, prerrogativas y derechos de orden constitucional y de Bloque de Constitucionalidad que le son inherentes al señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, *mi defendido* y que han sido vulnerados por el DESPACHO que profirió la IMPUTACIÓN, a instancias del Proceso de Responsabilidad Fiscal N.º 1148 que se adelanta en su contra.

SEGUNDA: SE REVOQUE el AUTO N.º 008, junto con la decisión allí proferida por la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá.

TERCERA: En consecuencia, Se **DECRETE** para su correspondiente **PRÁCTICA**, la prueba Testimonial solicitada en el Escrito de Argumentos de Defensa, en virtud de los argumentos y de las consideraciones expuestas, así:

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán. ***Su testimonio es conducente, pertinente y útil***, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el **INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES** entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N.º 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.º 312 312 73 02.

CUARTA: En caso de que no se acceda en **REPOSICIÓN** a las peticiones antes señaladas, le ruego proceder en **SUBSIDIO EL RECURSO DE APELACIÓN**, teniéndose como argumentos, los mismos acá expuestos en el apartado de Consideraciones y Argumentos del presente Documento.

VI. PRUEBAS:

Documentales:

Los documentos a que se hace mención y también los mencionados en el Escrito de los Argumentos de Defensa, cuyas capturas de imagen, desde la Captura N.º 1 hasta la N.º 30, en total treinta (30) capturas, fueron incorporadas en el mismo, cuya valoración se solicita, más no su práctica, pues fueron tomadas del expediente que reposa en el Despacho de la Contraloría Departamental y se encuentran por tanto dichos documentos, contenidos en el EXPEDIENTE del PROCESO de la Referencia PRF-1148, razón por la cual, los mismos, no se adjuntan en el presente apartado.

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el *INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES* entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIBADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohibido.


De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N.º 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.º 312 312 73 02.

VII. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificación, a través de alguno de los siguientes medios:

- 420
- Correo electrónico: john.ortiz@udla.edu.co
 - Teléfono: 3185494034
 - Dirección: Carrera 11 No. 5-69 Consultorio Jurídico, Campus Sede-Centro
Universidad de la Amazonia, Florencia-Caquetá.

Respetuosamente,



JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR

Defensor de Oficio

Cédula de ciudadanía 11.449.452 de Facatativá Cundinamarca

Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonia

Adscrito al Consultorio Jurídico Código Estudiantil N°1910087014

Número de Celular 318 549 4034 e-mail Institucional: john.ortiz@udla.edu.co



DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 12 de abril del 2024

Proceso de Responsabilidad Fiscal No.1148

Que el día 11 de abril del 2024 vencieron los términos para **PRESENTAR RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACION** frente al Auto N° 008 del 03 de abril del 2024 por medio del cual se resuelve la solicitud de practica de pruebas del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario de Única Instancia N° 1148 debidamente notificado en el estado N° 021 del 04 de abril del 2024 en términos el estudiante **JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR** Defensor de oficio del señor **RODRIGO ANDRES CATRO BETANCOURTH**.

Que el día 11 de abril del 2024 vencieron en silencio los términos para **PRESENTAR RECURSO DE REPOSICIÓN** frente al Auto N° 008 del 03 de abril del 2024 por medio del cual se resuelve la solicitud de practica de pruebas del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario de Única Instancia N° 1148 debidamente notificado en el estado N° 021 del 04 de abril del 2024, para la **COMPAÑÍA DE SEGUROS SOLIDARIO DE COLOMBIA**.

Conste


LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS**

422



Nit. 891.190.246-1

AUTO No. 009

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN FRENTE AL AUTO No. 008 A TRAVÉS DEL CUAL SE DECIDIÓ SOBRE LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO DE ÚNICA INSTANCIA No. 1148

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

| | |
|-------------------------------|--|
| PRESUNTOS RESPONSABLES | RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH C.C. 17.691.533 HERIBERTO ARCILA PUENTES C.C. 6.681.291 |
| ENTIDAD AFECTADA | MUNICIPIO DE EL PAUJIL |
| PRESUNTO DETRIMENTO | \$96.032.548 (Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos) |
| POLIZA No. | 930-73-994000000032 |
| ASEGURADORA | Compañía de Seguros Solidaria de Colombia |

En la ciudad de Florencia Caquetá, a los diecisiete (17) del mes de abril de 2024, la suscrita Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en ejercicio de la competencia establecida en la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 229 del 25 de agosto del 2015, procede a dictar el presente auto teniendo en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

Originó la presente investigación el memorando CF- 066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

De acuerdo con el traslado de la denuncia D-003-16, se estableció que el Municipio de El Paujil suscribió el Contrato de Compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila puentes, en cuantía de Doscientos cuarenta Millones de pesos (\$240.000.000) M/Cte., con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

El día 18 de septiembre de 2018, a través del Auto No. 025, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal procedió a dar apertura al presente proceso en contra de los señores: **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH**, identificado con la cédula de ciudadanía No.



Nit. 891.190.246-1

17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien se desempeñó para época de ocurrencia de los hechos como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; de acuerdo con el Acta de posesión No. 008 del 31 de diciembre de 2011 (folio 204), y **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, expedida en El Paujil, Caquetá; quien se desempeñó para la época de los hechos como Contratista (vendedor) del Municipio de El Paujil, Caquetá (folio 228 al 233 y reversos).

El día veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en ejercicio de las competencias establecidas en la Resolución No. 229 del 25 de agosto de 2015, procedió a dictar **AUTO DE IMPUTACIÓN No. 001 DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO No. 1148** (folio 245 al 330).

Mediante Resolución No. 114 de fecha 21 de marzo de 2024, se surtió grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad fiscal ordinario de única instancia No. 1148, cuya decisión fue archivo respecto del investigado Heriberto Arcila Puentes (folio 370 al 385).

Posteriormente el día 11 de marzo de 2024, el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el estudiante de Derecho **JOHN EDWIN ORTIZ CUÉLLAR** presenta escrito con argumentos de defensa y solicitud de pruebas frente al Auto de imputación No. 001 del 26 de febrero de 2024, de la siguiente manera (folio 366 al 367 y reversos):

“Documentales:

Los documentos mencionados, cuyas capturas de imagen, desde la Captura N.º1 hasta la N.º 30, en total treinta (30) capturas, fueron incorporadas en el presente escrito De Argumentos de Defensa cuya valoración se solicita, más no su práctica, pues fueron tomadas del expediente que reposa en el Despacho de la Contraloría Departamental y se encuentran por tanto dichos documentos, contenidos en el EXPEDIENTE del PROCESO de la Referencia PRF-1148, razón por la cual, los mismos, no se adjuntan en el presente apartado.

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º. 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el **INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES** entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e

424



Nit. 891.190.246-1

incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N°. 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.º 312 312 73 02.”

Mediante Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, se resolvió solicitud de pruebas solicitadas por el defensor de oficio dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 1148 (folio 390 al 396).

Mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2024, el defensor de oficio del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt, el estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar, presentó Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación en términos frente al Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, que negó la práctica de pruebas (folio 401 al 420 y reversos).

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 267, 268 y 271 de la Constitución Política de Colombia los cuales establecen que la vigilancia del Control Fiscal de la Administración Pública corresponde a las Contralorías.
- Artículos 29 y 209 de la Constitución Política los cuales establecen los principios con los que se debe adelantar el trámite de la acción fiscal.
- Artículos 36 y siguientes de la Ley 610 de 2000.
- Artículos 106 y 109 de la Ley 1474 de 2011.

3. ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

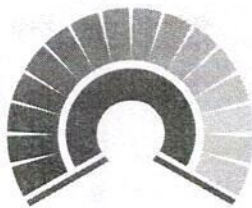
MUNICIPIO EL PAUJIL, CAQUETÁ NIT: 800.095.763-0.

4. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE

El día 11 de abril de 2024, el Estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar, en calidad de **defensor de oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETACOURT**, presentó y sustentó el respectivo recurso de Reposición en el que manifestó entre otros apartes lo siguiente (folios 401 al 420 y reversos):

“(…) Al respecto, debo manifestar que la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, con su decisión, inadvierte el contenido normativo, jurisprudencial, constitucional y del Bloque de Constitucionalidad en materia de Derechos Humanos, que fue puesto de presente en

425



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

los ARGUMENTOS DE DEFENSA presentados, así como los postulados de la necesidad de la prueba, la petición de pruebas y la importancia de éstas, respecto del debido Proceso en punto del ejercicio del Derecho de Defensa y Derecho de Contradicción, como garantías que le asisten a mi Defendido.

Debe advertirse que la decisión proferida en el **AUTO No.008**, de fecha 03 de abril de 2024, que, en su parte resolutoria:

i) NIEGA, sin mayor sustento, la prueba testimonial solicitada por el SUSCRITO, por considerarla: "inconducente, impertinente e inútil y;

ii) Refiere que, contra tal decisión, sólo es procedente el Recurso de Reposición ante la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, por tratarse de Proceso de única instancia...

Desconoce de manera flagrante, contenidos normativos en materia Procesal para la valoración de la prueba y del Debido Proceso, que al ser inobservados por el Ente Acusador, vulneran en manera grave, por un lado, el ejercicio de los derechos de Defensa y Contradicción que deben acudir a instancias del Debido Proceso como garantía y derecho Fundamental que le asiste a mi PROHIJADO, en punto de las Garantías y el Derecho a la Protección Judicial, reconocido y expresado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 25), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14) y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y de otro, los Artículos 22, 23, 24, 26 y 32 de la Ley 610 de 2000, así como, en virtud de remisión normativa así contenida en el Artículo 66 de la Ley 610 de 2000, las consagradas en los Artículos 164, 165, 167, 169, 171, 173 y 176 del Código General del Proceso, respecto del "principio de unidad de la prueba".

Dicho principio, previsto en los Artículos 26 de la Ley 610 de 2000 y 176 del Código General del Proceso, en virtud del cual "las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos", por cuanto, como así lo ha señalado la honorable Corte Constitucional, en sentencia **No. C-830 de 2002**:

"en el campo probatorio rige otro importante principio denominado "unidad de la prueba", en virtud del cual se considera que todas las pruebas del proceso forman una unidad y por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto, esto es, en forma integral. La razón de ser del mismo es que la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es suficiente para establecer la verdad de los hechos y se requiere, además de ella, efectuar la confrontación de tales medios para establecer sus



Nit. 891.190.246-1

concordancias y divergencias y lograr conclusiones fundadas y claras sobre aquella verdad.

Así mismo, desconoce el contenido normativo referente a la procedencia de los recursos contra el Auto que rechaza la solicitud de pruebas, como así se consagra en los Artículos 24 y 51 de la Ley 610 de 2000, toda vez que:

i) La denegación total o parcial de las pruebas solicitadas o allegadas por parte del Investigado, deberá ser motivada y notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación. **(Artículo 24 Ley 610 de 2000)**

ii) Contra el auto que rechaza la solicitud de pruebas procederán los recursos de reposición y apelación. **(Artículo 51 Ley 610 de 2000)**

Razones todas las anteriores, por las cuales, procedo, amparado, especialmente en lo contenido en los artículos 24 y 51 de la ley 610 de 2000 y recabando los argumentos ya esgrimidos, a interponer EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL RECURSO DE APELACIÓN, siendo procedente éste último, en contra de las decisiones tomadas en el AUTO No.008, de fecha 03 de abril de 2024, de conformidad con los siguientes: (...)

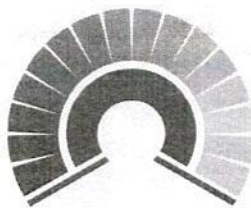
(...) IV. CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS:

Con relación a DEBIDO PROCESO, el cual se hace extensible y debe aplicarse a toda clase de actuaciones administrativas y tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, en sentencia C-341 de 2014, la honorable Corte Constitucional, ha sido expresa en señalar:

5.3. El derecho al debido proceso:

5.3.1. El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas". La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la extensión del debido proceso a las actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones, "en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad

429



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses" 1

1 Sentencia T-442 de 1992.

5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.



Nit. 891.190.246-1

Muy a pesar de lo anterior y advirtiéndose circunstancia fundada y, ciertamente inconstitucional, en desmedro de las garantías que le asisten a mi DEFENDIDO, el Despacho de la Honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, procedió, en cambio, a Negar la Solicitud de Prueba Testimonial que fuera elevada por el SUSCRITO en el Escrito de Argumentos de Defensa, en los siguientes términos:

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

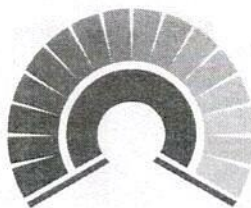
De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N.º 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.º 312 312 73 02.

Nótese que, en tal solicitud, se cumplen los requisitos exigidos y contenidos en el Código General del Proceso, el cual exige en su Artículo 212, que “Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba”.

En el Artículo 165 del Código General del Proceso, además, se establece que el TESTIMONIO DE TERCEROS, es un MEDIO DE PRUEBA.

Como así se expresó en el escrito de Argumentos de Defensa, obra en el Expediente Avalúo adelantado por el IGAC y cuya INVESTIGACIÓN ECONÓMICA para determinar el MERCADO, se llevó a cabo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET.

Así mismo, reposa en el Expediente, AVALÚO DE PREDIO RURAL, realizado por el Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, persona natural de carácter privado



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

certificado por CORPOLONJAS DE COLOMBIA, debidamente registrado en el Registro Nacional de Avaluadores con MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE para la fecha en que éste, realizó tal Avalúo y quien se encontraba habilitado COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA. Aprobación certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004. Dicho Informe de Avalúo de predios y/o Mejoras Rurales, a diferencia del realizado por el IGAC, cuenta con un estudio de mercado directo, lo cual, incide en la veracidad de los datos que en su informe incorpora y que se constatan en el apartado "No. 5 INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS – 5.1 METODOLOGÍA – COMPARACIÓN DE MERCADOS", en el cuadro estadístico contenido en el apartado "5.2 CUADRO ESTADÍSTICO", en el apartado "6.MEJORAS"- 6.1 CERCAS y 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO, que conllevan al resumen de valores parciales y a determinar el valor del avalúo, así expresado en el "RESUMEN DE VALORES PARCIALES" de dicho INFORME.

Debo decir, a contrario sensu de lo expresado por la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, que lo anterior, es razón suficiente para que se apruebe, decrete y practique el TESTIMONIO del PERITO AVALUADOR. El TESTIMONIO del Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, es conducente, pertinente y útil, "poque va a permitir verificar no sólo la información contenida en el Avalúo realizado, las razones técnicas, fácticas y jurídicas a través de las cuales llegó a determinar el avalúo comercial del bien inmueble objeto de controversia, sino, que además, permitirá a mi PROHIJADO, en punto de las consideraciones que éste TESTIMONIO aporte al fallador, controvertir el PERITAJE APORTADO por la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ y porque las respuestas y aportes al proceso, que haga el señor MARTÍNEZ BRAVO, COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA, registrado en el Registro Nacional de Avaluadores con MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE para la fecha en que éste, realizó tal Avalúo, pueden servir para contradecir el avalúo presentado por el ENTE ACUSADOR y para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

Es posible que, advirtiendo tal situación, haya negado la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, la solicitud realizada por el SUSCRITO en su escrito de ARGUMENTOS DE DEFENSA.

Encuentra lamentablemente el suscrito Defensor de Oficio, que el Despacho no ofrece en su Auto No.008, de fecha 03 de abril de 2024, motivación suficiente para NEGAR LA



Nit. 891.190.246-1

SOLICITUD de la prueba testimonial Solicitada, más que la simple afirmación ya referida, para concluir que la misma, es inconducente, impertinente e inútil.

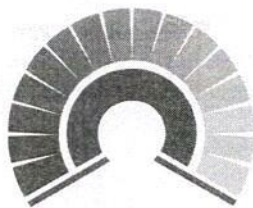
Advierte el SUSCRITO en el mismo sentido, que la DECISIÓN proferida por honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en punto de la importancia que reviste tal TESTIMONIO, es una decisión arbitraria por parte del despacho, puesto que "materializa una clara vulneración al Derecho a la Defensa y Contradicción que le asiste a mi prohijado como verdadera garantía procesal", por cuanto lo que se pretende a través del TESTIMONIO del Perito AVALUADOR, es la búsqueda de la verdad. No sólo valorar y dar fe de los procedimientos, las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido, sino, que se exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué se estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC, junto con todas aquellas preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

*Tal ejercicio, conlleva a que nos refiera el PERITO EVALUADOR, en su saber, por ejemplo, por qué tal diferencia en el valor del avalúo comercial y si es que la forma en la que fue adelantada la **INVESTIGACIÓN ECONÓMICA para determinar el MERCADO, por parte del IGAC, esto es, de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET, puede ser la razón de ello.***

En síntesis, le acude a mi DEFENDIDO, que pueda en pleno ejercicio de su Derecho de Defensa, contar con los procedimientos y mecanismos que permitan el efectivo ejercicio de su Derecho de contradicción, en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos materia de investigación y por los cuales se le ha imputado. No en vano las consideraciones respecto de la carga de la prueba y el deber que le acude al JUEZ, tanto, en punto del Artículo 42 del C.G.P, como EN EL DECRETO Y LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS, pruebas que en éste caso, por alguna razón que tampoco se explica el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, pese a que las ha conocido la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, nunca las consideró o decretó de oficio, ni, como en efecto se observa en lo actuado dentro del Proceso de la referencia, tampoco vinculó a todos los demás involucrados a efectos de la búsqueda de la verdad que debe acudir a instancias de la Acción Fiscal y la protección del patrimonio público que la misma persigue.

Hasta ahora, en lo actuado por la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, como en efecto se expuso en los argumentos de Defensa, en punto de lo consignado en Auto de Imputación Mixta N. 0001 de fecha 26 de febrero de 2024, se advierte:

431



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

i) Haberse imputado Responsabilidad Fiscal en contra de mi Prohijado por parte de la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, con sustento en normatividad cuya aplicación no era exigible al momento de la ocurrencia de los hechos que ésta señala para determinarla, **motivando sus decisiones para IMPUTAR en procedimientos y reglas que se encontraban derogadas y que NO tenían por qué haber sido observadas por mi REPRESENTADO, IMPLICA**, advierte el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, **una clara vulneración al principio de Legalidad contenido en el Artículo 29 superior, por cuanto Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.**

Como fuera argüido la normatividad vigente para la época en la cual se realizó el avalúo (10 de mayo de 2012), es, la precitada en el Artículo 3.4.2.6.1. del Decreto Nacional 734 y no la referida por la Honorable Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en punto de las reglas contenidas en los Decretos 855 de 1994 y 4117 de 2006, por encontrarse Derogados desde el año 2008.

Circunstancia ésta, que puede corroborarse de conformidad con las siguientes capturas de imagen, las cuales fueron aportadas dentro del Escrito de los Argumentos de Defensa, como adelante se muestra: (...)

V. SOLICITUDES:

PRIMERA: En virtud del Derecho de Defensa y Contradicción contenido en el Artículo 29 Constitucional, también en consideración del Artículo 32 de la ley 610 de 2000, **SEAN VALORADOS**, en su conjunto, para su decisión, conforme a lo preceptuado en el artículo 26 ibidem, todas las capturas de imagen incorporadas en el escrito de Argumentos de Defensa y los argumentos y consideraciones aportados en el mismo, así como los expresados en el presente escrito, con los cuales se busca la defensa real de las garantías, prerrogativas y derechos de orden constitucional y de Bloque de Constitucionalidad que le son inherentes al señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, mi defendido y que han sido vulnerados por el DESPACHO que profirió la IMPUTACIÓN, a instancias del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 que se adelanta en su contra.

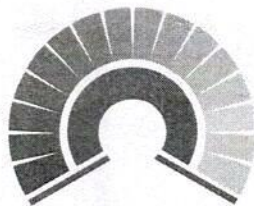
SEGUNDA: SE REVOQUE el AUTO No. 008, junto con la decisión allí proferida por la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá.

TERCERA: En consecuencia, Se **DECRETE** para su correspondiente **PRÁCTICA**, la prueba Testimonial solicitada en el Escrito de Argumentos de Defensa, en virtud de los argumentos y de las consideraciones expuestas, así:

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda

432



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N.o 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.o 312 312 73 02.

CUARTA: En caso de que no se acceda en **REPOSICIÓN** a las peticiones antes señaladas, le ruego proceder en **SUBSIDIO EL RECURSO DE APELACIÓN**, teniéndose como argumentos, los mismos acá expuestos en el apartado de Consideraciones y Argumentos del presente Documento.

VI. PRUEBAS:

Documentales:

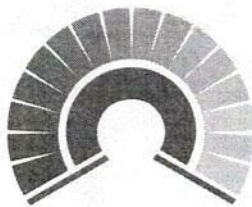
Los documentos a que se hace mención y también los mencionados en el Escrito de los Argumentos de Defensa, cuyas capturas de imagen, desde la Captura N.o1 hasta la N.o 30, en total treinta (30) capturas, fueron incorporadas en el mismo, cuya valoración se solicita, más no su práctica, pues fueron tomadas del expediente que reposa en el Despacho de la Contraloría Departamental y se encuentran por tanto dichos documentos, contenidos en el EXPEDIENTE del PROCESO de la Referencia PRF-1148, razón por la cual, los mismos, no se adjuntan en el presente apartado.

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.o 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la

433



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis No. 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado No. 312 312 73 02.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Al respecto cabe decir que la conducencia es «la idoneidad legal que tiene la prueba para demostrar determinado hecho» y la pertinencia «es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste»; pero también puede ocurrir que las pruebas conducentes y pertinentes pueden ser rechazadas por resultar inútiles para el proceso, así «la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que éste solo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo¹».

Que la vigilancia de la Gestión Fiscal tiene como fin la protección del patrimonio público, la transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado. Estas medidas se enmarcan por la concepción del Estado social de derecho, fundado en la prevalencia del interés general, y propenden por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Que el objeto del Control Fiscal es el de asegurar que los recursos del Estado sean manejados y utilizados adecuadamente, para lograr los propósitos esenciales previstos por el constituyente (Constitución Política art. 2º). Para el cumplimiento de este objeto, la vigilancia de la gestión comprende las operaciones fiscales de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, considerando la forma y los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución Política.

Que la Constitución Política de 1991 consagró expresamente el derecho al debido proceso, erigiéndolo como parte de los derechos fundamentales de las personas. Se trata de una garantía que permite a sus titulares conocer previamente las condiciones jurídicas dentro de las cuales serán tramitados sus asuntos, particularmente lo relacionado con la jurisdicción de la autoridad pública ante la cual se actúa, el ámbito de competencias de la misma, los términos dentro de los cuales deberán ser resueltas las peticiones y, en general, todos los aspectos de trámite idóneos como instrumento de protección ante el eventual abuso en que puedan incurrir los agentes del Estado o los particulares en determinados casos. Toda conducta estatal que desconozca los parámetros jurídicos que establecen las reglas de los procesos judiciales o administrativos debe ser censurada y, según el caso, declarada nula por la autoridad competente, pues con ella se habrá causado una grave alteración al vulnerar el orden constitucional. Tal es el sentido del artículo 29 de la Carta Política, que proscribe todo

¹ Rad. 161 – 4533 (IUS 154274 – 2009) Procuraduría General de la Nación



Nit. 891.190.246-1

comportamiento ajeno a las reglas del principio de legalidad, según el cual todas las conductas de los agentes públicos deben estar previamente señaladas en la ley o en el reglamento.

Que la responsabilidad fiscal se declara a través del trámite del proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones materiales y jurídicas que adelantan las contralorías con el fin de determinar la responsabilidad que le corresponde a los servidores públicos y a los particulares, por la administración o manejo irregulares de los dineros o bienes públicos. De este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público, por su conducta dolosa o culposa.

Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio.

Que en el Proceso de Responsabilidad Fiscal se pueden decretar y practicar pruebas, de conformidad con el artículo 165 de la ley 1564 de 2012, por remisión del artículo 66 de la Ley 610 de 2000, del artículo 40 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

Que la carga probatoria es una facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica. Para que los hechos, cosas y actos que se plantean en el proceso estén debidamente probados, se recurre a la práctica de pruebas. En materia de responsabilidad fiscal le corresponde al Estado, en cabeza del órgano de Control Fiscal correspondiente, probar los hechos investigados.

Que toda autoridad judicial y administrativa debe fundamentar sus decisiones en pruebas legalmente decretadas, oportuna y regularmente allegadas al expediente, las que deberán ser valoradas de acuerdo con la sana crítica.

Que el Código General del Proceso en su artículo 165 establece: "*MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez*".

435



Nit. 891.190.246-1

El debido proceso es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, (derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Una vez revisada la documentación que reposa en el expediente, este Despacho evidencia el Contrato de Compraventa No. 01, suscrito entre el Municipio de El Paujil, Caquetá y el vendedor Heriberto Arcila Puentes, tuvo como base para la determinación del precio el Avalúo realizado por el ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo, con fecha del informe avaluador el día 10 de mayo de 2012, el cual fijó un avalúo comercial establecido en el precio de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/CTE.**, que finalmente condujo a la compra del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 420-109661, materializándose la compraventa el día 27 de diciembre de 2014, por el valor mencionado, tal como lo establece el certificado de libertad y tradición obrante a folio 49 al 50.

Atendiendo el escrito con solicitud de Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación contra el Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, en el cual se decidió en el artículo primero, negar las pruebas solicitadas, por el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT.

"ARTÍCULO PRIMERO: NIÉGUENSE, las pruebas testimoniales solicitadas por el estudiante de Derecho John Edwin Ortiz Cuéllar, en calidad de defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, de conformidad con lo señalado en las consideraciones del presente auto."

Este Despacho procederá a realizar las siguientes consideraciones frente a lo peticionado por el recurrente, frente al Recurso de Reposición impetrado, pero no se concederá frente a la petición del Recurso de Apelación en subsidio, toda vez que el Auto de Imputación Mixta No.001 de fecha 26 de febrero de 2024, en cuyo acápite **11 INSTANCIA**, obrante a folio 328 al 329, se estableció:

"Una vez establecida la cuantía del detrimento al patrimonio del Estado en la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE., y teniendo en cuenta que el valor de la menor cuantía establecido para la contratación del Municipio de El Paujil, Caquetá, para la vigencia 2013, corresponde a la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$165.060.000) M/CTE., tal y como se evidencia en la certificación obrante a folio 200, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal se tramitará en UNICA INSTANCIA dado que el valor estimado del detrimento no supera el valor de la menor cuantía establecido para la contratación de la entidad afectada."

436



"SOLICITUDES:

PRIMERA: En virtud del Derecho de Defensa y Contradicción contenido en el Artículo 29 Constitucional, también en consideración del Artículo 32 de la ley 610 de 2000, **SEAN VALORADOS**, en su conjunto, para su decisión, conforme a lo preceptuado en el artículo 26 ibidem, todas las capturas de imagen incorporadas en el escrito de Argumentos de Defensa y los argumentos y consideraciones aportados en el mismo, así como los expresados en el presente escrito, con los cuales se busca la defensa real de las garantías, prerrogativas y derechos de orden constitucional y de Bloque de Constitucionalidad que le son inherentes al señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, mi defendido y que han sido vulnerados por el DESPACHO que profirió la IMPUTACIÓN, a instancias del Proceso de Responsabilidad Fiscal No.1148 que se adelanta en su contra.

SEGUNDA: SE REVOQUE el AUTO No. 008, junto con la decisión allí proferida por la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá.

Petición a la que este Despacho accede y por tanto se repondrá el Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, y por tanto se decretará la práctica de prueba testimonial solicitada, y en consecuencia se citará al ingeniero civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán, para que de conformidad con lo manifestado y propuesto por el recurrente se escuche en testimonio.

TERCERA: En consecuencia, Se **DECRETE** para su correspondiente **PRÁCTICA**, la prueba Testimonial solicitada en el Escrito de Argumentos de Defensa, en virtud de los argumentos y de las consideraciones expuestas, así:

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán. **Su testimonio es conducente, pertinente y útil**, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.



Nit. 891.190.246-1

De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis No. 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado No. 312 312 73 02.

Petición a la que accede este Despacho y por tanto, se determina recepcionar el testimonio del ingeniero Fernando Gustavo Martínez Bravo, quien fue la persona que elaboró y suscribió el informe de avalúo solicitado por el señor Alcalde de la época del Municipio de El Paujil del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 420-109661, y que a la postre fue el valor por el cual se realizó la compra del bien inmueble mencionado.

CUARTA: *En caso de que no se acceda en **REPOSICIÓN** a las peticiones antes señaladas, le ruego proceder en **SUBSIDIO EL RECURSO DE APELACIÓN**, teniéndose como argumentos, los mismos acá expuestos en el apartado de Consideraciones y Argumentos del presente Documento.*

Se concede el Recurso de Reposición solicitado en lo relacionado con recibir el testimonio del ingeniero Fernando Gustavo Martínez Bravo; pero negar por improcedente el Recurso de Apelación petitionado toda vez que nos encontramos frente a un Proceso de Responsabilidad de única Instancia tal como quedó definido en el Auto de Imputación No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024.

Prueba que este Despacho procederá a decretar mediante citación que se surtirá al ingeniero Fernando Gustavo Martínez Bravo a la dirección mencionada por la recurrente dirección de Oficina en la Carrera 30 bis No. 2E-38 de Florencia–Caquetá y número de Celular con Abonado No. 312 312 73 02. Se deja de presentarse que por tratarse de una dirección surtida hace aproximadamente 13 años, el sustanciador del presente proceso, contactó telefónicamente al mencionado ingeniero, en cuya conversación manifestó que ya no vive en Florencia, Caquetá; que vive en el Municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá; y suministró el correo electrónico fg.mb62@yahoo.es, de igual manera manifestó estar presto a rendir el testimonio y se concertó para el día 29 de abril de 2024, a las 8:00 am.

Prueba que este Despacho procederá a decretar con el objetivo del esclarecimiento de los hechos, mediante solicitud que se realizará al municipio de Cartagena del Chairá.

Por lo anterior, este Despacho decide apreciar decretar la solicitud de pruebas realizada por el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, toda vez que este medio probatorio se considera pertinente, útil y necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, de conformidad con la temática propuesta por el recurrente.



Nit. 891.190.246-1

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, y en consecuencia se acepta la prueba testimonial solicitada por el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar el siguiente medio de prueba impetrado por el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar:

1. **Recibir y recepcionar** el testimonio del ingeniero civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es **conducente, pertinente y útil**, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el **INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES** entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

ARTÍCULO TERCERO: Cítese al ingeniero civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán, para que se sirva rendir testimonio conforme a la rendición del Informe de Avalúos de Predios y/ Mejoras Rurales de fecha 10 de mayo de 2012, presentado al Municipio de El Paujil, Caquetá.

ARTÍCULO CUARTO: Establézcase el día 29 de abril de 2024, para la rendición del testimonio del ingeniero civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán, el día 29 de abril de 2024, a las 8:00 am., en el Edificio de la Gobernación del Caquetá, dirección Carrera 13 No. 15-00, piso 3, de conformidad con lo solicitado por el Estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar, quien actúa como defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT.

ARTÍCULO QUINTO: Por Secretaría de este Despacho **Oficiése** al ingeniero civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán, al correo electrónico fg.mb62@yahoo.es, para el día que comparezca el día 29 de abril de 2024, ante este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 15-00 Edificio de la Gobernación del Caquetá, para ser escuchado en la prueba testimonial solicitada por el



Nit. 891.190.246-1


estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar, defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT.

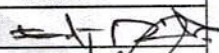

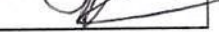
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE por Estado el contenido del presente auto en la forma y términos establecidos en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, y comuníquese así:

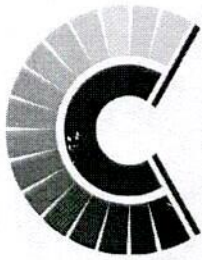
- 1) Al señor **Rodrigo Andrés Castro Betancourt**, al correo electrónico rodrigoandrescastro@hotmail.com, y a través de su defensor de oficio la estudiante de Derecho John Edwin Ortiz Cuéllar, al correo electrónico john.ortiz@udla.edu.co (folio 279).
- 2) Al tercero Civilmente Responsable la compañía de **Seguros Solidaria de Colombia** al correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Declarar improcedente el Recurso de Apelación impetrado por el Estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar, quien actúa como defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, toda que el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, es de Única Instancia, tal como se determinó en el Auto de Imputación N. 001 de fecha 26 de febrero de 2024.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, OFÍCIESE Y CÚMPLASE


HERLINDA JOHANA RIVERA RAMÍREZ
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

| | NOMBRE | CARGO | FECHA | FIRMA |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------|---|
| Elaboró: | Edgar Medina Pérez | Profesional Universitario | 17-04-24 |  |
| Revisó | Herlinda Johana Rivera Ramírez | DTRF. | 17-04-24 |  |
| Aprobó: | Herlinda Johana Rivera Ramírez | DTRF. | 17-04-24 |  |



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

ESTADO NO.026
FLORENCIA, CAQUETÁ DE 18 DEL ABRIL 2024

| NO. PROCESO | FECHA AUTO | CLASE DE AUTO | ENCAUSADO | CLASE DE PROCESO | RECURSOS QUE PROCEDE |
|-------------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1148 | 17/04/2024 | Auto por medio del cual se resuelve recurso de Reposición. | RODRIGO VIGIL - CASTRO BETANCOURTH | PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL | No procede |

El presente estado se fija en lugar visible de la Cartelera de la Contraloría Departamental del Caquetá y pagina Web, el día (18) de abril de 2024 a las 8:00 a.m.

Los sujetos procesales que requieran copia de esta providencia pueden solicitarlas a través del correo electrónico institucional info@contraloriadelcaqueta.gov.co, indicando el nombre del requirente, número de proceso y de la providencia que solicita. De manera excepcional aquellas personas que no posean o dispongan de un medio electrónico, podrán enviar la solicitud por correo electrónico o del domicilio para recibir respuesta

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

Secretaria

El presente estado se desfija a las 6:00 p.m., del día (18) de abril del 2024

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

Secretaria

EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Carrera 13 No 15 - 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia - Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

[@contraloriadelcaqueta](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co) [@ContraloriaDC](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co)

www.cdc.gov.co

440

Inicio Act. Estado Procesos Respiscal

Modificación: 2024/04/18 08:18:40 - Creación: 2024/04/18 06:18:40

Editar

Estado No 026 del 2024

Fecha de expedición: 2024/04/18 08:00:00

Compartir

Los sujetos procesales que requieran copia de esta providencia pueden solicitarlas a través del correo electrónico institucional Info@contraloriadelcaqueta.gov.co, indicando el nombre del requirente, número de proceso y de la providencia que solicita. De manera excepcional aquellas personas que no posean o dispongan de un medio electrónico, podrán enviar la solicitud por correo electrónico o del domicilio para recibir respuesta

Archivos para descargar



estado-026.pdf

249 Kb

¿Encontraste lo que buscabas?
¿Te pareció útil este contenido?

Si

No



PF- 831

Florencia, 19 de abril del 2024

Ingeniero:

FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO

Email: fg.mb62@yahoo.es

Ciudad

ASUNTO: Citación a Testimonio

Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

En desarrollo de las funciones Constitucionales y legales conferidas a este ente de control se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal ordinario N° 1148 en contra del implicado Rodrigo Andrés Castro Betancourt. Por hechos presuntamente con detrimento patrimonial en desarrollo de la compra del bien inmueble lote ubicado en el municipio de el paujil, del cual usted realizó el informe de avalúos de predios y/o mejoras rurales entregados a la administración municipal del municipio de el paujil, el cual dio origen a la compra del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 420-109661.

En desarrollo del proceso de responsabilidad mencionado el defensor de oficio del implicado Rodrigo Castro Betancourt, solicita prueba testimonial la cual debe ser rendida por su señoría.

Como consecuencia de lo anterior se decreta la prueba testimonial solicita por el defensor de oficio la cual debe ser rendida el día 29 de abril del 2024 a las 8:00am. Por tanto, favor acercarse a las instalaciones de la Contraloría Departamental del Caquetá ubicada en la Carrera 13 N° 15-00 del edificio de la gobernación del Caquetá piso 3, para llevar a cabo la prueba testimonial solicitada.

De antemano le agradecemos la colaboración y la asistencia a dicho testimonio.

cordial saludo.



LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

Secretaria

Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS**

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

www.cdc.gov.co

449

PF-831 CITACION A TESTIMONIO EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 1148

1 mensaje

Liesel Joullieth Correa Forero <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>

19 de abril de 2024, 10:30

Para: fg.mb62@yahoo.es

Ingeniero:

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO

Email: fg.mb62@yahoo.es

Ciudad

ASUNTO: Citación a Testimonio

Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Mediante el presente correo esta Contraloría Departamental del Caquetá lo cita a ser escuchado en el proceso mencionado en el asunto.

Cordialmente,

--




El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

SECRETARIA

Correo:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co

 **PF-831 CITACION A TESTIMONIO DEL PRF 1148_0001.pdf**
287K

COMUNICACION DEL AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 1148

1 mensaje

Liesel Joullieth Correa Forero <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>

19 de abril de 2024, 10:38

Para: rodrigoandrescastro@hotmail.com, john.ortiz@udla.edu.co, notificaciones@solidaria.com.co

Buenos días.

Mediante el presente correo esta Contraloría Departamental del Caquetá le comunica el auto mencionado en el asunto, el cual fue debidamente notificado en el estado N° 026 del 18 de abril del 2024.

Contra el mismo no procede recurso.

Se anexan 18 folios

Cordialmente

--



El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

SECRETARIA

Correo: lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co



AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION DEL PRF 1148_0001.pdf
6458K



Edgar Medina Perez <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

445

PRUEBA TESTIMONIAL SOLICITADA PRF 1148

1 mensaje

Edgar Medina Perez <emedina@contraloriadelcaqueta.gov.co>

25 de abril de 2024, 16:09

Para: John Edwin Ortiz Cuellar <john.ortiz@udla.edu.co>

Buenas tardes doctor Jhon Edwin:

De conformidad con la solicitud de prueba testimonial solicitada por su señoría para escuchar en testimonio al ingeniero Fernando Gustavo Martínez Bravo, dentro del PRF No. 1148, mediante Auto No. 009 de fecha 17 de abril de 2024, el cual fue notificado por estado No. 026 de fecha 17 de abril de 2024, y comunicado a su correo electrónico autorizado; este Despacho determinó la fecha del día 29 de abril de 2024, a las 8: 00 A.M., para realizar la diligencia testimonial referenciada.

Cordialmente,

EDGAR MEDINA PÉREZ
Abog. Sustanciador.



Nit. 891.190.246-1

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL SEÑOR FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 10.541.581 EXPEDIDA EN POPAYAN CAUCA, RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES EN LA BARRIO LAS AVENIDAS CARRERA 4 No. 2D 150, No. DE CELULAR 3123127302, DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO DE ÚNICA INSTANCIA No. 1148, CUYA ENTIDAD AFECTADA ES EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETÁ; PARA LA ÉPOCA DE LOS HECHOS. SOLICITUD REALIZADA POR EL ESTUDIANTE DE DERECHO JHON EDWIN ORTIZ CUÉLLAR, DEFENSOR DE OFICIO DEL IMPLICADO RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT.

En Florencia, Caquetá, a los veintinueve (29) día del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 8:22 am., se hizo presente el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo, identificado en el encabezamiento con el fin de que se procediera a realizar diligencia testimonial, testimonio a título personal de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 610 de 2000, en relación con los hechos materia investigación que cursa en este Ente de Control mediante **Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148**, aperturado el 18 de diciembre de 2019. En tal virtud se recibe el juramento de acuerdo con lo previsto en el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal, **ARTÍCULO 442. FALSO TESTIMONIO.** <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años; Presentó juramento SI, y se hace lectura del artículo 33 de la Constitución Política. En consecuencia, el Profesional Universitario de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal hace saber que tiene derecho de ser asistido por un Abogado el cual manifiesta que no. **PREGUNTADO:** Sobre sus generales de Ley **CONTESTÓ:** Mi nombre e identificación son como quedó escrito, nací en Popayán, Cauca, el día 27 de julio de 1962 de tengo 62 años de edad, estado civil unión libre, estudios realizados universitarios, ocupación actual ingeniero civil auxiliar en la administración vial grupo 2 INVIAS. **PREGUNTADO:** Sabe el motivo por el cual se encuentra rindiendo esta declaración testimonial.

PREGUNTAS ADICIONALES FORMULADAS POR LA DEFENSA DURANTE LA AUDIENCIA:

1. Conoce usted las razones por las cuales se le citó el día de hoy? SI.
2. ¿Cuál es su Profesión? INGENIERO CIVIL
3. ¿Cuenta usted con experiencia en AVALÚOS COMERCIALES DE PREDIOS RURALES? SI.
4. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como PERITO AVALUADOR DE PREDIOS RURALES? 25 AÑOS, DESDE EL AÑO 1992 HASTA EL AÑO 2017, anexo copia que verifica esa fecha de esta fecha.



Nit. 891.190.246-1

5. ¿Para el año 2012, usted se encontraba certificado por alguna entidad como Perito AVALUADOR PROFESIONAL? SI, CORPOLONJAS
6. ¿Es usted, PERITO PROFESIONAL AVALUADOR? SI ESTOY CERTIFICADO.
7. ¿Recuerda usted, haber elaborado, firmado y presentado avalúo de predio rural, solicitado por la alcaldía del municipio de El Paujil, el 10 de mayo del año 2012? SI.

A efectos de refrescar memoria, pondré de presente ante usted, COPIA DE DOS DOCUMENTOS en particular, que reposan en el EXPEDIENTE del Proceso Fiscal por el cual se le ha solicitado a usted su comparecencia el día de hoy ante este Despacho. Los documentos en cuestión, son:

- ✓ Copia de AVALÚO DE PREDIO RURAL con MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-88285, ubicado en la vereda el Borugo del Municipio de El Paujil, de fecha 10 de mayo de 2012 suscrito por usted, Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán a Solicitud de la Alcaldía Municipal de EL Paujil
- ✓ y una certificación expedida EL 9 DE agosto de 2010 por la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA y Firmada por la señora PATRICIA GONZÁLEZ GUIO, Gerente Administrativa de dicha Corporación.

Voy a pedirle que los lea con detenimiento y se sirva responder ante este Despacho, por favor, lo siguiente:

RESPECTO DE LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR CORPOLONJAS:

8. ¿Reconoce la certificación expedida EL 9 DE agosto de 2010 por la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA y Firmada por la señora PATRICIA GONZÁLEZ GUIO? SI.
9. ¿Lo contenido en dicho documento, se corresponde con la Realidad? SI
10. ¿Usted fue miembro de dicha Corporación? SI.
11. ¿Usted contaba para la fecha en que suscribió el Avalúo Solicitado por la Administración Municipal de El Paujil, esto es el 10 de mayo de 2012, con Registro Vigente Ante El Registro Nacional de Avaluadores de Colombia? SI.

RESPECTO DEL AVALÚO COMERCIAL:

12. ¿Reconoce el Documento Avalúo comercial de Predio Rural con MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-88285, ubicado en la vereda el Borugo del Municipio de El Paujil, suscrito el día 10 de mayo de 2012? SI.
13. ¿Es su firma la que obra en dicho documento? SI.



Nit. 891.190.246-1

- 448
14. ¿Reconoce usted, haber elaborado y presentado Avalúo comercial de Predio Rural con MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-88285 y de Extensión Superficial de 6 Hectáreas, ante la Administración Municipal, en cabeza del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT? SI.
 15. ¿Puede referir a este despacho, por favor, qué técnicas fueron empleadas en la elaboración de dicho avalúo? SI. Se utilizó el método de encuestas, que es una consulta a expertos evaluadores que conocen la región de acuerdo al artículo 9 de la metodología aplicada según la Resolución 620 de 2008 del IGAC, que es la que establece los procedimientos para avalúos en Colombia. De acuerdo al la Resolución No. 620, se aplicó el método de la encuesta cuando no hay punto de comparación u ofertas de compraventa en la zona. En la metodología se consulta según el artículo 9, y se consultaron a 3 expertos evaluadores, a ellos se les dio a conocer el estado del predio del inmueble según como lo reza la Resolución, una vez que se ha indicado el estado del predio se les toma las encuestas a los evaluadores y con estas encuestas se hace un estudio estadístico y con la cual se saca la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La variación estándar es el rango para conocer los valores finales de la encuesta acerca del precio final. Y el coeficiente de variación es una medida con el cual se le da validez a las encuestas. Según la Resolución No. 620 no debe pasarse del 7.5% para nuestro caso dio 5.25% es decir dio dentro del rango aceptable. Con esto ya se procede a realizar el valor de la hectárea. El valor de la hectárea sin mejoras ni cultivos, esto se anexan de acuerdo a los costos del mercado, para este se tuvo en cuenta la cerca eléctrica existente y cultivo de pastos mejorados y con la suma de estos dos ítems se establece el valor final.
 16. Qué cuantía estableció usted como VALOR DEL AVALÚO de Predio Rural con MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-88285, ubicado en la vereda el Borugo del Municipio de El Paujil. El total fue \$240.000.000.
 17. Señale por favor, las razones técnicas que le llevaron a establecer la Cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$240.000.000) DE PESOS, como el VALOR DEL AVALÚO para dicho predio. Anteriormente se explicó la forma a como se llegó a ese valor, siempre siguiendo la metodología de la Resolución No. 620 de 2008 del IGAC.
 18. ¿Conoce usted, quién es el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT? Sé que fue el alcalde del Municipio de El Paujil.
 19. Sírvasse responder ante este despacho, si dicho valor le fue sugerido por alguno de los funcionarios de la Administración Municipal, específicamente el Señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, ALCALDE DEL MUNICIPIO DEL PAUJIL, para el año 2012 o si corresponde a un estudio realizado con sustento legal, técnico o científico. Corresponde a un estudio técnico independiente.



Nit. 891.190.246-1

20. Sírvase responder, por favor, ¿le fue ofrecida a usted, alguna dádiva, beneficio o recibió a cambio compensación económica por parte de la Administración Municipal para que, en el AVALÚO PRESENTADO por usted, figurara dicho valor de Avalúo? NO.
21. ¿Usted, Ingeniero FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, ¿realizó dicho avalúo de manera directa en el lugar en donde se encontraba ubicado el bien inmueble con MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-88285? SI claro, es una parte de la mitología.

RESPECTO DEL AVALÚO DEL IGAC:

Obra en el expediente del presente proceso de Responsabilidad Fiscal, Avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, en el cual SE refiere que el AVALÚO de dicho predio, corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/Cte. COP. El Cual, le pondré de presente para que usted pueda revisarlo.

Respecto de Dicho Documento Ingeniero FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, como así se advierte en la página 12 del Avalúo realizado por el IGAC, se aprecia que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, utilizó un MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA INDIRECTA PARA DETERMINAR EL VALOR DEL TERRENO, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET".

22. Al respecto, puede usted Ingeniero GUSTAVO, a partir de su experiencia como PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, referir ante éste Despacho ¿Cuáles son las ventajas de realizar un AVALÚO DE MANERA DIRECTA, PARA DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL DEL BIEN OBJETO DE DICHO AVALÚO? La ventaja es que el valor que se va a definir se hace directamente sobre el predio como tal. Las comparativas se hacen sobre predios que no tienen las mismas características de distancia, no conozco lo predios tomados por el IGAC como comparativos.
23. Sírvase referir ante este despacho si EL MÉTODO PARA LA COMPARACIÓN DE MERCADOS, DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS realizado por usted EN SU AVALÚO DEL 10 de mayo de 2012, para determinar el valor del PREDIO RURAL con MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-88285 de Extensión Superficial de 6 Hectáreas ubicado en la vereda el Borugo de El Municipio de EL PAUJIL, se HIZO DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA. Se hizo de manera directa.
24. Dentro de su experiencia como PERITO AVALUADOR DE PREDIOS, considera usted que realizar UNA COMPARACIÓN DE MERCADO de manera INDIRECTA, a través de ofertas obtenidas en el sector y por Internet, para determinar el VALOR DE un TERRENO, puede conducir a la INEXACTITUD respecto del Avalúo comercial Obtenido. ¿Es decir, que dicho Avalúo no se corresponda con el valor real del Predio? Las



Nit. 891.190.246-1

metodologías que establecen el IGAC son válidas tanto la directas como las indirectas. De hecho, las encuestas se hacen cuando no existen puntos de comparación, sin embargo las encuestas directas son más objetivas porque se refieren al bien inmueble como tal no a inmuebles ubicados en diferentes sitios con características diferentes y diferentes usos, lo que nos puede dar un sesgo por encima o por debajo de las realizadas directamente. Los avalúos dependiendo de la fecha de realización pueden variar por factores diversos como el orden público, factores atmosféricos, invasiones, Por lo que no es recomendable comparar dos avalúos de fechas diferentes, porque no hay formula matemática que establezca esas depreciaciones.

PREGUNTA POR ESTE ENTE DE CONTROL:Cuál es el período de vigencia del avalúo de bien inmueble **CONTESTÓ:** Un (1) año.

PREGUNTADO: Sírvase manifestar si tiene algo más que agregar, corregir, suprimir, o enmendar a la presente diligencia. **CONTESTÓ:** No.

No siendo más el motivo de la presente diligencia se termina siendo las 09:12 a.m., del día 29 de abril de 2024.

EL TESTIGO:

FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO
C.C 10.541.581 de Popayán

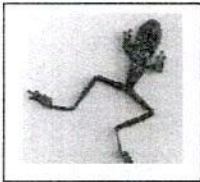
SOLICITANTE DEL TESTIMONIO

JHON EDWIN ORTIZ CUELLAR

Defensor de oficio del implicado
Rodrigo Andrés Castro Betancourt

PROFESIONAL UNIVERSITARIO:

EDGAR MEDINA PEREZ
Abog. Sustanciador.



459

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
INGENIERO CIVIL UNIV. DEL CAUCA MP. 19202-26238 CAU

24


Corpolygonas de Colombia
S0024034 - R.N.A. 04107075

El Presidente de la Junta Directiva, con base en las matrículas de la
CORPORACION COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS
"CORPOLONJAS DE COLOMBIA"

CERTIFICA QUE:

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
C.C. 10.541.581

Presentó solicitud de inscripción en esta Lonja, la cual fue estudiada y aprobada por el Consejo Directivo de Avaluadores de **CORPOLONJAS DE COLOMBIA** Bogotá, D.C., comprobándose su idoneidad como **Perito Avaluador Profesional**, utilizando metodologías bajo **Las Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"**, para las diferentes aplicaciones Internacionales de Valoración de Estados Financieros, con fines de Préstamos y Activos del sector Público y Privado para Informes Contables en las siguientes áreas:

INMUEBLES URBANOS: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA
INMUEBLES RURALES: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA
AVALUOS INDUSTRIALES (MAQUINARIA Y EQUIPO)
AVALUOS ESPECIALES

Certifica además que es **Miembro Activo** de esta Entidad Gremial desde el año 2009 y le fue otorgado el **Registro-Matrícula No. R.N.A/C.C-25-1885**, que respalda esta determinación con vigencia hasta el día 31 de Julio de 2017, lo cual le **faculta para avalar, respaldar y firmar avalúos comerciales y especiales en general a nivel Nacional.**

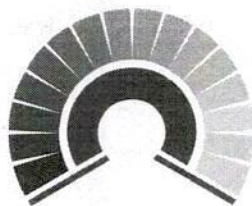
Se expide en Bogotá, D.C., a los 07 días del mes de Noviembre de 2015.


PATRICIA GONZALEZ GUIO
Gerente Administrativo
Junta Directiva


CORPOLONJAS DE COLOMBIA

SEDE NACIONAL: Carrera 53 No. 1038 - 42 Of. 508 - Edificio Grupo 7 - Torre 2 - PBX: 480 5959 - Fax: 256 5252
Celular: 310 571 1200 - 300 785 5044 - 315 315 4305 - Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: corpolygonasdecolombia@yahoo.es

460



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

AUTO No. 011

POR EL CUAL SE CORRE TRASLADO PRUEBAS
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO No. 1148

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:

| | |
|------------------------|--|
| PRESUNTOS RESPONSABLES | RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH C.C. 17.691.533 HERIBERTO ARCILA PUENTES C.C. 6.681.291 |
| ENTIDAD AFECTADA | MUNICIPIO DE EL PAUJIL |
| PRESUNTO DETRIMENTO | \$96.032.548 (Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos) |
| POLIZA No. | 930-73-994000000032 |
| ASEGURADORA | Compañía de Seguros Solidaria de Colombia |

En la ciudad de Florencia Caquetá, a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024) la suscrita Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en ejercicio de la competencia establecida en la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Ley 42 de 1993, Resolución 229 del 25 de agosto del 2015, modificada parcialmente por la Resolución No.115 del 2 de mayo de 2019 (manual de funciones y competencias laborales), procede a dictar el presente auto teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:

1. ANTECEDENTES

Se lleva a cabo la investigación fiscal, mediante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal ordinario No.1148, aperturado conforme el auto No. 025 del 18 de diciembre de 2019, generado por el trámite de la Denuncia No. D-003-16, cuya Conclusión de la Denuncia determinó un presunto detrimento patrimonial en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS**.

2. CONSIDERACIONES

Mediante Auto No. 009 de fecha 17 de abril de 2024, este despacho consideró ordenar el decreto de las siguientes pruebas solicitada por el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT:

(...) "ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar el siguiente medio de prueba impetrado por el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, el estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar:

1. Recibir y recepcionar el testimonio del ingeniero civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán. **Su testimonio es conducente, pertinente y útil**, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado."

ARTÍCULO TERCERO: Cítese al ingeniero civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán, para que se sirva rendir testimonio conforme a la rendición del Informe de Avalúos de Predios y/ Mejoras Rurales de fecha 10 de mayo de 2012, presentado al Municipio de El Paujil, Caquetá.

ARTÍCULO CUARTO: Establézcase el día 29 de abril de 2024, para la rendición del testimonio del ingeniero civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán, el día 29 de abril de 2024, a las 8:00 am., en el Edificio de la Gobernación del Caquetá, dirección Carrera 13 No. 15-00, piso 3, de conformidad con los solicitado por el Estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar, quien actúa como defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT. (...)

En cumplimiento a lo ordenado en el auto No. 009 de fecha 17 de abril de 2024, comunicado a la parte procesal y notificado por estado No. 026 de fecha 18 de abril de 2024, con fundamento en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, frente al decreto de las pruebas se procedió a la citación del testimonio para el día indicado.

Se llevó a cabo la citación para recepcionar el testimonio bajo declaración juramentada al ingeniero civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, trámite que obra según oficio que reposan a folio 442 al 445 del expediente.

RECEPCIÓN TESTIMONIO:

- Testimonio rendido el día 29 de abril de 2024, por el ingeniero civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581, expedida en Popayán, Cauca, en calidad de haber sido el perito que realizó el avalúo



Nit. 891.190.246-1

que dio origen a la compra del bien inmueble por parte del Municipio de El Paujil en la fecha 27 de diciembre de 2013, tal como se evidencia a en el certificado de libertad y tradición obrante a folio 49.

De acuerdo a lo anterior, se le reconoce el valor probatorio a la prueba practicada dentro del presente proceso en lo referente al testimonio rendido especificado anteriormente.

Cabe señalar que el objeto del Control Fiscal es el de asegurar que los recursos del Estado sean manejados y utilizados adecuadamente, para lograr los propósitos esenciales previstos por el constituyente (Constitución Política art. 2º). Para el cumplimiento de este objeto, la vigilancia de la gestión comprende las operaciones fiscales de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, considerando la forma y los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución Política.

La vigilancia de la Gestión Fiscal tiene como fin la protección del patrimonio público, la transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, la correcta ejecución de los recursos con eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento a los fines esenciales del Estado. Estas medidas se enmarcan por la concepción del Estado social de derecho, fundado en la prevalencia del interés general.

Que una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, *"de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga"* (Sentencia C-617 de 1996).

La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca *"impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado"* (Sentencia C-799 de 2005).

Que la Constitución Política de 1991, consagró expresamente el derecho al debido proceso, erigiéndolo como parte de los derechos fundamentales de las personas. Se trata de una garantía que permite a sus titulares conocer previamente las condiciones jurídicas dentro de las cuales serán tramitados sus asuntos, particularmente lo relacionado con la jurisdicción de la autoridad pública ante la cual se actúa, el ámbito de competencias de la misma, y en general todos los aspectos de trámite idóneos como instrumento de protección ante el eventual abuso en que puedan incurrir los agentes del Estado o los particulares en determinados casos.



Nit. 891.190.246-1

Toda conducta estatal que desconozca los parámetros jurídicos que establecen las reglas de los procesos judiciales o administrativos debe ser censurada y según el caso, declarada nula por la autoridad competente, pues con ella se habrá causado una grave alteración al vulnerar el orden constitucional.

Tal es el sentido del artículo 29 de la Carta Política, que proscribe todo comportamiento ajeno a las reglas del principio de legalidad, según el cual todas las conductas de los agentes públicos deben estar previamente señaladas en la Ley o en el reglamento.

Con el fin de garantizar el derecho a la defensa y debido proceso de los investigados, se ordena correr traslado de las pruebas practicadas relacionadas en el acápite anterior que obra en el expediente del asunto, para tal efecto el expediente permanecerá en Secretaría Común a disposición de la parte procesal por el término ordenado en el resuelve de este auto, donde el expediente obra de manera física impresa en carpetas legadas por cuanto la entidad de control fiscal no tiene adoptado el proceso electrónico.

Por lo anteriormente expuesto el Despacho de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ~~Córrase~~ traslado al investigado, al defensor de oficio y a la compañía de seguros Solidaria de Colombia en su condición de vinculada como tercero civilmente responsable en el presente proceso, por el término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, correspondiente a la prueba decretada y recepcionada en el proceso de la referencia, con fundamento en el auto No. 009 de fecha 17 de abril de 2024, que corresponde al testimonio de la persona que asistió a la citación y rindió testimonio en declaración bajo juramento, conforme la parte motiva del presente Auto.

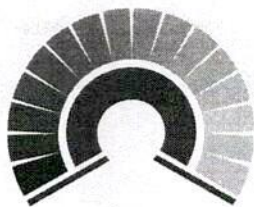
Por lo tanto, el expediente permanecerá en la Secretaría Común de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, para que ejerzan su derecho de defensa y contradicción si a bien lo consideran.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconózcasele el valor probatorio a la prueba recepcionada y practicadas conforme lo ordenado en el auto No. 009 de fecha 17 de abril de 2024, dentro del proceso del asunto y conforme lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese por estado el contenido del presente auto en la forma y términos establecidos en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y comuníquese la presente providencia a la parte procesal a las direcciones electrónica que hayan autorizado así:

- 1) Al señor **Rodrigo Andrés Castro Betancourt**, al correo electrónico

464



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

rodrigoandrescastro@hotmail.com, y a través de su defensor de oficio la estudiante de Derecho John Edwin Ortiz Cuéllar, al correo electrónico john.ortiz@udla.edu.co (folio 279).

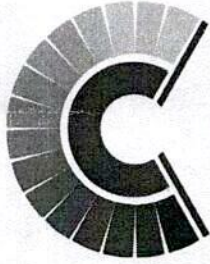
- 2) Al tercero Civilmente Responsable la compañía de **Seguros Solidaria de Colombia** al correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez realizado el procedimiento anterior, devuélvase el expediente al despacho correspondiente con las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y GÚMPLASE,

HERLINDA JOHANA RIVERA RAMÍREZ
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

| | NOMBRE | CARGO | FECHA | FIRMA |
|----------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|
| Elaboró: | Edgar Medina Pérez | Profesional Universitario | 02-05-24 | |
| Revisó: | Herlinda Johana Rivera Ramirez | DTRF | 12/05/2024 | |
| Aprobó: | Herlinda Johana Rivera Ramirez | DTRF | 12/05/2024 | |



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

ESTADO NO.029

FLORENCIA, CAQUETÁ DE 03 DEL MAYO 2024

| NO. PROCESO | FECHA AUTO | CLASE DE AUTO | ENCAUSADO | CLASE DE PROCESO | RECURSOS QUE PROCEDE |
|-------------|------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| 1148 | 02/05/2024 | Auto por medio del cual se corre traslado de pruebas | RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH Y OTROS | PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL | No procede |

El presente estado se fija en lugar visible de la Cartelera de la Contraloría Departamental del Caquetá y página Web, el día (03) de mayo de 2024 a las 8:00 a.m.

Los sujetos procesales que requieran copia de esta providencia pueden solicitarlas a través del correo electrónico institucional info@contraloriadelcaqueta.gov.co, indicando el nombre del requirente, número de proceso y de la providencia que solicita. De manera excepcional aquellas personas que no posean o dispongan de un medio electrónico, podrán enviar la solicitud por correo electrónico o del domicilio para recibir respuesta

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

Secretaria

El presente estado se desfija a las 6:00 p.m., del día (03) de mayo del 2024

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

Secretaria

EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

[@contraloriadelcaqueta](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co) [@ContraloriaDC](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co)

www.cdc.gov.co

455

Inicio Act. Estado Procesos ResFiscal

Editar

Modificación: 2024/05/03 06:40:47 - Creación: 2024/05/03 06:40:47

Estado No 029 del 2024

Fecha de expedición: 2024/05/03 08:00:00

Compartir

Los sujetos procesales que requieran copia de esta providencia pueden solicitarlas a través del correo electrónico institucional info@contraloriadelcaqueta.gov.co, indicando el nombre del requirente, número de proceso y de la providencia que solicita. De manera excepcional aquellas personas que no posean o dispongan de un medio electrónico, podrán enviar la solicitud por correo electrónico o del domicilio para recibir respuesta

Archivos para descargar



estado-029.pdf

248 Kb

467

COMUNICACION DEL AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DA TRASLADO A PRUEBA TESTIMONIAL DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 1148

Liesel Joullieth Correa Forero <lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co>

6 de mayo de 2024, 9:13

Para: rodrigoandrescastro@hotmail.com, john.ortiz@udla.edu.co, notificaciones@solidaria.com.co

Buenos días.

Mediante el presente correo esta Contraloría Departamental del Caquetá le comunica el auto mencionado en el asunto, el cual fue debidamente notificado en el estado N° 029 del 03 de mayo del 2024.

Contra el mismo puede efectuar derecho de defensa y contradicción.

Se anexan 11 folios

Cordialmente,

--



El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
SECRETARIA

Correo:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co

2 adjuntos



AUTO CORRE TRASLADO PRUEBA TESTIMONIAL DEL PRF 1148_0001.pdf
1737K



PRUEBA TESTIMONIAL DEL PRF 1148_0001.pdf
2186K

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 08 de mayo del 2024

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148

Que el día 07 de mayo del 2024 vencieron en silencio los terminos de los 02 días para efectuar el derecho de defensa y contradicción contra el auto N° 11 del 02 de mayo del 2024 por medio del cual se corrió traslado de pruebas del proceso de responsabilidad Fiscal N° 1148, el cual fue debidamente notificado en el estado N° 029 del 03 de mayo del 2024.

Conste



LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS**



Nit. 891.190.246-1

DILIGENCIA DE POSESIÓN DEL DEFENSOR DE OFICIO ESTUDIANTE DESIGNADO DEL CONSULTORIO JURIDICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD ORDINARIO NÚMERO 1148

CONTRA: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT

En la Ciudad de Florencia, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024), mediante solicitud realizada por la estudiante de Derecho LUZ MARINA MORENO SANBRIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.117.265.965, expedida en Solita, Caquetá y carné estudiantil No.20200291624, solicita a este Ente de Control la posesión como defensora de oficio del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, designada por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonía de fecha 22 de abril de 2024, en sustitución del estudiante de Derecho Jhon Edwin Ortiz Cuéllar, expedido por el doctor ISRAEL JAVIER GAITAN RAMOS, Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, para tomar posesión del cargo de Defensor de Oficio para la defensa del implicado señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148, que se tramita en este órgano de control fiscal, hasta la terminación del presente proceso. **Reconócese** personería jurídica al posesionado para actuar como defensora de oficio del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**.

Se deja de presente que este Ente de Control no posee Expedientes Digitales, y por tanto se debe revisar en horas laborales de lunes a viernes, del cual se puede solicitar copias con cargo a su pecunio o toma de fotografías de los folios del expediente.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 del 2011, el estudiante posesionado como defensor de oficio del implicado AUTORIZA a esta entidad que se le notifique de las decisiones que son de notificación personal CORREO ELECTRONICO:

luzm.moreno@udla.edu.co. Se deja constancia de la entrega de un ejemplar del auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2019 y Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, del Proceso de responsabilidad Fiscal No. 1148.

En tal virtud y ante la Secretaría, el abogado Profesional Universitario y el Director Técnico de la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, se entiende que se recibió el juramento con las formalidades legales al estampar su firma, por cuya gravedad prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone y manifestó no tener ninguna clase de impedimento para ejercer el cargo de defensor de oficio en el presente proceso.

Para constancia se firma la presente diligencia una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron.

NOMBRE DEL POSESIONADO:

Luz Marina Moreno Sanabria
C.C. 1117265965

FIRMA DEL POSESIONADO:

[Firma manuscrita]

DIRECCIÓN RESIDENCIAL:

Calle 189 # 11 - 31 Centro

CELULAR No.:

3153670235

CORREO ELECTRONICO AUTORIZADO

luzm.moreno@udla.edu.co

Abog. DIRECTORA TECNICA DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

FIRMA
HERLINDA JOHANA RIVERA RAMÍREZ

Abog. PROFESIONAL UNIVERSITARIO CDC.

FIRMA
EDGAR MEDINA PEREZ

Abog. SECRETARIA DEPENDENCIA CDC.:

FIRMA
LIESEL JOULIETH CORREA FORERO

Florencia 22 de Abril de 2024

Señores
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
Florencia

PRESUNTO RESPONSABLE
PROCESO
RADICADO

: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT
: RESPONSABILIDAD FISCAL
: PRF- 1148

El Director del CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN de la Universidad de la Amazonia, para los efectos consagrados en el artículo 30 del decreto 196 de 1971


HACE CONSTAR:

Que, **JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.11449452, expedida en Facatativá - Cundinamarca, código estudiantil No.1910087014, residente en la dirección, Calle 15 No.4-06 Edificio Luna y Estrella, Barrio Porvenir, numero de Celular 3185494034, correo electrónico institucional John.ortiz@udla.edu.co sustituye el presente proceso por terminar estudios de pregrado, designando el Consultorio Jurídico a la estudiante, **LUZ MARINA MORENO SANABRIA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1117265965 expedida en Solita-Caquetá, Código de estudiante No. 20200291624, No de celular 3153670235, dirección oficina, calle 18A No.11-31 Barrio Centro, correo electrónico institucional, luzm.moreno@udla.edu.co estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad y está adscrito(a) al Consultorio Jurídico en el presente periodo académico y por considerarlo(a) persona idónea se autoriza para ejercer y representar a **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, dentro del proceso de la referencia.

(Parágrafo 1° del Artículo 9 de la Ley 2113 de 2021).

El incumplimiento de los deberes como estudiante del Consultorio Jurídico, acarreará las sanciones disciplinarias (Acuerdo 01 del 2009 del Consejo Académico en sus artículos 25 y ss).

La presente constancia tiene vigencia hasta la terminación del presente proceso.


ISRAEL JAVIER GAITÁN RAMOS
Director Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

Digitó: Judith Silva



Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá

CAMINO A LA
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

471

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.117.265.965**
MORENO SANABRIA

APELLIDOS
LUZ MARINA

NOMBRES


FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **05-JUN-1993**
FLORENCIA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 **B+** **F**
ESTATURA G.S RH SEXO

18-JUN-2011 SOLITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL BASHCHEZ TORRES



P-4402400-00311975-F-1117265965-20110705 0027347117A 1 35949143

472



Universidad de la
Amazonia

Nombres:
LUZ MARINA

Apellidos:
MORENO SANABRIA

Documento de Identidad:
1117265965

Código Estudiantil:
2020029164

**DERECHO
ESTUDIANTE**



CL RH 3+



Nit. 891.190.246-1

AUTO No. 012

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA NULIDAD PARCIAL DE OFICIO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO No. 1148

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

| | |
|------------------------|--|
| PRESUNTOS RESPONSABLES | RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH C.C. 17.691.533 HERIBERTO ARCILA PUENTES C.C. 6.681.291 |
| ENTIDAD AFECTADA | MUNICIPIO DE EL PAUJIL |
| PRESUNTO DETRIMENTO | \$96.032.548 (Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos) |
| POLIZA No. | 930-73-9940000000032 |
| ASEGURADORA | Compañía de Seguros Solidaria de Colombia |

En la ciudad de Florencia Caquetá, el dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), la suscrita Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en ejercicio de la competencia establecida en la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 229 del 25 de agosto de 2016, procede a Decretar de oficio la Nulidad Parcial en lo referente a la notificación al Tercero Civilmente Responsable la compañía de seguros Solidaria de Colombia del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, del presente proceso de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta los siguientes:

1. ANTECEDENTES

Originó la presente investigación el memorando CF- 066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

De acuerdo con el traslado de la denuncia D-003-16, se estableció que el Municipio de El Paujil suscribió el Contrato de Compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila puentes, en cuantía de Doscientos cuarenta Millones de pesos (\$240.000.000) M/Cte., con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, luego de analizar la Conclusión de la Denuncia No.D-003-16, junto con los soportes probatorios adjuntos, determinó avocar el conocimiento de los hechos objeto de traslado y procedió a iniciar la correspondiente actuación procesal, dando

apertura al presente proceso a través del Auto No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2019 (folio 228 al 233 y reversos).

Mediante Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, se procedió a imputar responsabilidad fiscal en contra del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT y contra el tercero civilmente responsable y se procedió a archivar a favor del investigado HERIBERTO ARCILA PUENTES (folio 295 al 330).

A folio 370 al 385, obra grado de consulta respecto al Auto de Imputación Mixta No. de fecha 26 de febrero de 2024, el cual confirmó este último (folio 370 al 385).

A través del Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, se resolvió solicitud de pruebas solicitada por el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, negándose (folio 390 al 396).

Mediante Auto No. 009 de fecha 17 de abril de 2024, se resuelve recurso de reposición frente al Auto No. 008, a través del cual se negó el decreto de pruebas y en este último se resolvió a favor del recurrente, concediendo la prueba testimonial solicitada (folio 422 al 439).

El día 29 de abril de 2024, se rindió la prueba testimonial decreta consistente en la recepción del testimonio del ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo (folio 446 al 459).

Mediante Auto No. 011 de fecha 02 de mayo de 2024, se corrió traslado a las partes procesales.

1. FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 1° de la ley 610 de 2000, definió el proceso de responsabilidad fiscal, como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

Este es un proceso de naturaleza administrativa, en razón de su propia materia, como es el establecimiento de la responsabilidad fiscal que corresponde a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas, por el manejo irregular de bienes o recursos públicos. Su conocimiento y trámite corresponde a las autoridades administrativas, como son las Contralorías en todos los órdenes. El trámite de este procedimiento de responsabilidad fiscal, no es ajeno a dichos principios y deben observarse las garantías sustanciales y



Nit. 891.190.246-1

procesales que confirman el mandato constitucional del debido proceso, debidamente compatibilizada con la naturaleza propia de orden constitucional y legal.

La ley 610 del 2000 en su artículo 36 establece:

"Causales de nulidad. Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho de defensa del implicado o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso.

Y en su artículo 37 establece:

"Saneamiento de nulidades. En cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez."

Así las cosas, teniendo en cuenta lo preceptuado anteriormente, es claro que el saneamiento de nulidades, puede presentarse en cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe algunas de las causales previstas en el citado artículo, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presenta la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado, dejando claramente de relieve que las pruebas practicadas legalmente conservaran su plena validez. Es decir, cuando el funcionario advierta que en desarrollo del proceso se presenta una irregularidad que afecta ostensiblemente el debido proceso y/o garantías fundamentales, debe, facultado por lo preceptuado en el artículo 37 ibidem, decretar de oficio la nulidad de lo actuado a efectos de que se subsanen los vicios que impiden continuar con la actuación.

En ese sentido, el doctor Uriel Alberto Amaya Olaya, en su libro teoría de la responsabilidad fiscal, aspectos sustanciales y procesales manifiesta:

"Que las nulidades pueden invocarse para cualquier sujeto procesal, dado que por su naturaleza la Contraloría, puesta en conocimiento de la situación irregular, debe oficiosamente declararla. En cuanto al tiempo, es decir dentro de la cual puede solicitarse la nulidad la norma citada prevé que su proposición se puede hacer hasta antes de proferirse fallo definitivo, es decir que aun corriendo los términos para que se profiera el mismo es viable tal instauración. Y aún más, estando en curso el recurso de apelación en contra del fallo con responsabilidad



Nit. 891.190.246-1

fiscal, y antes de que se profiera las decisiones definitivas por parte de este Despacho y del superior jerárquico (Consulta), es admisible la proposición de nulidades". (Negrillas fuera de texto).

Que unos de los principios constitucionales del Proceso de Responsabilidad Fiscal son el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción que le asiste a los investigados.

Que la notificación es un acto jurídico por el cual se comunica legalmente a una persona una resolución judicial para que actúe procesalmente en el juicio mediante los actos que la Ley pone a su disposición. El efecto que genera la notificación es que desde el momento en que se perfecciona se entiende que el acto administrativo o la resolución judicial queda puesta en conocimiento de la persona notificada.

Que la Corte Constitucional en sentencia C-783/04, estableció que dicho acto es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado en el Art. 228 superior. Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que estén en desacuerdo con ellas y ejercer su derecho de defensa. Por esta razón, el mismo constituye un elemento básico del debido proceso previsto en el Art. 29 de la Constitución.

Sobre el particular la Ley 610 de 2000, establece en su artículo 49:

"(...) Notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal. El auto de imputación de responsabilidad fiscal se notificará a los presuntos responsables o a sus apoderados si los tuvieren y a la compañía de seguros si la hubiere, en la forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que no estén representados por apoderado, surtida la notificación por edicto se les designará apoderado de oficio, con quien se continuará el trámite del proceso. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 43 (...)"

Así mismo, los artículos 106 y 112 de la Ley 1474 de 2011, precisan:

*"(...) **Artículo 106. Notificaciones.** En los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán notificarse personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia; para estas providencias se aplicará el sistema de notificación personal y por aviso previsto para las actuaciones administrativas en la Ley 1437 de*



Nit. 891.190.246-1

2011. Las demás decisiones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por estado (...)

(...) **Artículo 112. Citaciones y notificaciones.** Cuando se deba notificar personalmente una decisión, o convocarse a la celebración de una audiencia se citará oportunamente a las partes, al garante, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación.

El presunto responsable y su apoderado si lo tuviere, o el defensor de oficio, y el garante en calidad de tercero civilmente responsable, tendrán la obligación procesal de señalar la dirección, el correo electrónico o cualquier otro medio idóneo de comunicación, en el cual se recibirán las citaciones. Igualmente tendrán el deber de informar cualquier cambio que se presente en el curso del proceso. Cuando se haga un cambio de dirección, el funcionario responsable deberá hacer en forma inmediata el respectivo registro, so pena de sanción de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario. La omisión a este deber implicará que sean legalmente válidas las comunicaciones que se envíen a la última dirección conocida.

La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se le requiere, el lugar, la fecha y hora en donde se llevará a cabo y el número de radicación de la actuación a la cual corresponde (...).

Que con miras a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa y en virtud de la norma citada, es obligación del ente de control notificar personalmente a los investigados el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia, con el propósito de ejercer el derecho de defensa.

Que estando el presente proceso en el Despacho de la Dirección Técnica de Responsabilidad fiscal, se evidencia por parte del Despacho que el Tercero Civilmente Responsable la compañía de seguros Solidaria de Colombia, no fue notificado en debida forma el Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024.

Que la nulidad procesal es una institución que se desprende del artículo 29 de la Constitución Política, con el objeto de garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa de quienes intervienen en él y es, por regla general desarrollada en la ley, la cual indica los vicios del proceso que permiten su invocación y declaración.

Que en efecto las nulidades procesales, están instituidas para asegurar la validez del proceso, pues su objetivo es evitar que en las actuaciones se incurra en irregularidades de tal entidad, que comprometan su eficacia, esto es, que le resten los efectos jurídicos al acto o actos que integran el proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso, de oficio o a petición de parte.



Nit. 891.190.246-1

Que el artículo 36 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, regula las causales de Nulidad que aplican para el procedimiento ordinario y verbal, así:

- La falta de competencia del funcionario para conocer y fallar.
- **La violación del derecho de defensa del implicado.**
- **La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.**

Que en cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo 36 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, decretará la **nulidad total o parcial** de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación, que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado.

Que la Corte Constitucional en Sentencia **T-604 de 2001**, con Ponencia del doctor **HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO**, ha señalado:

"(...) La Corte considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se constituye en un mecanismo judicial idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por un órgano de control, más aún cuando en esa instancia se puede solicitar y obtener la suspensión provisional de ciertos actos administrativos desde el momento mismo de la admisión de la demanda. Al respecto esta Corporación, en varias oportunidades, ha precisado que la suspensión provisional es un mecanismo no menos importante y efectivo que la acción de tutela, el cual se concibe como medida cautelar cuando una entidad vulnera en forma manifiesta los derechos del administrado (...)"

Que de acuerdo a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000, debe esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal proceder de oficio a decretar la Nulidad Parcial dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, a partir del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, para lo cual es preciso señalar que todas las pruebas allegada, decretadas y practicadas durante el trámite del presente proceso de responsabilidad fiscal conservaran su plena validez, pues sobre ello no se configura el hecho que generó la Nulidad. En consecuencia, la presente nulidad se decreta únicamente respecto de la notificación al Tercero Civilmente Responsable la compañía de seguros **SOLIDARIA DE COLOMBIA**, vinculada al presente proceso mediante el Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2019.

Por lo anterior, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

Página 6 de 7

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"



Nit. 891.190.246-1

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar de oficio la nulidad parcial dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 1148, respecto de la notificación del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, correspondiente al Tercero Civilmente Responsable la compañía de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT. No. 860.524.654-6, conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente Auto, a fin de que se subsanen las actuaciones necesarias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese por estado la presente providencia de conformidad a 106 establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Cítese a la compañía de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con NIT 860.524.654-6, en calidad de Tercero Civilmente Responsable vinculado en el presente proceso, para ser notificada del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024 y procédase de conformidad, al correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co

ARTÍCULO CUARTO: Las pruebas y demás actuaciones allegadas y decretadas en el presente proceso legalmente, conservarán su plena validez.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión, no precede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

HERLINDA JOHANA RIVERA RAMÍREZ
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

| | NOMBRE | CARGO | FECHA | FIRMA |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------|-------|
| Elaboró: | Edgar Medina Pérez | Profesional Universitario | 16-05-24 | |
| Revisó: | Herlinda Johana Rivera Ramírez | DTRF. | 16-05-24 | |
| Aprobó: | Herlinda Johana Rivera Ramírez | DTRF. | 16-05-24 | |



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ


Nit. 891.190.246-1

ESTADO No.034
Florencia, 17 de mayo del 2024

| NO. PROCESO | FECHA AUTO | CLASE DE AUTO | ENCAUSADO | CLASE DE PROCESO | RECURSOS QUE PROCEDEN |
|-------------|------------|--|--|--------------------------------------|------------------------|
| 1148 | 16/05/2024 | Auto por medio del cual se decreta una nulidad | RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURTH Y OTROS | PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL | Reposición y Apelación |

El presente estado se fija en lugar visible de la Cartelera de la Contraloría Departamental del Caquetá y pagina Web, el día (17) de mayo del 2024 a las 8:00 a.m.

Los sujetos procesales que requieran copia de esta providencia pueden solicitarlas a través del correo electrónico institucional info@contraloriadelcaqueta.gov.co, indicando el nombre del requirente, número de proceso y de la providencia que solicita. De manera excepcional aquellas personas que no posean o dispongan de un medio electrónico, podrán enviar la solicitud por correo electrónico o del domicilio para recibir respuesta




LIESEL JOULLETH CORREA FORERO
Secretaria

El presente estado se desfija a las 6:00 p.m., del día (17) de mayo del 2024.


LIESEL JOULLETH CORREA FORERO
Secretaria

EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Carrera 13 No 15 - 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia - Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

 info@contraloriadelcaqueta.gov.co  @ContraloriaDC
www.cdc.gov.co

480

Inicio Act. Estado Procesos ResFiscal

Editar

Modificación: 2024/05/17 06:11:01 - Creación: 2024/05/17 06:11:01

Estado No 034 del 2024

Fecha de expedición: 2024/05/17 08:00:00

Compartir

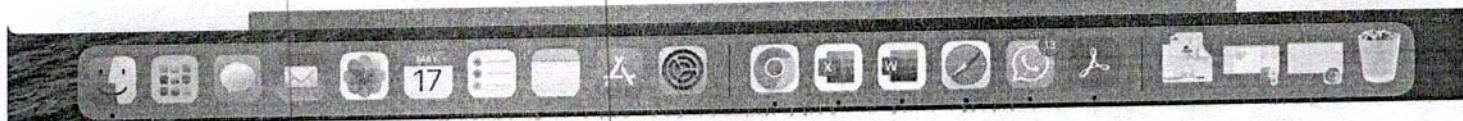
Los sujetos procesales que requieran copia de esta providencia pueden solicitarla a través del correo electrónico Institucional info@contraloriadelcaqueta.gov.co, indicando el nombre del requirente, número de proceso y de la providencia que solicita. De manera excepcional aquellas personas que no posean o dispongan de un medio electrónico, podrán enviar la solicitud por correo electrónico o del domicilio para recibir respuesta

Archivos para descargar



estado-034.pdf

315 Kb



PF-1037

Florencia, 20 de mayo del 2024

Señores:
SEGUROS SOLIDARIO DE COLOMBIA
Email: notificaciones@solidaria.com.co
Ciudad

ASUNTO: Citación a Notificarse
Auto de Imputación Mixta N° 001 del 26/02/2024
Proceso de Responsabilidad Fiscal No.1148

Sírvase presentarse a éste despacho ubicado en la carrera 13 No.15-00 piso 3° del Edificio de la Gobernación, en horario habilitado por la Contraloría Departamental del Caquetá de 8:00 a m a 12:00pm y de 2:00pm a 6:00pm, de Lunes a Jueves y de 7:00am a 3:00pm el día viernes o en caso de no poder trasladarse puede enviar correo electrónico a info@contraloriadelcaqueta.gov.co Autorizando el Correo al cual desea que sea enviada la providencia con el objeto de notificarse del Auto de Imputación Mixta No.001 de fecha 26 de febrero del 2024 proferido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal dentro del proceso expuesto en el asunto.

Transcurridos cinco (5) días hábiles de la fecha de envío de la presente citación, se procederá a realizar la notificación por aviso, si para esa fecha no se ha podido surtir la notificación personal.

Cordialmente



LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria
Area de Responsabilidad Fiscal

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS**

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA** identificado(a) con NIT 891190246 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje: 1354
Emisor: contraloriadelcaqueta@contraloriadelcaqueta.gov.co (no-reply@contraloriadelcaqueta.gov.co)
Destinatario: notificaciones@solidaria.com.co - SEGUROS SOLIDARIO DE COLOMBIA
Asunto: PF-1037 CITACION A NOTIFICARSE DEL AUTO DE IMPUTACION MIXTA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148
Fecha envío: 2024-05-20 17:24
Estado actual: Lectura del mensaje

Trazabilidad de notificación electrónica

| Evento | Fecha Evento | Detalle |
|---|---|---|
| <p>Estampa de tiempo al envío de la notificación</p> <p>El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.</p> | <p>Fecha: 2024/05/20 Hora: 17:25:37</p> | <p>Tiempo de firmado: May 20 22:25:37 2024 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.8.0.</p> |
| <p>Acuse de recibo</p> <p>Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.</p> | <p>Fecha: 2024/05/20 Hora: 17:25:38</p> | <p>May 20 17:25:38 el-t205-282cl postfix/smtp[28428]: 8ED2212487FB: to=<notificaciones@solidaria.com.co> t; relay=solidaria-com-co.mail.protection.outlook.com[52.101.8.36]:25, delay=1.1, delays=0.18/0.26/0.64, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <dce8431be1e903008ede315de84950edc2d681b95b08aede247f322a3950b00@correocertificado4-72.com.co> [InternalId=21994527545378, Hostname=PH0PR17MB5597.namprd17.prod.outlook.com] 27431 bytes in 0.161, 165.435 KB/sec Queued mail for delivery)</p> |
| <p>El destinatario abrió la notificación</p> | <p>Fecha: 2024/05/20 Hora: 19:14:25</p> | <p>Dirección IP: 200.41.76.174 Agente de usuario: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)</p> |
| <p>Lectura del mensaje</p> | <p>Fecha: 2024/05/21 Hora: 09:23:28</p> | <p>Dirección IP: 161.69.60.36 Colombia - Distrito Capital de Bogota - Bogota Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0</p> |

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de idcas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft

✉ **Contenido del Mensaje**

Asunto: PF-1037 CITACION A NOTIFICARSE DEL AUTO DE IMPUTACION MIXTA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148

📄 **Cuerpo del mensaje:**

Señores:

SEGUROS SOLIDARIO DE COLOMBIA

Email: notificaciones@solidaria.com.co

Ciudad

ASUNTO: Citación a Notificarse

Auto de Imputación Mixta N° 001 del 26/02/2024

Proceso de Responsabilidad Fiscal No.1148

Sírvase presentarse a éste despacho ubicado en la carrera 13 No.15-00 piso 3° del Edificio de la Gobernación, en horario habilitado por la Contraloría Departamental del Caquetá de 8:00 a.m. a 12:00pm y de 2:00pm a 6:00pm, de Lunes a Jueves y de 7:00am a 3:00pm el día viernes o en caso de no poder trasladarse puede enviar correo electrónico a info@contraloriadelcaqueta.gov.co Autorizando el Correo al cual desea que sea enviada la providencia con el objeto de notificarse del Auto de Imputación Mixta No.001 de fecha 26 de febrero del 2024 proferido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal dentro del proceso expuesto en el asunto.

Transcurridos cinco (5) días hábiles de la fecha de envío de la presente citación, se procederá a realizar la notificación por aviso, si para esa fecha no se ha podido surtir la notificación personal.

Cordialmente



El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

SECRETARIA

Correo:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co

Adjuntos

Nombre

Suma de Verificación (SHA-256)

PF-1037_CITACION_A_NOTIFICARSE_DEL_AUTO_DE_IMPU
TACION_MIXTA_DEL_PRF_1148_0001.pdf

0204ed121510a03f5cfe584502d9ebd749f8e4e2950eb5f3431ff34aa81558bf

Descargas

Archivo: PF-
1037_CITACION_A_NOTIFICARSE_DEL_AUTO_DE_IMPUTACION_MIXTA_DEL_PRF_1148_0001.pdf
desde: 161.69.60.36 el día: 2024-05-21 09:23:45

Archivo: PF-
1037_CITACION_A_NOTIFICARSE_DEL_AUTO_DE_IMPUTACION_MIXTA_DEL_PRF_1148_0001.pdf
desde: 161.69.60.36 el día: 2024-05-24 15:34:54

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, la presente notificación electrónica como los documentos adjuntos a esta, son documentos íntegros, ya que es posible determinar que los mismos no han sido modificados ni alterados desde el momento en que fue enviado el mensaje de datos por parte del emisor del mensaje, por lo tanto dichos documentos tienen plena validez jurídica y probatoria.

www.4-72.com.co

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA identificado(a) con NIT 891190246 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje: 1391
Emisor: contraloriadelcaqueta@contraloriadelcaqueta.gov.co (no-reply@contraloriadelcaqueta.gov.co)
Destinatario: notificaciones@solidaria.com.co - COMPAÑIA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA
Asunto: NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION MIXTA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148
Fecha envío: 2024-05-28 09:27
Estado actual: Lectura del mensaje

Trazabilidad de notificación electrónica

| Evento | Fecha Evento | Detalle |
|---|---|--|
| <p>● Estampa de tiempo al envío de la notificación</p> <p>El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.</p> | <p>Fecha: 2024/05/28 Hora: 09:30:41</p> | <p>Tiempo de firmado: May 28 14:30:41 2024 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.6.0.</p> |
| <p>● Acuse de recibo</p> <p>Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.</p> | <p>Fecha: 2024/05/28 Hora: 09:30:44</p> | <p>May 28 09:30:44 el-t205-282cl postfix/smtp[11481]: 404C41248855: to=<notificaciones@solidaria.com.co>g t ;, relay=solidaria-com-co.mail.protection.o u tlook.com[52.101.10.6]:25, delay=2.8, delays=0.2/0 /0.28/2.3, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <e1871a6cc85e016f2ceea2e7c67c0571dd16 0 72e26334447f5a51342776f70b0@correocerti fido4-72.com.co> [InternalId=32611686701611, Hostname=PH8PR17MB6767.namprd17.prod.out look.com] 27549 bytes in 0.228, 117.667 KB/sec Queued mail for delivery)</p> |
| <p>● El destinatario abrió la notificación</p> | <p>Fecha: 2024/05/28 Hora: 10:56:05</p> | <p>Dirección IP: 161.69.60.36 Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0</p> |
| <p>● Lectura del mensaje</p> | <p>Fecha: 2024/05/28 Hora: 11:29:37</p> | <p>Dirección IP: 161.69.60.36 Colombia - Distrito Capital de Bogotá - Bogotá Agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0</p> |

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así

como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

✉ Contenido del Mensaje

Asunto: NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION MIXTA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N 1148

Cuerpo del mensaje:

Señores:

SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA

En la presente fecha se procede a notificar del Auto de Imputación mixta del Proceso de Responsabilidad Fiscal N°1148 del 26 de febrero del 2024, en donde se procede al Auto de Imputación de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la ley 610 del 2000.

Es preciso indicarle que contra el presente Auto de Imputación para que los sujetos procesales, presente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del proceso los Argumentos de defensa frente a las imputaciones aquí señaladas.

Contra el presente auto No procede Recurso.

Adjunto copia íntegra del Acto Administrativo en (36) Hojas

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes



El Control Fiscal Participativo y Ambiental al Manejo de los Recursos Públicos

LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO

SECRETARIA

Correo:lieselcorrea@contraloriadelcaqueta.gov.co

Adjuntos

| Nombre | Suma de Verificación (SHA-256) |
|--|--|
| AUTO_DE_IMPUTACION_MIXTA_DEL_PRF_1148_0001.pdf | 69deaabdef6e5757f703ee25661b636bed9ae3dabfd459cc7848aa4b3c1bd310 |

Descargas

Archivo: AUTO_DE_IMPUTACION_MIXTA_DEL_PRF_1148_0001.pdf desde: 161.69.60.36 el día: 2024-05-28 11:30:19

Archivo: AUTO_DE_IMPUTACION_MIXTA_DEL_PRF_1148_0001.pdf desde: 161.69.60.36 el día: 2024-06-07 17:08:29

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, la presente notificación electrónica como los documentos adjuntos a esta, son documentos íntegros, ya que es posible determinar que los mismos no han sido modificados ni alterados desde el momento en que fue enviado el mensaje de datos por parte del emisor del mensaje, por lo tanto dichos documentos tienen plena validez jurídica y probatoria.

www.4-72.com.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONSTANCIA SECRETARIAL

Florencia, 14 de junio del 2024

REFERENCIA: Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

Que el día 13 de junio del 2024 vencieron en silencio los términos con los que contaba **LA COMPAÑÍA DE SEGUROS SOLIDARIO DE COLOMBIA**, para presentar argumentos de defender contra el auto de imputación mixta N° 001 del 26 de febrero del 2024.

CONSTE



LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS**

MEMORANDO

PF-124

Florencia, 14 de junio del 2024

PARA: Contralor Departamental del Caquetá
DE: secretaria, Dirección Técnica de Responsabilidad fiscal
ASUNTO: Grado de Consulta
Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 1148

De manera atenta remito a su despacho el Proceso de Responsabilidad Fiscal Expuesta en el asunto, para que Surta Grado de Consulta, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la ley 610 del 2000.

Cordial saludo



LIESEL JOULLIETH CORREA FORERO
Secretaria
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal

Anexo: 03 cuaderno de (487) folios
1 CMC de (42) folios

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS**

RESOLUCIÓN No.200

(17 junio de 2024)

Por la cual se surte el grado de consulta en el proceso de responsabilidad fiscal ordinario de única instancia No. 1148 cuya decisión fue archivo en el auto de imputación No.001 del 26 de febrero de 2024

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, artículo 18 de la ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011, resuelve:

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:

| | |
|---------------------------------|---|
| No. del Proceso | 1148 |
| Entidad Afectada | Municipio de Paujil |
| Cuantía del Daño sin Indexar | \$96.032.548 MCTE |
| Presuntos Responsables Fiscales | RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT con C.C. No. 17.691.533 Y HERIBERTO ARCILA PUENTES con C.C. No.6.681.291 |
| Tercero Civilmente Responsable | Compañía de Seguros Solidaria de Colombia |

II. ANTECEDENTES:

1. Originó la presente investigación la denuncia D003-16 mediante el cual se estableció que el municipio de el Paujil suscribió el contrato de compraventa No. 001 del 26 de abril de diciembre de 2013 con el señor HERIBERTO ARCILA PUENTES con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable y través del cual fue adquirido presuntamente son sobrecosto en cuantía de \$96.032.548 MCTE
2. Auto de Apertura No.025 del 18 de diciembre de 2018, del Proceso de Responsabilidad Fiscal No 1148 (folios 228-233).

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

3. Auto No. 034 del 30 de septiembre de 2019 designa defensor de oficio (folios 244-246)
4. Notificación por Estado No. 075 del 01 de octubre de 2019 (folio 247)
5. Diligencia de posesión del defensor de oficio del señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT (folio 249)
6. Diligencia de posesión del defensor de oficio del señor HERIBERTO ARCILA PUENTES (folio 251)
7. Auto suspensión de términos (folio 257)
8. Auto reanudación (folio 259)
9. Diligencia de posesión del estudiante STEFANNY MICHELLY OLARTE HERNANDEZ (folio 262)
10. Diligencia de posesión del estudiante JHON EDWIN ORTIZ CUELLAR (folio 279)
11. Diligencia de versión libre del señor HERIBERTO ARCILA PUENTES (folios 292-293)
12. Auto de imputación mixto No. 001 del 26 de febrero de 2024 (folios 295-330)
13. Mediante memorando PF-051 del 12 de marzo de 2024 se traslado al despacho del contralor para grado de consulta (folio 369)

III. CONSIDERACIONES:

1. Procedencia de la Consulta.

La Ley 610 de 2000 que establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, en su artículo 18, prescribe lo siguiente, así:

*"Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta **cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio.** Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión deberá enviar el expediente dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional o jerárquico, según la estructura y manual de funciones de cada órgano fiscalizador. Si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso".*

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

Teniendo en cuenta que el auto de imputación mixto No.001 del 26 de febrero de 2024 decidió archivar el presente proceso a favor del señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, por lo tanto se cumple uno de los requisitos exigidos por la norma para adelantar el grado de consulta, habilitando a este Despacho para decidir el mismo.

2. Objeto de la Consulta.

De igual manera, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, establece el objeto de la consulta:

*"Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta **cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio.** Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión deberá enviar el expediente dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional o jerárquico, según la estructura y manual de funciones de cada órgano fiscalizador. Si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso (...)"*

Es decir, el legislador a través de este mecanismo procesal propendió por la protección no sólo del ordenamiento jurídico y el esmero de los postulados orientadores del proceso de responsabilidad fiscal, sino también la correcta aplicación de los derechos esenciales que cobijan a los sujetos inmersos en el marco de la Ley 610 de 2000, cuya competencia radica en el superior jerárquico de quién profirió la decisión:

"El grado de consulta es el mecanismo creado por el legislador para que, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, el superior de quien profiere una decisión que consista en el archivo, fallo sin responsabilidad fiscal o fallo con responsabilidad fiscal, según sea el caso, la modifique, confirme o revoque. En esta perspectiva resulta evidente que el competente para resolver el grado de consulta es el superior jerárquico o funcional de quien profirió la decisión. [...]"

Dicha revisión no debe confundirse en ninguna manera con un recurso:

"3.2.1. La consulta, como institución procesal, no está consagrada como un medio de impugnación o recurso ordinario al alcance de las partes. Opera como una especie de revisión por ministerio de la ley, tanto desde su consagración original en el Decreto 2158 de 1948⁴ como actualmente. El entonces Tribunal Supremo de Justicia, consideró respecto de este mecanismo procesal, en Sentencia de julio 30 de 1985, Sala de Casación en lo Civil, lo siguiente:

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2015. Radicación número: 63001-23-31-000-2008-00156-01.

"La consulta, que no es ciertamente un recurso, sino un segundo grado de competencia funcional, está destinada a que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, en determinados negocios y según la índole de la decisión tomada. Aunque la consulta procede en las hipótesis precedentes, no hay lugar a ella cuando la parte, en cuyo beneficio se ha consagrado, ha interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia del a quo, porque si el objetivo de aquélla es dar origen a una segunda instancia y obtener una revisión oficiosa del fallo, tal objetivo se cumple con la interposición del recurso de alzada." (Subraya fuera de texto)

i. **Pese a que la jurisprudencia ha considerado que este mecanismo de control jurisdiccional de consulta no es propiamente un medio de impugnación, cuenta con una estrecha relación con los principios de derecho de defensa, debido proceso y doble instancia, sin que a la misma le sean aplicables todos los principios y garantías de la apelación, tanto así, que el juez que asume conocimiento en grado de consulta no está limitado por el principio de non reformatio in pejus, sino que oficiosamente puede hacer una revisión del fallo.** Esta Corporación en la sentencia C-583 de 1997 al examinar la constitucionalidad una disposición del Código de Procedimiento Penal, expresó en lo atinente a la relación de la consulta y la prohibición de reforma en perjuicio, que:

"Cuando el superior conoce en grado de consulta de una decisión determinada, está facultado para examinar en forma íntegra el fallo del inferior, tanto por aspectos de hecho como de derecho y, al no estar sujeto a observar la prohibición contenida en el artículo 31 de la Carta, bien puede el juez de segunda instancia modificar la decisión consultada a favor o en contra del procesado, sin violar por ello norma constitucional alguna. La autorización que se otorga en el precepto demandado al superior para que al decidir la consulta se pronuncie "sin limitación" alguna sobre la providencia dictada por el inferior, no lesiona la Ley Suprema, pues de su propia esencia se deriva la capacidad del funcionario de segunda instancia para revisar íntegramente la providencia consultada con el único objetivo de corregir los errores en que haya podido incurrir el fallador de primera instancia. De esta manera se busca evitar que se profieran decisiones violatorias no sólo de derechos fundamentales sino de cualquier otro precepto constitucional o legal, en detrimento del procesado o de la sociedad misma como sujeto perjudicado con el delito. El propósito de la consulta es lograr que se dicten decisiones justas. Y la justicia es fin esencial del Estado." (Subrayas fuera de texto)

3.2.3. De igual modo, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del principio de consonancia en las sentencias de segunda instancia -artículo 35 de la Ley 712 de 2001- declaró su exequibilidad a través de la sentencia C-968 de 2003, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. Adicionalmente, en dicha oportunidad, este Tribunal se refirió al grado jurisdiccional de consulta en los siguientes términos:

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

A diferencia de la apelación, la consulta no es un medio de impugnación sino una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. (Subraya fuera de texto)

La consulta es un mecanismo ope legis, esto es, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas. Además, la consulta está consagrada en los estatutos procesales generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate.

La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un grado jurisdiccional que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado." (Subraya fuera de texto)

3.2.4. Lo anterior, se puede resumir en que el grado jurisdiccional de consulta (i) no es un recurso ordinario o extraordinario, sino un mecanismo de revisión oficioso que se activa sin intervención de las partes; (ii) es un examen automático que opera por ministerio de la ley para proteger los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles de los trabajadores y la defensa de la justicia efectiva y, (iii) al ser un control integral para corregir los errores en que haya podido incurrir el fallador de primera instancia, no está sujeto al principio de non reformatio in pejus."² (Negrillas fuera del texto).

Finalmente, se consuma el grado de consulta como:

"Respecto del grado de consulta, este Despacho en concepto 110.17.2020, concluyó:

De la normativa, jurisprudencia y doctrina conceptual relacionada, se obtiene respecto del grado de consulta en el proceso de responsabilidad fiscal, que i) está instituido en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales; ii) procede en los casos específicamente determinados por la ley; iii) el superior que conoce de él, cuenta con amplias

² Corte Constitucional. Sentencia C 424 de 2015.

facultades para tomar decisiones respecto de lo consultado, incluso sin estar sujeto al principio de non reformatio in pejus; iv) en desarrollo de esas facultades, el superior puede confirmar, modificar e incluso revocar la decisión objeto de consulta; v) lo decidido por el superior, es vinculante para el a quo; y vi) se debe decidir dentro de un término legal establecido, so pena de quedar en firme la decisión consultada.”³

2.1. Defensa del interés público.

No existe en el mundo jurídico colombiano un concepto expreso que describa el interés público, puede entonces asimilarse al del interés general, interés nacional o interés social:

“El concepto de interés general es una cláusula más indeterminada cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso concreto. Entre tanto, el de “interés social”, que la Constitución emplea es una concreción del interés general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho.

(...)

Es precisamente el carácter jurídicamente abstracto e indeterminado del concepto de interés general, lo que ha llevado a que las constituciones liberales modernas consideren la necesidad de armonizarlo con los derechos individuales y con el valor social que tiene la diversidad cultural. Por ello, constituye un requisito indispensable para la aplicación de la máxima de la prevalencia del interés general, que el operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de cada caso, intente armonizar el interés general con los derechos de los particulares y, en caso de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución.”⁴ (Subrayas fuera del texto).

Una aproximación doctrinal puede ser:

“En síntesis, el interés público será aquella materia que se resuelve en decisión política gubernamental –nacional, regional o municipal– y también en el ámbito legislativo y jurisdiccional, que satisface al máximo los intereses de la comunidad involucrada, que se concibe y ejecuta mediante procedimientos jurídicos preestablecidos, con participación de los gobernados, y que tiene por finalidad última evitar conflictos políticos, religiosos, económicos, sociales y culturales y perfeccionar el bienestar de la población o de segmentos de esta última.

(...)

7ª La defensa del interés público es un bien jurídico de carácter colectivo, cuya titularidad puede ser ejercida por un individuo o la comunidad ante cualquier órgano competente del Estado. Diversas

³ Auditoría General de la República. Concepto 110.29.2020 del 09 de julio de 2020. Radicado No: 20201100015441.
⁴ Corte Constitucional. Sentencia C 053 de 2001.



medidas han perfeccionado el acceso a la defensa del interés público: la ampliación de la representatividad política, subsanar las deficiencias en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales estatales, establecer organismos fiscalizadores del quehacer del Estado, fin al secretismo de los actos emanados de los órganos públicos."⁵ (Subrayas impropias).

Ahora bien, de la lectura de la Ley 610 de 2000 que se estatuye como el marco normativo del proceso que nos ocupa, se tiene que el proceso de responsabilidad fiscal determina la responsabilidad de los servidores públicos cuando en el ejercicio de la gestión fiscal causen daño patrimonial (artículo 1); entonces es la gestión fiscal el factor determinante para encausar el concepto de interés público:

"Artículo 3º. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales."

Corolario de lo anterior, se puede sugerir que la defensa del interés público es la correcta aplicación de los recursos o fondos públicos, su recaudación, manejo e inversión en procura de la consecución de los fines esenciales del Estado.

Entonces, en el sub examine se encuentra satisfecha la defensa del interés público como requisito legal del artículo 18 de la Ley 610 de 2020, al asumir conocimiento de la denuncia D003-16 mediante el cual se estableció que el municipio de el Paujil suscribió el contrato de compraventa No. 001 del 26 de abril de diciembre de 2013 con el señor HERIBERTO ARCILA PUENTES con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable y través del cual fue adquirido presuntamente son sobre costo en cuantía de \$96.032.548 MCTE.

Evidencia este despacho que el auto de apertura No. 025 del 18 de abril de 2018, determino que el presunto detrimento al Estado el correspondía la suma de \$96.032.548 MCTE., presunto detrimento que constata mediante la diferencia establecida entre los avalúos determinados por el Instituto Agustín Codazzi y el avalúo Fernando Gustavo Martínez Bravo, conforme al comprobante de pago No. 3783 de fecha 30 de diciembre de 2013, por valor de \$143.967.452 MCTE., se vislumbra la falta en que incurrió el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT quien se desempeñó como Alcalde para la época de los hechos, quien ostento la calidad de gestor fiscal quien suscribió la promesa de compraventa del bien inmueble Lote No. 1 con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 y que posteriormente fue consolidado el negocio jurídico de compraventa a través de la escritura pública No. 3078 y respecto al señor HERIBERTO ARCILA PUENTES, evidencia este despacho que actuó en condición de vendedor del

⁵ Jorge Correa Fontecilla. Jefe de la División de Coordinación e Información Jurídica de la Contraloría General de la República de Chile. "Algunas consideraciones sobre el interés público en la Política y el Derecho". Páginas 140 y 160.

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

bien inmueble por lo tanto es claro que no contempla la calidad de gestor fiscal toda vez que quien desborda los alcances de la gestión fiscal es el señor alcalde para la época de los hechos y fue quien adelanto las acciones conducentes para la determinación del avalúo comercial del bien inmueble y por lo tanto el señor ARCILA PUENTES no fue receptor de anticipos y no se procederá a imputar responsabilidad fiscal en su contra.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 47 de la ley 610 de 2000, se procede a archivar el proceso por cesación de la acción fiscal.

"Habrà lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o perseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma". Negrilla y subrayado fuera del texto original).

En consecuencia, este Despacho confirma la postura de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal.

2.2. Defensa del ordenamiento jurídico.

El ordenamiento jurídico se concibe mediante un continuo axiológico: en un extremo se aprecian reglas y, en el otro, principios y valores; en forma similar lo determina la Real Academia de la Lengua Española:

"Conjunto de reglas escritas, principios y valores que regulan la organización del poder, las relaciones con los ciudadanos y las garantías de los derechos y las relaciones entre estos, así como ordenan las políticas públicas en beneficio del interés general."

Dicha sistematización normativa prevé una jerarquía (artículo 4 constitucional) que no siendo expreso su orden en la mayoría de las veces, si es tácita conforme a la lectura de la Carta:

"El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas disposiciones superiores se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras. Además de ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin discusión, el primer lugar dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico, dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente prevalentes. Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de competencias que le asigna la Constitución, ocupan, en principio, una posición prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido normativo, deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Tenemos entonces que, de manera general, la normatividad jurídica emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones de la ley, tanto en su sentido material como formal. Aunque existe una jerarquía normativa que se desprende de la Constitución, ella

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"



no abarca, de manera completa, la posición de todas y cada una de las disposiciones que conforman el orden jurídico; es decir el orden de prevalencia normativa no ha sido señalado en su totalidad por el constituyente. (...)

La unidad del sistema jurídico, y su coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular. En esto consiste la connotación de sistema de que se reviste el ordenamiento, que garantiza su coherencia interna. La finalidad de esta armonía explícitamente buscada, no es otra que la de establecer un orden que permita regular conforme a un mismo sistema axiológico, las distintas situaciones de hecho llamadas a ser normadas por el ordenamiento jurídico.”⁶

Se colige de lo precedente que, la defensa del ordenamiento jurídico conlleva la correcta aplicación de las normas, principios y valores que presuponen un manejo de herramientas legales para la decisión de los asuntos entre las autoridades, los ciudadanos y el interés general.

Ahora bien, revisada la fundamentación normativa contenida en el auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 se encuentran plasmadas y aplicadas correctamente las disposiciones constitucionales de los artículos 29, 267, 268 y 272, las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011 y 687 de 2001 modificada por la Ley 1276 de 2009, Decreto 2785 de 2011, usando criterios auxiliares como la jurisprudencia en Sentencias C – 549 de 1993 y SU – 620 de 1996, C – 713 de 1999 y C – 840 de 2001 de la Corte Constitucional; que en forma armoniosa permitieron adelantar y llevar hasta el auto de imputación mixto No. 001 del 26 de febrero de 2024 dentro del presente procedimiento de responsabilidad fiscal, cumpliéndose así la defensa del ordenamiento jurídico instituido como requisito en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

2.3. Defensa de los derechos y garantías fundamentales.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 29 instituyó el debido proceso como una garantía ius fundamental:

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

⁶ Corte Constitucional. Sentencia C – 037 de 2000.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso."

Este derecho y principio de rango constitucional irradia todas las actuaciones judiciales y administrativas que adelantan todas las autoridades en el territorio nacional, así, por ejemplo, lo dispuso el Legislador en el artículo 2 de la Ley 610 de 2000:

"Artículo 2º. Principios orientadores de la acción fiscal. En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo."

El precedente tiene sustento jurisprudencial según los siguientes pronunciamientos de la Corte Constitucional:

"En este orden de ideas, el cumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso contempladas en la Constitución, tendrán diversos matices según el derecho de que se trate, dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar "reglas y procedimientos" de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas."

"El debido proceso constituye un conjunto de garantías destinadas a la protección del ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio. En consecuencia, implica para quien asume la dirección del procedimiento la obligación de observar, en todos sus actos, la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos. Esto, con el fin de preservar los derechos de quienes se encuentran incurso en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o una obligación o a la imposición de una sanción.

Bajo la acepción anterior, el debido proceso se resuelve en un desarrollo del principio de legalidad, en la medida en que representa un límite al poder del Estado. De esta manera, las autoridades estatales no pueden actuar a voluntad o arbitrariamente, sino únicamente dentro de las estrictas reglas

⁷ Corte Constitucional. Sentencia C – 248 de 2013.

procedimentales y de contenido sustancial definidas por la Ley. La manera de adelantar las diferentes etapas de un trámite, de garantizar el derecho de defensa, de interponer los recursos y las acciones correspondientes, de cumplir el principio de publicidad, etc., se encuentra debidamente prevista por el Legislador y con sujeción a ella deben proceder los jueces o los funcionarios administrativos correspondientes.”⁸

“El derecho al debido proceso, como desarrollo del principio de legalidad y como pilar primordial del ejercicio de las funciones públicas, es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones administrativas, como en las de carácter jurisdiccional.

Adicionalmente, esta Corporación ha expuesto en forma reiterativa, que el derecho al debido proceso está conformado por un conjunto de garantías que tienden por el respeto y protección de los derechos de los individuos que se encuentran incurso en una determinada actuación de carácter judicial o administrativa; y en virtud de las cuales, las autoridades estatales cuentan con la obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para cada tipo de trámite.”⁹

Ahora bien, el debido proceso conlleva inmerso otros derechos o garantías:

“La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado

⁸ Corte Constitucional. Sentencia C – 163 de 2019.

⁹ Corte Constitucional. Sentencia T – 115 de 2018.

cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas."¹⁰

Conforme a la enumeración anterior, se revisará el debido proceso en el caso que nos ocupa:

Los numerales i) y iv) se encuentran garantizados por cuanto las disímiles decisiones adoptadas en el curso del proceso fueron adoptadas en los términos fijados en la ley, motivados conforme a la normatividad aplicable al caso y fueron notificadas en debida forma.

Los numerales ii), v) y vi) se tienen asegurados al decidir en única instancia la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal el proceso de responsabilidad fiscal y en grado de consulta el Contralor Departamental, sin que los funcionarios que ocuparon y/o ocupan dichos cargos, tengan impedimentos o recusaciones frente al asunto, procurando así que sus decisiones no se encuentren sujetas a ningún interés personal o particular disímil al interés público.

El numeral iii) se acreditó mediante las diversas notificaciones a los investigados hoy no sancionados para que comparecieran al proceso y rindieran versión libre, formularan descargos y presentaran y/o solicitaran pruebas, incluso mediante la designación de defensor de oficio a través de Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonia.

Por otra parte, según lo expuesto en la introducción de este sub-acápite, el artículo 2 de la Ley 610 de 2020 dispuso que el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal garantizará el debido proceso (que fue expuesto antes inmediatamente) y su trámite su sujetará a los principios de los artículos 29 y 209 constitucionales y del C.P.A.C.A. (artículo 3):

"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

¹⁰ Corte Constitucional. Sentencia C - 341 de 2014.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."

"Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

A

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas."

Los principios contenidos en los artículos 209 constitucional, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 por el auto de imputación mixta No. 001 del 26 de febrero de 2024, se encuentran ajustados en todo el proceso y en especial en el auto que hoy se revisa, conforme lo expuesto; derivación de esto, se halla garantizada la defensa de los derechos y garantías fundamentales en cabeza de este ente de control y por ende, el tercer requisito del grado de consulta contenido en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

De conformidad con el acervo probatorio antes relacionado y analizado dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, esta dependencia determina que el daño objeto del alcance fiscal ha sido resarcimiento totalmente.

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"



Esta decisión se adopta teniendo como fundamento que la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal, es meramente resarcitoria, en síntesis de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuesta en la sentencia C-340 del 2007, indica que la responsabilidad fiscal tiene como principio o razón jurídica la protección del patrimonio económico del Estado. **"...Su finalidad no es sancionatoria, puesto que no se orienta a reprimir una conducta reprochable, sino eminentemente reparatoria..."**, dado que pretende garantizar el patrimonio público frente al daño causado por la gestión fiscal irregular. De la misma forma, se interpreta y lo provee el artículo 4 de la ley 610 de 2000, en el entendido que los daños causados al erario público deben repararse mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido a la entidad pública. (Negrilla fuera del texto original de las comillas).

En este orden de ideas, se colige que la responsabilidad fiscal que se declara a través un proceso fiscal, es eminentemente administrativo, es patrimonial y no sancionatorio, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad, con el cual se persigue un fin legítimo de justicia material y la defensa del orden justo y del patrimonio público, que redundan en el beneficio de valores y fines constitucionales de mayor jerarquía como la justicia y el orden justo.

Así las cosas, al demostrarse probatoriamente la inexistencia del daño, no es dable continuar con las diligencias del caso, dado a las reglas consignadas en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000 y lo resuelto por la jurisprudencia constitucional. Toda vez, que las características y fines que persigue el proceso de responsabilidad fiscal, es exclusivamente reparatoria, donde la responsabilidad fiscal que se declara en el proceso es **"esencialmente patrimonial y no sancionatoria"** (Sentencia C-382 del 2008 MP Dr.Humberto Antonio Sierra Porto).

"ARTICULO 47. AUTO DE ARCHIVO. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma".

Señalar que el trámite de las diligencias y actuaciones realizadas en el presente proceso, fueron llevadas a cabo con la observancia plena de las garantías sustanciales y procesales propias del debido proceso y derecho de defensa. En consecuencia, lo resuelto en esta decisión de la acción fiscal se ajusta a lo dispuesto en acervo probatorio y marco jurídico ya expresado.

En virtud de lo expuesto en las consideraciones antes referidas en la presente Resolución, procede el suscrito Contralor Departamental del Caquetá a confirmar el auto de imputación mixto No. 001 del 26 de febrero de 2024 mediante el cual decide archivar a favor del señor HERIBERTO ARCILA PUENTES identificado con C.C. No. 6.681.291 de manera que conforme lo dicho en la parte motiva del presente auto y a la percepción y señalamiento figurado en las pruebas acercadas al expediente que hacen parte integral del mismo, no hay certeza de la existencia de irregularidad fiscal alguna por los hechos aquí investigados conforme lo enmarca la Ley 610 de 2000.

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

Por último, resulta importante resaltar la diligente y cuidadosa labor de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal al analizar el artículo 47 de la Ley 610 de 2000, los elementos de la responsabilidad fiscal (artículo 5 de la Ley 610 de 2000), el material probatorio y régimen legal.

IV. DECISIÓN:

Revisada la totalidad del proceso y conforme a los lineamientos fijados en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, los cuales fueron desarrollados en el capítulo III de este grado de consulta, no se advierte irregularidad alguna que invalide lo actuado y por el contrario, se encuentran plenamente garantizadas las defensas del interés público, el ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales, para concluir que se debe confirmar la decisión que se consulta.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto de imputación mixto No.001 del 26 de febrero 2024 proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 1148


ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR por estado la presente decisión en la forma y términos establecidos en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión no proceden recursos.

ARTÍCULO CUARTO: Por secretaria librense los oficios correspondientes, una vez en **FIRME** la presente providencia, **EFFECTUESE** a través de la Secretaría de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, las constancias de Ley y anotaciones en el registro y control que se lleva en la dependencia y trasládese el expediente al archivo central de este Órgano de Control Fiscal para su guarda y custodia conforme la Ley 594 de 2000.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HERMES TORRES NÚÑEZ
Contralor Departamental del Caquetá

Proyectó: Antonio Fajardo Rico- Abogado asesor
Revisó: Hermes Torres Núñez- Contralor Departamental del Caquetá
Aprobó: Hermes Torres Núñez- Contralor Departamental del Caquetá 

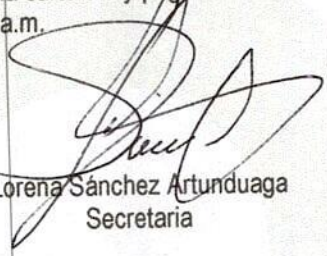
"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"




ESTADO No. 009
Florencia, 18 de junio de 2024

| No. PROCESO | No. ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA | DECISION | EJECUTADO | CLASE DE PROCESO | RECURSOS QUE PROCEDEN |
|-------------|-------------------------|------------|----------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 1148-24 | Resolución No. 200 | 17/06/2024 | Por la cual se grado de consulta | Rodrigo Andrés Castro Betancourt y otros | Fiscal | No proceden |

El presente Estado se fija en lugar visible de la cartelera y pagina web de la Contraloría Departamental del Caquetá, del día de hoy 18 de junio de 2024 a las 8:00 a.m.


Lorena Sánchez Artunduaga
Secretaria

El presente Estado se desfija de la cartelera y pagina web de la Contraloría Departamental del Caquetá, del día de hoy 18 de junio de 2024 a las 6:00 p.m.


Lorena Sánchez Artunduaga
Secretaria

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

498

Chrome

Archevo

Editar

Ver

Historial

Favoritos

Perfiles

Pestaña

Ventana

Ayuda

Mar 18 de jun. 6:30 a.m.

ESTADO 009 PARA PUBLICA

Consecutivos Vigencia 2024

Consecutivos Vigencia 2024

Estado No 09 del 2024 - Cor

cdc.gov.co/notificaciones-por-estado-desp/estado-no-09-del-2024

Buscar en la entidad

Contraloría Departamental del Caquetá

Inicio

Transparencia y acceso a la información pública

Servicios de atención a la ciudadanía

Participa

Noticias

Normatividad

Inicio

Act. Estado Procesos RFC Despa

Modificación: 2024/06/18 06:30:48 - Creación: 2024/06/18 06:30:48

Editar


Estado No 09 del 2024

Fecha de expedición: 2024/06/18 08:00:00

Compartir

Los sujetos procesales que requieran copia de esta providencia pueden solicitarla a través del correo electrónico institucional info@contraloriadelcaqueta.gov.co, indicando el nombre del requirente, número de proceso y de la providencia que solicita. De manera excepcional aquellas personas que no posean o dispongan de un medio electrónico, podrán enviar la solicitud por correo electrónico o del domicilio para recibir respuesta

Archivos para descargar

 estado-009_0001.pdf

388 Kb

499



CONSTANCIA DE EJECUTORIA

Florencia, 19 de junio de 2024

El día 18 de junio de 2024, a última hora hábil de oficina queda debidamente ejecutoriada la Resolución No. 200 de fecha 17 de junio de 2024, por la cual se surte un grado de consulta, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 1148.

Por lo anterior, pasa al despacho de Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia y fines pertinentes.

LORENA SANCHEZ ARTUNDUAGA
Secretaria

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

*Fiscal Camila Geronzi
19/ Junio / 2024.
Hora: 11:23 am.*

MEMORANDO

DC - 306

Florencia, 19 de junio 2024

PARA: Jorge Tadeo Oyola Prieto, director técnico de responsabilidad fiscal

DE: Despacho Contralor Departamental del Caquetá

ASUNTO: Traslado Proceso de responsabilidad fiscal No. 1148

Comendidamente remito Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1148 para la continuación de los trámites correspondientes.

Lo anterior, para lo de su competencia y fines pertinentes.

Cordialmente,



LORENA SÁNCHEZ A.
Secretaria

Anexo: (01) 3 Cuadernos con (499) folios
1 CMC de (42) folios

AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y ASIGNA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS CON RADICADO NÚMEROS 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1176, 1187, 1188, 1193, 1206, 1222, 1231, 1233, 1226, 1232, 1227.

En la ciudad de Florencia Caquetá a los diecisiete (17) día del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024) el suscrito DIRECTOR TÉCNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ, procede avocar conocimiento de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la referencia, en virtud de la competencia prevista en la Resolución N° 229 del 25 de agosto de 2015, (manual de funciones y competencias laborales) modificada parcialmente por Resolución N° 0115 del 02 de mayo de 2019 y las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011, modificadas parcialmente por el decreto 403 del 16 de marzo de 2020.

CONSIDERACIONES

Que la Constitución Política en el Título X De los Organismos de Control – Capítulo 1 De la Contraloría General de la República – artículos 267, “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos (...)” No obstante frente a los departamentos le corresponde a las contralorías territoriales vigilar la Gestión Fiscal de la administración y los particulares que manejen fondos del Estado.

La facultad conferida al Contralor General de la República conforme al numeral 5 del artículo 268 de la Carta Magna se extiende a los Contralores Territoriales, Distritales y Municipales, que para tal efecto le corresponde

“(...) Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación (...)”

A su turno el artículo 272 ibidem, contempla que: “

La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.

(...)

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.

Que mediante acta No.664 del 18 de junio del 2024 el suscrito Servidor Público, se posesionó en el cargo de Director Técnico de Responsabilidad Fiscal en la Contraloría Departamental del Caquetá, nombrado mediante acto administrativo Resolución No.0204 del 17 de junio del 2024.

Que el Director Técnico de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo con el manual de funciones Resolución No.229 del 25 de agosto de 2015, modificada parcialmente por la Resolución No.0115 del 2 de mayo de 2019, tiene la facultad de avocar y adelantar Procesos de Responsabilidad Fiscal que correspondan a la entidad de control, de conformidad con las Leyes 610 de 2000, 1474 de 2011.


Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento y asignar la sustanciación y trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Números 1148, 1154, 1157, 1174, 1162, 1175, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1176, 1187, 1188, 1193, 1206, 1222, 1231, 1233, 1226, 1232, 1227 al doctor **EDGAR MEDINA PÉREZ**, Profesional Universitario, adscrito a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

CÚMPLASE


JORGE TADEO OYOLA PRIETO

**EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS**



Nit. 891.190.246-1

FALLO FISCAL No. 004

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO DE ÚNICA INSTANCIA No. 1148

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:

| | |
|------------------------|--|
| PRESUNTOS RESPONSABLES | RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH C.C. 17.691.533 HERIBERTO ARCILA PUENTES C.C. 6.681.291 |
| ENTIDAD AFECTADA | MUNICIPIO DE EL PAUJIL |
| PRESUNTO DETRIMENTO | \$96.032.548 (Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos) |
| POLIZA No. | 930-73-994000000032 |
| ASEGURADORA | Compañía de Seguros Solidaria de Colombia |

En la ciudad de Florencia, Caquetá a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024), el suscrito Director Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental, procede a dictar el **FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 1148**, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 en la Ley 610 de 2000, en contra de responsables fiscales dentro del actual proceso, el cual se adelanta por el manejo irregular de los recursos públicos del Municipio de El Paujil, Caquetá con fundamento en los siguientes:

2. ANTECEDENTES

Originó la presente investigación el memorando CF- 066 del 05 de abril de 2016, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral, remite la denuncia D-003-16, relacionada con presuntas irregularidades relacionadas con el sobrecosto en la compra de un lote para los desplazados en el Municipio de El Paujil.

De acuerdo con el traslado de la denuncia D-003-16, se estableció que el Municipio de El Paujil suscribió el Contrato de Compraventa No. 001 del 26 de diciembre de 2013, con el señor Heriberto Arcila puentes, en cuantía de Doscientos cuarenta Millones de pesos (\$240.000.000) M/Cte., con el objeto de adquirir un predio con destino a la construcción del proyecto de vivienda en beneficio de la población vulnerable del citado ente territorial, el cual fue adquirido presuntamente con sobrecosto en cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

Mediante Auto No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, esta Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal procedió a dar apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 228 al 233 y reversos), en contra de los señores: **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH**, identificado con cédula de ciudadanía No. 217.691.533 expedida en Florencia,

quien se desempeñó para la ocurrencia de los hechos como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; para la época de los hechos, y **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, quien se desempeñó como vendedor del lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, de la jurisdicción del Municipio de El Paujil, Caquetá, según certificado de libertad y tradición de fecha 26 de diciembre de 2013, obrante a folio 9 al 50. Y en calidad de tercero civilmente responsable a la compañía de seguros Solidaria de Colombia.

Mediante Auto No. 034 de fecha 30 de septiembre de 2019, el Director Técnico de Responsabilidad Fiscal en ejercicio de la competencia establecida en la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 229 del fecha 25 de agosto de 2015, procedió a dictar Auto de designación de apoderado de oficio dentro del Proceso de Respsoanbilidad Fiscal No. 1148, para los investigados RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT y HERIBERTO ARCILA PUENTES, quienes para la época de los hechos se desempeñaron como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá y Vendedor del predio objeto del Contrato de Compraventa; con el fin de que los representaran dentro de este proceso fiscal, garantizándoles así el derecho de defensa y contradicción a los investigados, con el objeto de cumplir el debido proceso y otorgar sin lugar a dudas todas las garantías procesales inherentes a los investigados (folio 244 al

El día 26 de febrero de 2021, mediante Auto de Imputación Mixta No. 001, se procedió a imputar responsabilidad fiscal contra: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT en cuantía de Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte., y en contra del Tercero Civilmente Responsable la compañía de Seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA DE COLOMBIA S.A. De igual manera se procedió al archivo parcialmente a favor del señor HERIBERTO ARCILA PUENTES (folio 295 al 330).

Mediante Grado de Consulta No. 114 de fecha 21 de marzo de 2024, se confirma el Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024 (folio 370 al 385).

Mediante Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, se resolvió solicitud de práctica de pruebas (folio 390 al 396).

Mediante Auto No. 009 de fecha 17 de abril de 2024, se resolvió recurso de reposición frente al Auto No. 008, a través del cual se decidió práctica de pruebas dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 422 al 439).

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de derecho se aducen las siguiente:

304



Nit. 891.190.246-1

- Artículos 267, 268 y 271 de la Constitución Política de Colombia, artículos modificados por el Acto Legislativo 4 de 2019, los cuales establecen que la vigilancia del Control Fiscal de la Administración Pública corresponde a las Contralorías.
- Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por la cual se establece el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorías.
- Ley 1474 del 12 de julio de 2011, modificada parcialmente por el Decreto 403 de 2020, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 80 de 1993.
- Las demás normas que se referencien.

4. ENTIDAD ESTATAL AFECTADA

El Municipio de El Paujil con NIT. 800-095.763-0.

5. PRESUNTOS IMPLICADOS

RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURTH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.691.533, expedida en Florencia, Caquetá; quien se desempeñó para época de ocurrencia de los hechos como Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; de acuerdo con el Acta de posesión No. 008 del 31 de diciembre de 2011 (folio 204).

HERIBERTO ARCILA PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291, expedida en El Paujil, Caquetá; quien se desempeñó para la época de los hechos como Contratista (vendedor) del Municipio de El Paujil, Caquetá.

6. CUANTÍA

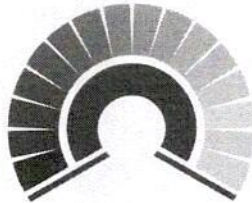
Fue determinado un presunto detrimento por la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

7. PRUEBAS

Se tienen como pruebas los siguientes documentos allegados en la denuncia D-003-16:

1. Oficio de fecha 10 de septiembre de 2014, por medio del cual se Autoriza al Alcalde de El Paujil, remite la siguiente información: (folio 3).
- Acuerdo No. 011 del 22 de junio de 2012, por medio del cual se autoriza al Alcalde, Departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda (folio 4 al 7).

505

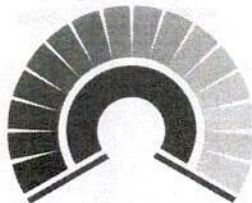


CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

- Copia del Contrato de promesa de Compraventa No. 011 del 26 de diciembre de 2013, con su respectiva notificación al supervisor del Contrato (folio 8 al 11).
 - Copia del comprobante de pago No. 3783 del 30 de diciembre de 2013, por la suma de Doscientos Cuarenta Millones de Pesos (\$240.000.000) Mcte (folio 12).
2. Oficio No. 505.10.045-567 del 16 de octubre de 2014, suscrito por el Alcalde del Municipio de El Paujil, remite la siguiente información (folio 16).
- CD con el esquema del Ordenamiento Territorial del Municipio de El Paujil (folio 16-A).
 - Copia de la escritura pública No. 1728 del 27 de septiembre de 2006 con la respectiva constancia de la matrícula inmobiliaria (17 al 22 y reversos).
 - Copia del informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales, emitida por el Ingeniero Civil Fernando Gustavo Martínez Bravo (folio 25 al 33).
3. Oficio No. 7832014EEE3493-01 del 17 de octubre de 2014, suscrito por el Director Territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual informa que no existen avalúos en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-88245 (folio 37).
4. Oficio No. 501.01.045.011 del 27 de enero de 2015, suscrito por el Alcalde del Municipio de El Paujil, remite la siguiente información (folio 40).
- Copia de la escritura pública No. 3078 del 26 de diciembre de 2013 (folio 41 al 48).
 - Copia del certificado de libertad y tradición del bien identificado con la matrícula inmobiliaria No. 420-109661 a nombre del Municipio de El Paujil (folio 49 al 50).
5. Oficio de fecha 20 de enero de 2015, suscrito por la Directora encargada del banco Agrario e Colombia (folio 52).
6. Oficio No. 7832015EE1617-01 de fecha 29 de mayo de 2015, suscrito por el Director Territorial Encargado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual informa que no cuentan con el personal idóneo ni los recursos para realizar avalúos comerciales (folio 54 al 55).
7. Oficio No. 78320015EE1617-01 de fecha 29 de mayo de 2015, traslado a la sede central el IGAC para que realice el estudio y envíe personal para que apoye requerimientos (folio 56).
8. Oficio 800201EE13732-01 de fecha 14 de diciembre de 2015, suscrito por el Coordinador GIT Avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual solicita información para realizar un avalúo (61).
9. Oficio No. 8002015EE14620-01 de fecha 30 de diciembre de 2015, suscrito por el Coordinador GIT Avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del cual allega el avalúo del bien inmueble identificado con matrícula catastral No. 00-01-0003-0004-000 (folio 63 al 97).
10. Acta de visita especial de fecha 29 de diciembre de 2015 (folio 98 al 101).

506



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

11. Oficio No. 505.10.045-083 del 07 de marzo de 2016, suscrito por el Secretario de Gobierno del Municipio de El Paujil, remite la siguiente información (folio 105).

- Certificación laboral del señor Rodrigo Andrés Castro Bethancourt (folio 106).
 - Certificación laboral del señor José Daimé Sánchez Torres (folio 107).
 - Copia de la póliza de Seguro de Vida de Grupo No. 994000000887 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 108 al 110).
 - Copia de la póliza de seguro de responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 560-87-994000000011 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folios 111 al 114 y 149 al 151).
 - Copia de la póliza de Seguros Multirriesgos No. 560-73-994000000499 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 115 al 148).
 - Copia póliza de Seguro Multirriesgo No. 630-40-994000000032 expedida por la Aseguradora de Colombia (folio 152 al 162).
 - Copia de la póliza de Seguro de Automotores No. 630-40-994000000090 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 263 al 165).
 - Copia de la póliza de seguro de responsabilidad Civil Servidores Públicos No. 630-87-994000000004 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia (folio 166 al 167).
 - Copia de la póliza de Responsabilidad Civil No. 1002603 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. (folio 168 al 179 y 197 al 199).
 - Copia de la póliza de Seguro de Vida de Grupos Póliza Normal 10011765 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. (folio 180).
 - Copia de la póliza de Seguros Multirriesgo No. 1000081 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. (folio 181 al 196)..
 - Certificación de la menor cuantía para contratar por parte del Municipio de El Paujil para la vigencia 2013 (folio 200).
 - Copia del Decreto No. 165 del 19 de diciembre de 2013, por medio del cual se hace un nombramiento (folio 201).
 - Copia del Acta de posesión No. 65 del 19 de diciembre de 2019 (folio 202).
 - Copia de la escarapela expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (folio 203).
 - Copia del Acta de posesión de fecha 31 de diciembre de 2011 del señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt (folio 204).
12. Testimonio rendido por el ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo (folio 446 al 450).

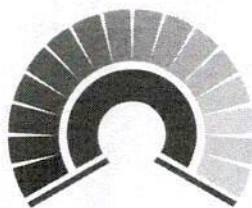
8. ACTUACIONES PROCESALES

1. Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, por medio del cual se abrió el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 228 al 233 y reversos).
2. Comunicación de vinculación al tercero civilmente responsable del Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018 (folio 234).

Página 5 de 152

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"

507



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

3. Notificación por aviso al investigado Rodrigo Andrés castro Betancourt (folio 241).
4. Notificación Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, por aviso al señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt (folio 242).
5. Notificación Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, por aviso al señor Heriberto Arcila Puentes (folio 242).
6. Auto de fecha 13 de mayo de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación del proceso (folio 243 y reverso).
7. Auto No. 034 de fecha 30 de septiembre de 2019, por medio del cual se ordena designar apoderado de oficio (folio 244 al 246).
8. Constancia secretarial de estado No. 075 de fecha 01 de octubre (folio 247).
9. Diligencia de posesión defensor de oficio del estudiante de Derecho Darwin Alexander Plazas Varón en representación del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt (folio 249).
10. Diligencia de posesión defensor de oficio del estudiante Fitzgeraeld Noreña Acevedo en representación del investigado Heriberto Arcila Puentes (folio 251).
11. Auto de fecha 03 de diciembre de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 255).
12. Auto de fecha 21 de febrero de 2020, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 256).
13. Auto por medio del cual se suspenden los términos en los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y procesos administrativos coactivos de la Contraloría Departamental del Caquetá (folio 257).
14. Constancia secretarial de estado (folio 258).
15. Auto por medio del cual se reanudan términos en los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios y procesos de jurisdicción coactiva de la Contraloría Departamental del, Caquetá (folio 259 y reverso).
16. Constancia secretarial de estado (folio 260).
17. Diligencia de posesión defensor de oficio de la estudiante de Derecho Stefanny Michelly Olarte Hernández como defensora de oficio del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt en sustitución del estudiante de Derecho Darwin Alexander Plaza Varón (folio 262).
18. Auto de fecha 19 de enero de 2022, por medio del cual se avoca conocimiento y se designa sustanciación (folio 265 y reverso).
19. Auto de fecha 25 de abril de 2022, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 268).
20. Diligencia de posesión defensor de oficio del estudiante de Derecho Jonh Edwin Ortiz Cuéllar como defensor de oficio del investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt, en sustitución de la estudiante de Derecho Stefanny Michell Olarte Hernández (folio 279).
21. Auto de fecha 01 de abril de 2023, por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna sustanciación (folio 285).
22. Auto de fecha 01 de enero de 2024 por medio del cual se avoca conocimiento y se asigna

- sustanciación (folio 286).
23. Oficio PF-137 de fecha 26 de enero de 2024, mediante el cual se cita al investigado Rodrigo Andrés Castro Betancourt a rendir versión libre y espontánea para el día 02 de febrero de 2024 a las 2.30 pm (folio 289).
 24. Oficio PF-146 de fecha 30 de enero de 2024, mediante el cual se cita al investigado Heriberto Arcila Puentes a rendir versión libre y espontánea para el día 06 de febrero de 2024 a las 9.00 am (folio 290 al 290).
 25. Rendición versión libre y espontánea del señor Heriberto Arcila Puentes (folio 292 al 293).
 26. Auto de Imputación No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024 (folio 295 al 330).
 27. Resolución No. 114 de fecha 21 de marzo de 2024, por la cual se surtió grado de consulta, respecto del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024 (folio 370 al 385).
 28. Constancia de ejecutoria de la Resolución No. 114 de fecha 21 de marzo de 2024, por la cual se surtió grado de consulta, respecto del Auto de Imputación Mixta No. 001 de fecha 26 de marzo de 2024 (folio 388).
 29. Auto No. 008 de fecha 03 de abril de 2024, por medio del cual se resuelve solicitud de pruebas dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1148 (folio 390 al 396).
 30. Auto de fecha 009 de fecha 17 de abril de 2024, por medio del cual se resuelve recurso de reposición frente al Auto No. 008 a través del cual se decidió sobre la práctica de pruebas dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal de única Instancia (folio 422 al 439).
 31. Constancia de estado No. 026 de fecha 18 de abril de 2024 (folio 440 al 442).
 32. Auto No. 011 de fecha 02 de mayo de 2024, por medio del cual se corre traslado de pruebas practicadas (folio 460 al 464).

9. VERSIONES LIBRES Y ESPONTÁNEAS

Se citaron para rendir versión libre y espontánea a los señores: RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, para el día dos (02) de febrero de 2024, a las 2:30 pm; y a HERIBERTO ARCILA PUENTES, para el día seis (06) de febrero de 2024, a las 9:00 am compareciendo solamente el señor HERIBERTO ARCILA PUENTES, para la fecha citada, entre los cuales expresó:

(...) **PREGUNTADO:** Se pone de presente el Auto de Apertura No. 025 de fecha 18 de diciembre de 2018, obrante a folios 228 al 233, que tiene que decir sobre lo aquí investigado?

CONTESTADO: En el año 2013, el alcalde me compró 6 hectáreas por \$240.000.000, me dijo que el municipio pagaba todos los gastos de la escritura, entonces cuando ya se cerró el negocio, dijo que el municipio que el municipio no pagaba nada y debía hacerlo yo, cosa que yo hice alrededor de \$10.000.000, entonces me tocó pagar todo a mi, a los pocos días me dio la plata, sacándome el iva y otros gastos. **PREGUNTADO:** como determinaron el precio de venta



Nit. 891.190.246-1

del lote en mención. **CONTESTO:** Recuerdo que yo le pedí más, pero no recuerdo cuanto, él me ofreció esa plata y por esa plata le vendí, este negocio lo hicimos en la casa de él. **PREGUNTADO:** Quien realizó el estudio de avalúo **CONTESTO:** de eso no me acuerdo que sucedió, simplemente acodamos ese precio y eso me pagó. **PREGUNTADO:** Obra en el expediente avalúo realizado por un particular en cuantía de \$240.000.000 y otro que realizó el IGAC en cuantía de \$144.000.000 aproximadamente, usted tuvo conocimiento del avalúo que adelantó el particular. **CONTESTO:** Recuerdo que para la venta el alcalde me mencionó del IGAC., pero no recuerdo que me dijo de eso. **PREGUNTADO:** A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial. **CONTESTO:** No señor, eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 por hectárea. **PREGUNTADO:** Ha sido usted llamado a declarar por estos hechos ante la Fiscalía o Procuraduría. **CONTESTO:** No señor. **PREGUNTADO:** Sírvase manifestar si tiene algo más que agregar, corregir, suprimir, o enmendar a la presente diligencia. **CONTESTADO:** No señor. (...)

8. ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS

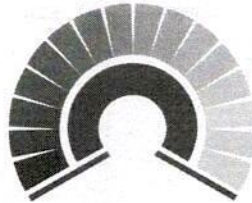
A través de constancia secretarial de fecha 12 de marzo de 2024, la secretaria de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, certifica que el "día 11 de marzo de 2024, el estudiante **JOHN EDWIN ORTIZ CUELLAR** Defensor de oficio del señor **RODRIGO ANDRES** (sic) **CASTRO BETANCOURT**, presentó dentro de los términos los argumentos de defensa, contra el auto de Imputación Mixta N°. 001 del 26 de marzo de 2024."

"Que el día 11 de marzo del 2024 vencieron los términos con los que contaba los demás implicados frente al Auto de Imputación Mixta N° 001 del 26 de febrero del 2024"

En el escrito con argumentos de defensa presentado por el defensor de oficio del investigado **RODRIGO ANDRÉS CASTRO**, allegado mediante correo electrónico, entre sus apartes precisó:

(...) IV. CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS:

En punto de lo manifestado por el ente acusador, mi Representado, no observó el principio de responsabilidad, transparencia y economía al adquirir y pagar por el terreno identificado con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-109661**, destinado a construcción del proyecto de vivienda de interés social y/o interés prioritario consignado en el plan de desarrollo, un sobre costo cuya cuantía asciende a **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP**, conllevando con ello, un daño patrimonial al estado y en



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

contra del MUNICIPIO DE EL PAUJIL, materializando además, una gestión antieconómica e ineficiente en los términos prescritos en la ley 610 de 2000.

Revisado el contenido del Auto de Imputación N°. 001, proferido por la Contraloría Departamental, se evidencia que la misma en sus argumentaciones, señaló presuntas irregularidades respecto de los siguientes:

✓ PRIMERO: EL AVALÚO.

✓ SEGUNDO: LA IDONEIDAD DEL PERITO AVALUADOR.

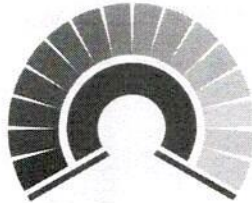
✓ TERCERO: LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES DEL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT

Aquí, es preciso referir, que en línea con lo anterior, el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, en defensa de las garantías, prerrogativas y derechos que le asisten al señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT y en el ejercicio de Defensa y Contradicción que a éste le corresponde, desarrollará el presente escrito en apartados que obrarán en el mismo orden allí referido y que para acompañar los argumentos y consideraciones que a cada uno corresponden, se permitirá incorporar al presente escrito, capturas de imagen, tomadas de los documentos y material probatorio que obra en el expediente del proceso de la referencia, que corroborarán las actuaciones y procedimientos desplegados por la Administración Municipal en cabeza de mi Prohijado. De los elementos de prueba que reposan en el expediente, se infiere, desde ya, no se ha adelantado la correspondiente valoración probatoria, acorde con lo referido en la ley 610 de 2000.

Éste y otros hallazgos importantes respecto de lo actuado por parte de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, emergerán y se harán notorios, conforme al desarrollo de dichos apartados, en el orden que a cada uno corresponde, así:

APARTADO PRIMERO: DEL AVALÚO:

Sirva precisar que mi PROHIJADO, en primer lugar, acudió ante PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, esto es, el señor **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, Ingeniero Civil de Profesión, inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

AVALUADORES, con Matrícula R.N.A/C.C.-25-1885, para que éste, realizara el informe de AVALÚO del predio con MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285.

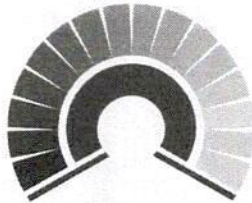
Mencionado PROFESIONAL, en efecto, el día 10 de mayo de 2012, a solicitud de la Alcaldía Municipal del Paujil, presentó informe de **AVALÚO DE PREDIO RURAL**, con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, ubicado en la vereda el Borugo del mismo municipio. En dicho informe destacan, entre otros aspectos, el apartado **"Nº. 5 INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS - 5.1 METODOLOGÍA-COMPARACIÓN DE MERCADOS"**, en donde manifiesta el Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO**, lo siguiente:

"Para efectos de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso, estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3 variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación, el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior a 7.5%"

Seguido a ello, aprecia el **SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO**, cuadro estadístico contenido en el apartado **"5.2 CUADRO ESTADÍSTICO"**, del cual inserto para su correspondiente corroboración, captura de imagen respectiva, así: **(Ver Captura Nº. 1)**

| 5.2 CUADRO ESTADÍSTICO | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
| INFORMANTE | VALOR/ Ha. | MEDIA ARITMÉTICA | | 39.250.000 | |
| | | DESVIACION ESTÁNDAR | | 2.061.552,81 | |
| Victor Gomez | 38.000.000 | COEF. DE VARIACIÓN | | 5,25% | |
| Lazaro Rivera | 41.000.000 | ADOPTADO | | \$ 39.250.000 | |
| Alex Moises | 37.000.000 | | | | |
| Perito | 41.000.000 | | | | |
| | 157.000.000 | | | | |
| | | 431.034 | | | |
| 5.3 VALOR POR HA. PROPUESTA POR EL ENCUESTADO POR CLASE AGROLÓGICA | | | | | |
| CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE IV | CLASE V | CLASE VI |
| | | | \$ 39.250.000 | | |

Nótese que el Ingeniero **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, consultó el valor por Hectárea con los señores **VÍCTOR GÓMEZ, LÁZARO RIVERA y ALEX MOISES**. Que los valores aportados por éstos, más el que aporta el **PERITO**, dan cuenta de un valor estimado de \$39.250.000 por Hectárea, al cual, se le suman aquellos con ocasión de las mejoras, en virtud de los 1334 metros de Cerca Eléctrica en Alambre Acerado, por



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

valor de \$2.001.000 y \$2.500.000, por los pastos mejorados, presentes en CINCO (5) de las SEIS (6) hectáreas del predio, como así se establece en el apartado "6. MEJORAS".
6.1 CERCAS y 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO. Lo anterior, se puede apreciar en la **Captura N°. 2.**

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
INGENIERA CIVIL
Avalúos en general, interventorias, acueductos, vías, vivienda

| I VALOR INTRINSECO DEL TERRENO | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| CLASE AGROLÓGICA | ÁREA Ha. | VALOR \$ / Ha. | VR. \$ / por clase agrológica | | |
| ase IV | 6,00 | \$ 39.250.000 | \$ 235.500.000 | | |
| | | SUBTOTAL 1 | \$ 235.500.000 | | |
| 6. MEJORAS | | | | | |
| 1 CERCAS | METROS | MATERIALES | ESTADO ACTUAL | \$ / M LINEAL | VALOR TOTAL |
| LASE | | | | | |
| Cerca eléctrica | 1334 | Alambre Acerado | Bueno | \$ 1.500 | \$ 2.001.000 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 2.001.000 |
| 6.2 ESTANQUES O RESERVORIOS | | | | | |
| ANAMETROS (MTS) | PROFUNDIDAD (Mts) | MATERIALES Y MANO DE OBRA EMPLEADA | | VALOR TOTAL | |
| | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | |
| 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO | | | | | |
| CULTIVO | DESCRIPCIÓN ESTADO | ÁREA (HÁS) | \$ POR HECTÁREA | \$POR CULTIVO | |
| SEMIPERMANENTES | Mejorados, Bueno | 5,00 | \$ 500.000 | \$ 2.500.000 | |
| PASTOS | | | | \$ 0 | |
| OTROS | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | \$ 2.500.000 | |
| SUB TOTAL 2 (6.1), (6.2), (6.3) | | | | | \$ 4.501.000 |

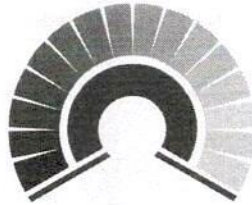
Es de todo lo anterior, que se concluye el "RESUMEN DE VALORES PARCIALES", contenido antes de la firma del PERITO AVALUADOR, como adelante se muestra: (Ver **Captura N°. 3**)

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
INGENIERA CIVIL
Avalúos en general, interventorias, acueductos, vías, vivienda

| RESUMEN VALORES PARCIALES | |
|--|----------------|
| VALOR TERRENO (SUBTOTAL 1) | \$ 235.500.000 |
| VALOR CERCAS, JAGUEYES Y CULTIVOS (SUBTOTAL 2) | \$ 4.501.000 |
| VALOR CONSTRUCCIONES Y ANEXOS (SUBTOTAL 3) | \$ 0 |
| VALOR MAQUINARIA Y EQUIPOS (SUBTOTAL 4) | \$ 0 |
| SUB-TOTAL | \$ 240.001.000 |
| REDONDEO | -1000 |
| VALOR AVALUO | \$ 240.000.000 |
| SON | |
| DIECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) MCTE | |

FIRMA PERITO
FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
Perito Avaluador R.N.A No. CC-25-1885 AFILIADO A CORPOLONJAS

513



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

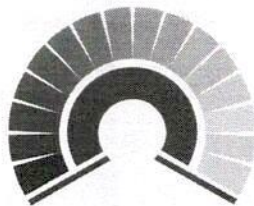
En dicho resumen, se constata el valor total del PREDIO objeto de dicho AVALÚO, por cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/Cte. COP. Es decir, CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/Cte. COP, por hectárea, lo cual es congruente con el análisis del mercado realizado por el PERITO AVALUADOR, de manera directa en la ZONA, como evidentemente se muestra en la Captura N°. 1 ya referida.

En este punto, es importante destacar que el **AVALÚO REALIZADO POR EL IGAC**, dista de la realidad del mercado en la zona, por cuanto éste, refiere que el AVALÚO de dicho predio, corresponde a la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/Cte. COP**, ello, en consideración del "dato de mercado número 10", contenido en la "página 14 de su INFORME DE AVALÚO COMERCIAL RURAL", así: (Ver Captura N°. 4 y 5)

El dato de mercado número 10, corresponde a una finca de menor extensión, topografía plana y ondulada, ubicada adjunta a la zona urbana de El Paujil y al predio de estudio. Valor por hectárea es de \$26.300.000.

Considerando lo anterior, el valor más aproximado por hectárea de terreno para la unidad fisiográfica (1) es de \$26.300.000; teniendo en cuenta el valor de terreno hectárea del dato de mercado número 10, por tener áreas de terreno de menor extensión, topografía similar, ubicarse cerca de la zona urbana de El Paujil y al predio objeto de avalúo.

Si bien, se procura dar fundamento al AVALÚO REALIZADO por el IGAC, DEBE ADVERTIR el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, que el AVALÚO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, no fue realizado de manera DIRECTA, por cuanto, como así se advierte en su estudio en la página 12, "**la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA, se llevó a cabo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET**", y es por intermedio de éstos datos, que infiere "**NO ES NECESARIO REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DIRECTA**": (Ver Capturas N°. 5 y 6)



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

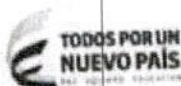
Nit. 891.190.246-1

11. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

11.1 INVESTIGACIÓN INDIRECTA:

Método de Comparación o de Mercado Se utilizó este método para determinar el valor del terreno y se analizó la información de ofertas obtenidas en el sector y por internet de la siguiente manera:

En los antecedentes de avalúos del año 2012 se encontraron avalúos comerciales de predios ubicados en el municipio de El Paujil, se evidenció que para predios ubicados en la zona montañosa rural y a distancias mayores de más de siete kilómetros los valores de terreno oscilan entre \$800.000 y 2.500.000, dependen principalmente de la distancia a la zona urbana y de clase agrológica.



la investigación indirecta se pueden adoptar valores, no es necesario realizar la investigación directa.

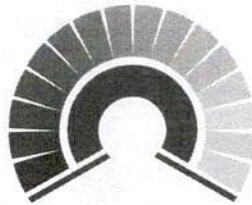
11.3 VALORES ADOPTADOS

Con base en la investigación indirecta, se obtiene el siguiente resultado:

| ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|----------------|
| U.F.1 | Ha | \$ 26.300.000 |

Es claro entonces, de conformidad con lo aportado, que a diferencia de lo actuado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, el AVALÚO realizado por el Ingeniero CIVIL **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, **si cuenta con un estudio de mercado directo, lo cual, incide en la veracidad de los datos que en su informe incorpora** y que a efectos de restar mayores esfuerzos en controversia, **EL SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO**, pudo corroborar que el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía N.o 6.681.291 de EL PAUJIL- CAQUETÁ, y quien

515



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

fuera el propietario de la extensión de predio rural, objeto de compraventa con la Alcaldía Municipal del Paujil, como así obra en escritura pública N.º3078, debidamente registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos en Folio de Matricula Inmobiliaria 420-109661, manifestó en **VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA** rendida el día 06 de febrero de 2024 a las 09:15 a.m., lo siguiente: (Ver Captura N.º. 7)

"Preguntado a: A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial **CONTESTÓ:** **"No señor eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 millones por hectárea".**



CONTRALORÍA


DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1


PREGUNTADO: A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial. **CONTESTÓ:** No señor, eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 por hectárea. **PREGUNTADO:** Ha sido usted llamado a declarar por estos hechos ante la Fiscalía o Procuraduría. **CONTESTO:** No señor. **PREGUNTADO:** Sírvase manifestar si tiene algo más que agregar, corregir, suprimir, o enmendar a la presente diligencia. **CONTESTADO:** No señor.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina después de leída y aprobada por los que en ella intervinieron, siendo las 9:40 a.m.

EXPONENTE:


HERIBERTO ARCILA PUENTES
C.C. 6.681.291 de El Paujil.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO:


EDGAR MEDINA PEREZ
Abog. Sustanciador.

Manifestación, que por sí sola, da cuenta del valor que estimaba el anterior propietario, el señor **HERIBERTO ARCILA**, por su terreno. Que obra, además, en consonancia con los valores tomados por el **PERITO AVALUADOR** de manera **DIRECTA** y que incluso, corrobora que la Administración en cabeza de mi PROHIJADO, **"obró de conformidad con los valores contenidos en dicho avalúo y no aceptó o pactó un valor superior al**



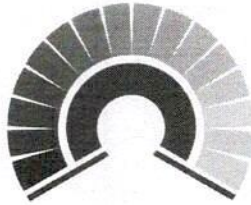
Nit. 891.190.246-1

allí establecido, esto es **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$240.000.000) DE PESOS M/Cte. COP**", resultando por demás excesiva, la forma como la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, constató el presunto detrimento, esto es, "mediante la diferencia establecida entre el avalúo INDIRECTO determinado por el Instituto Agustín Codazzi y el avalúo DIRECTO, realizado por el PERITO AVALUADOR, señor Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO. Lo anterior, por cuanto la forma en la cual fuera realizado el estudio de mercado por parte del IGAC, obedece a uno que no corresponde en efecto, con la realidad. Téngase en cuenta, también, que en virtud del Artículo 2o del Decreto Reglamentario N°. 1420 de 1998, "Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien". Si bien, el señor HERIBERTO ARCILA PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.681.291 de EL PAUJIL- CAQUETÁ, y quien fuera el propietario de la extensión de predio rural, objeto de compraventa con la Alcaldía Municipal del Paujil, consideró que el valor de cada hectárea correspondía a CINCUENTA MILLONES DE PESOS (**\$50.000.000) M/Cte. COP**.

Por su parte, el estudio de mercado adelantado por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL y contenido en el avalúo presentado a la Administración Municipal, arrojó un valor en cuantía que daba cuenta de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/Cte. COP, menos por hectárea, respecto del precio considerado por su propietario.

Si se observa con detenimiento, la Administración municipal, en cuanto no pagó por el predio en mención, suma distinta a la contenida en el Avalúo realizado, le ahorró al municipio la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) por cuanto no reconoció el valor que consideraba el propietario, de tal suerte, que dicho predio se comprara en DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/Cte. COP y no en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000) que así consideraba el señor ARCILA PUENTES, era el valor comercial de la extensión de terreno que era de su propiedad.

Tal ahorro, de conformidad con lo contenido en el Artículo 2 del Decreto Reglamentario 1420 de 1998, demuestra que tanto el comprador como el vendedor actuaron libremente y que en todo caso, EL COMPRADOR, - en virtud de la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS y de la METODOLOGÍA empleada para la COMPARACIÓN DE MERCADOS", contenida en el avalúo comercial del predio rural y realizada por el PERITO



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

AVALUADOR requerido, esto es, el Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO, a partir de la cual: "Para efectos de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso; estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3 variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación, el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior a 7.5%", - se sujetó a los valores allí señalados, respecto de la sumatoria del valor intrínseco del terreno Agrícola Clase IV a razón de \$39.250.000 por Hectárea, más, aquellos con ocasión de las mejoras en virtud de los 1.334 metros de Cerca Eléctrica en Alambre Acerado, por valor de \$2.001.000 y \$2.500.000, por los pastos mejorados, presentes en cinco (5) de las seis (6) hectáreas del predio, cuya descripción obra en el apartado "6. MEJORAS"- 6.1 CERCAS y 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO, de dicho avalúo.

Que así obrara la Administración en apego estricto a los valores contenidos en el Avalúo, y no de conformidad con los valores estimados por el VENDEDOR, "da cuenta del pago del precio más probable por el cual éste se transaría, y **que se obtuvo a partir de la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS y de la METODOLOGÍA empleada para la COMPARACIÓN DE MERCADOS**" realizada por el PERITO AVALUADOR", quien era persona natural de carácter privado, inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores con Matrícula R.N.A/C.C-25-1885 vigente a la fecha y que fuera requerido por la Administración Municipal, en cabeza de mi Prohijado.

Así, efectivamente se constata que se pagó por el bien inmueble con MATRÍCULA INMOBILIARIA N.o 420-109661, "el precio más probable por el cual éste se transaría" (VALOR COMERCIAL ART. 2o DECRETO REGLAMENTARIO 1420 DE 1998). También, al concretarse dicha compra, con apego al contenido normativo de carácter reglamentario así referido y habiendo con ello, dejado de pagar los SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) M/Cte. COP, de más, que consideraba EL VENDEDOR, (**circunstancia que se traduce en un ahorro para el Municipio**), se desvirtúa en consecuencia la lesión del patrimonio público enrostrada por el ENTE ACUSADOR y que se advierte en punto del "Artículo 6o Daño patrimonial al Estado (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020), contenido en la Ley 610 de 2000", así: "Lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado... (..)Daño



Nit. 891.190.246-1

que podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.

A contrario sensu, se observa en lo actuado por mi PROHIJADO, "apego irrestricto al principio de LEGALIDAD, por cuanto, como se advertirá más adelante, no hay vicios o irregularidades en el procedimiento adelantado por éste, en cabeza de la Administración Municipal y como representante legal de la Entidad Territorial de orden municipal. Si bien, se ha querido mostrar por parte del DESPACHO, que era necesario acudir en primera instancia ante el IGAC y agotar términos que ya no se encontraban consagrados en el marco legal vigente para la fecha en que se suscribiera el Avalúo, lo cierto es que, el hecho de que se acudiera a persona Natural de Carácter Privado, registrada en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, configura o constituye, "un obrar de conformidad con el marco normativo que sí le era exigible a la administración en el año 2012".

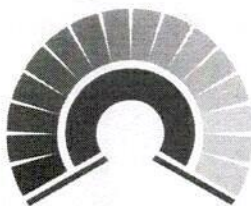
En tal sentido, se solicita a la honorable Contraloría Departamental del Caquetá, que, en virtud de lo argumentado, por cuanto, demostrándose un obrar con apego a la Constitución y a la ley, que desvirtúa los elementos Constitutivos de Responsabilidad Fiscal como así se establece en el **Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal de la Ley 610 de 2000**, ((Modificado por el At. 125 del Decreto 403 de 2020) a saber: " i) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, ii) un DAÑO patrimonial al Estado y iii) el nexo causal entre los dos elementos anteriores, por cuanto los mismos, no se materializan"; toda vez que como así se consagra en el Artículo 122 Constitucional, "Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben", también, porque en sentencia C-341 de 2014, la honorable Corte Constitucional, ha sido expresa en señalar al Derecho al Debido Proceso:

"como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia".

Manifestó, además, que Hacen parte de las garantías del debido proceso:

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva el Derecho a obtener decisiones motivadas (...)

579



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Razón por la cual, corresponde al DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL, en ejercicio de la titularidad de la Responsabilidad Fiscal, en virtud de lo aportado hasta ahora, más todo aquello que en adelante se argumentará con rigor jurídico suficiente y que desvirtúa las imputaciones formuladas por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá en su Auto de Imputación N.º 001, "se prevea por parte del Funcionario Competente en los términos de lo así estipulado en el **Artículo 54 de la Ley 610 de 2000, PROFERIR FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL EN FAVOR DE MI DEFENDIDO**".

Ahora bien, respecto del señor Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ, resulta imperativo referir lo atinente a su IDONEIDAD PROFESIONAL y la facultad que en efecto le acudía al momento de suscribir el Avalúo que se ha buscado cuestionar en el proceso de la referencia, como adelante se sigue.

APARTADO SEGUNDO: DE LA IDONEIDAD DEL PERITO AVALUADOR:

Respecto de la IDONEIDAD DEL PERITO AVALUADOR, advierte el SUSCRITO, se cuestiona, señala y afirma por parte de la DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ en el AUTO DE IMPUTACIÓN N.º 001 del 26 de febrero de 2024, lo siguiente: (Ver Capturas N.º. 8, 9 y 10)

En la página 21 de 36:

Dicha compra presenta presunto detrimento patrimonial al Municipio, toda vez que por parte del de la Administración vigente para la época de los hechos, no se buscó un avalúo comercial del bien inmueble que favoreciera los intereses de Municipio y preservara los recursos institucionales y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de avaluador folio 35), y no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por tanto prefirió realizarlo ante un evaluador privado, el cual presenta sobrevaloración del precio del valor comercial, además de que presuntamente para la época del avalúo no se encontraba certificado por Fedelonjas, según certificación obrante a folio 35.

Se lee en dicho apartado:

(..) “y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador folio 35). (...)

En la página 25 de 36:

En este sentido, se tiene el presunto sobrecosto producto del pago del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, comprado por el Municipio de El Paujil, Caquetá, sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado, con quien presuntamente para la época del avalúo no estaba certificado para realizarlo, como tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante Fedelonjas, condujeron a determinarse detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá.

Se lee en dicho apartado:

(...) y en cambio optar por la compra el mencionado bien producto un avalúo comercial privado con quién presuntamente para la época del Avalúo no estaba certificado para realizarlo” (...)

En la página 34 de 36:

con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, de propiedad del señor Heriberto Arcila Puentes, evidenciándose presunto sobrecosto en la compra del mismo, toda que el Municipio de El Paujil no acudió al avalúo comercial realizado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en su defecto lo hizo a través de avalúo particular que si bien está facultado por la Ley, presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial ni tampoco se evidencia haber acudido a Fedelonjas para que determinara la persona idónea para que lo realizara; sin embargo consultado por la Contraloría Departamental del Caquetá el avalúo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi se evidencia un sobrecosto en cuantía de Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte.,



Nit. 891.190.246-1

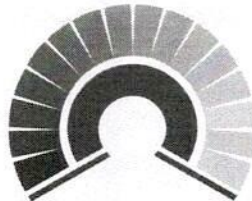
Se lee en dicho apartado:

(...) presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial" (...)

Dicha presunción que obra de manera reiterativa en las argumentaciones de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento, se resalta, se queda sólo en ello, en la presunción. Advierte el SUSCRITO, que no figura en el expediente, prueba allegada por el ente acusador, que de cuenta de la validez de tal afirmación. Que se diga de manera reiterativa como ya fue expuesto, que "PRESUNTAMENTE SE CONTRATÓ A UNA PERSONA NO CERTIFICADA AL MOMENTO DE RENDIR EL AVALÚO COMERCIAL", es una formulación que pretende hacer caer en error al JUEZ y que da cuenta de un actuar temerario por cuanto carece de sustento, incluso legal, como se demostrará en apartado posterior, respecto de la legalidad de lo actuado.

Bastará aquí, con manifestar que, como se verá, el PERITO AVALUADOR, estaba acreditado **COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES y contaba con Registro en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A., con Matrícula R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012.** De ello, consecuentemente, lo que sigue.

En punto de las manifestaciones y señalamientos que hace el DESPACHO, que considera de manera respetuosa el SUSCRITO "No cuentan con el debido sustento", debe observar el FALLADOR, que al revisarse los ELEMENTOS DE PRUEBA contenidos en el expediente del proceso de la referencia PRF-1148, se advierte que el señor INGENIERO CIVIL **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.o 10.541.581 de Popayán, para la época en la que elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, esto es, el día 10 de mayo de 2012, "sí contaba con **APROBACIÓN COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA**". Aprobación certificada por el **CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA"**, de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004.



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Nótese que el Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, para la fecha en que elaboró y suscribió el **INFORME DE AVALÚO DEL PREDIO** al que se ha hecho mención y que fuera adquirido posteriormente por parte del Municipio, **contaba con Registro R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012.**

De lo anterior se colige, NO SOLO LA IDONEIDAD del Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, también, que el mismo se encontraba facultado y habilitado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general, a nivel Nacional" (Véase la **Captura N°. 11**).

Lo así referido, consta en la certificación emitida por la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", que el **SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO**, reitera, se encuentra contenida en el expediente y controvierte de manera fidedigna e incontestable, las afirmaciones y señalamientos que hace la honorable **DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**. (**VER CAPTURAS N°. 11 y 12**)

Captura No. 11

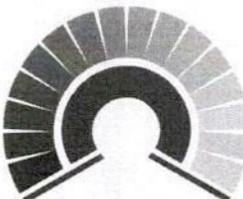
Certifica además que es **Miembro Activo** de esta Entidad Gremial desde el año **2004** y le fue otorgado el **Registro-Matricula No. R.N.A/C.C-25-1885**, que respalda esta determinación con vigencia hasta el día **31 de Julio de 2012**, lo cual le faculta para **avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional.**

Se expide en Bogotá, D.C., a los **09 días** del mes de **Agosto de 2010**


PATRICIA GONZALEZ GUIO
Gerente Administrativo
Junta Directiva

Captura N°. 12

520



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

352



Corpolonjas de Colombia

El Presidente de la Junta Directiva, con base en las matriculas de la
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS
"CORPOLONJAS DE COLOMBIA"

CERTIFICA QUE:

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
 C. C. 10.541.581. Popayán

Presentó solicitud de inscripción en esta Lonja, la cual fue estudiada y aprobada por el Consejo Directivo de Avaluadores de CORPOLONJAS DE COLOMBIA Bogotá, D.C., comprobándose su idoneidad como Perito Avaluador Profesional, ejerciendo en las siguientes áreas:

INMUEBLES URBANOS: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA
INMUEBLES RURALES: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA
AVALUOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
AVALUOS MASIVOS - ESPECIALES
AVALUOS ESPECIALES: RONDAS, HUMEDALES, LOTES CUÑA,
SEMOVIENTES Y VALOR DE PLOTTAGE

Certifica además que es Miembro Activo de esta Entidad Gremial desde el año 2004 y le fue otorgado el Registro-Matricula No. **R.N.A.C-25-1885**, que respalda esta determinación con vigencia hasta el día 31 de Julio de 2012, lo cual le faculta para avalar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional

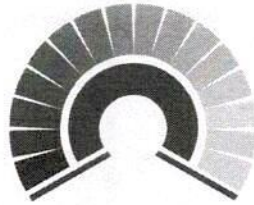
Se expide en Bogotá, D.C., a los **09** días del mes de **Agosto** de 2010



PATRICIA GONZALEZ GUIO
 Gerente Administrativa
 Junta Directiva

SEDE NACIONAL: Carrera 11 No. 95 - 75 Oficina SDPS - PBX: 481 50 50 Fax: 481 52 52
 Celular: 310 571 12 00 - 300 785 50 44 - 315 315 4305 - E-mail: ead@nacionalcorpolonjas.com
 Bogotá D.C. - Colombia

Si bien, ha querido la DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, genera confusión a partir de una impresión distinta y apartada de la verdad y la realidad, lo cierto es que dicha CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE y que el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, R.N.A, es una prestigiosa entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz "FEDELONJAS" y la Sociedad Colombiana de Avaluadores "SCDA", que propende por la profesionalización de la actividad valuatoria en Colombia. Entidad que se ha dedicado desde su fundación a la certificación de avaluadores en el país, buscando brindar seguridad y confianza a los usuarios de avalúos sobre la idoneidad y competencia de los avaluadores inscritos. Registro Nacional de Avaluadores RNA | LinkedIn.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA. Aprobación certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004, misma entidad que corroboró su registro en el Registro Nacional de Avaluadores. También, se incorporó una visión más amplia respecto del Registro Nacional de Avaluadores, prestigiosa entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz "FEDELONJAS" y la Sociedad Colombiana de Avaluadores "SCDA", que se ha dedicado desde su fundación a la certificación de avaluadores en el país, buscando brindar seguridad y confianza a los usuarios de avalúos sobre la idoneidad y competencia de los avaluadores inscritos.

Todos los anteriores, entre otros aspectos, dan cuenta que no había lugar a generar controversia respecto de lo obrado en el Avalúo, así como no existe sustento para las afirmaciones que lamenta el SUSCRITO, fueran referidas por la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá. Para desvirtuar tanto la acreditación como la Idoneidad el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, requerido por la Administración Municipal, pasando por alto también, el mérito que le corresponde al Registro Nacional de Avaluadores, entidad en la cual se encontraba registrado.

No debe perderse de vista tampoco, la manifestación a modo de lamentación que hace el Señor ARCILA PUENTES, a quien, cuando se le preguntó si a su juicio consideraba que la venta del predio se realizó por el valor comercial, respondió: "No señor eso fue muy barato..."

Abordados los anteriores Apartados, procederá el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, a presentar sus argumentos respecto de la legalidad de lo actuado por el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, mi DEFENDIDO.**

APARTADO TERCERO: "DE LA LEGALIDAD DE LO ACTUADO POR EL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT"

Observa el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en su Auto de Imputación N. 0001 de fecha 26 de febrero de 2024, en punto de los Fundamentos de Derecho que soportan el inicio de la Investigación, señala los siguientes:

525



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAUQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Territorial del IGAC, a la SEDE CENTRAL IGAC "para que ella estudiara la posibilidad de enviar personal que apoyara tales requerimientos". (Ver Captura N°. 16)

80
AÑOS
1935 - 2015

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI
Territorial Cauquetá



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

6006/

Florencia,

Señor:
CESAR AUGUSTO OVIEDO
Carrera 13 No. 15-00 Piso 3
Tel: 3208859894
Florencia - Cauquetá

Asunto: Respuesta a su Solicitud

Respetado Señor Oviedo:

Atendiendo sus peticiones con radicados No.7832015ER706, No.7832015ER707 del 24 de Marzo de 2015 y No.7832015ER602, No.7832015ER603 del 13 Marzo, me permito informarle que esta Dirección Territorial no cuenta con el personal idóneo ni los recursos para realizar estos avalúos comerciales, por lo tanto se hizo traslado de sus peticiones a la Sede Central IGAC, para que ella estudie la posibilidad de enviar personal que apoye sus requerimientos

FELIPE ANDRÉS DUSSAN CÁRDENAS
Director Territorial (E)

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 29-05-2015 13:08
Al Contraloría Cite No. 7832015EE1617-01 - P:1 - A:0
ORIGIN: Solicitud de la Dirección Territorial Cauquetá
DESTINO: SEDE CENTRAL IGAC AGUSTÍN CODAZZI
ASUNTO: Solicitud de apoyo para la realización de avalúos comerciales
CDS: LAURA C

CONTRALORIA DPTAL. DEL CAUQUETÁ
RECIBO: 02 JUN 2015 - 2:40
R: 2626
F: Dra. Gloria
P: [Signature]
DE: [Signature]

Hasta aquí, se han aportado elementos que dan cuenta de lo obrado en punto del Avalúo Comercial cuyo estudio de mercado se hizo de manera directa en el lugar en donde se encuentra ubicado el predio, avalúo elaborado y suscrito el día 10 de mayo de 2012 por Perito Avaluador Profesional. De los dineros que, en virtud de la sujeción a lo contenido en dicho avalúo, efectivamente, le ahorró la Administración al Municipio de El Paujil y con lo cual, se contradice la gestión antieconómica predicada por el Ente Acusador, quien se basó en Avalúo adelantado por el IGAC y cuya **INVESTIGACIÓN ECONÓMICA para determinar el MERCADO, se llevó a cabo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET.** También, de la Idoneidad del PERITO AVALUADOR PROFESIONAL requerido por la Administración Municipal en cabeza de mi Prohijado, esto es, el Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, persona natural de carácter privado **certificado por CORPOLONJAS DE COLOMBIA, debidamente registrado en el Registro Nacional de Avaluadores con MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE** para la fecha en que éste, realizó tal Avalúo y quien se encontraba **habilitado COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES**



Nit. 891.190.246-1

Debe observar entonces el FALLADOR, se solicita respetuosamente, que todos los argumentos aportados e imágenes (capturas) incorporadas, en conjunto, como así se predica en el **Artículo 26 de la Ley 610 de 2000**, deben ser valorados y tenidos en cuenta, por cuanto obra en su contenido, prueba fehaciente que, se reitera:

*“desvirtúa lo dicho por la honorable **DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, en aras de restar mérito y credibilidad, presuntamente, tanto a la acreditación como a la facultad que en efecto sí le acudía al PERITO AVALUADOR, **Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, mismo a quien acudiera la Administración del Municipio de El Paujil y quien suscribió el día 10 de mayo de 2012, el AVALÚO que se ha cuestionado desde la Contraloría Departamental y del cual, al parecer, también se ha querido restar el mérito que le corresponde, en consideración de los argumentos en punto del Principio de Legalidad, contenidos en el apartado que me permio exponer más adelante.*

Sea ésta la oportunidad, para comentar, antes de acudir con el siguiente apartado, “ sin ser necesaria la exigencia esgrimida por el DESPACHO respecto de la exclusividad y necesidad de acudir previamente con solicitud ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, que pese a que no lo refiere ampliamente la **honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, en su Auto de Imputación N°. 001, reposa en el expediente, oficio número 7832014EE3493-01 de fecha 17 de octubre 2014, suscrito por el director territorial del **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI**, a través del cual informa que a la fecha no existen avalúos en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria N°440-88285, esto es, el inmueble objeto de controversia y también, documento suscrito por el **DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO**, que da cuenta de la incapacidad de la Dirección Territorial Caquetá del **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI**, para realizar avalúos comerciales, pues no cuentan con personal Idóneo, ni los recursos para realizarlos.

Circunstancia que obra en el oficio 7832015EE1617-01-F:1 – A:0 de fecha 29 de mayo de 2015 y radicado ante la Contraloría Departamental el día 02 de junio de 2015, es decir, dos meses después de ser requerido de manera insistente por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, quien les ofició con antelación en el mes de marzo de 2015, para que se hiciera el avalúo que ésta requería. En dicho documento consta lo mencionado y también, que tuvo que ser direccionado el requerimiento por parte de la Dirección



Nit. 891.190.246-1

EL REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, R.N.A ha representado a Colombia ante la Asamblea General de la International Valuation Standards Committee – IVSC y a la fecha, se encuentra acreditada en NORMA INTERNACIONAL ISO-IEC17024:2012 por la ONAC – ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA, institución que pertenece al Subsistema Nacional de la Calidad – SICAL-, (Registro Nacional de Avaluadores acreditado por la ONAC - La Lonja) - (<https://www.youtube.com/@r.n.a.avaluadores/>) y, como se verá en apartado posterior, para la fecha de los hechos, - no en el año 2013 que es cuando se compró el Bien Inmueble, sino, en el año 2012, el 10 de mayo de esa anualidad, precisamente la fecha exacta en la que fue elaborado y suscrito el Avalúo que sirvió de base para la posterior aprobación emitida por el Concejo Municipal (Acuerdo N.º011) para adquirir el bien inmueble con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, ubicado en la vereda el Borugo del mismo municipio y del cual se desprendería la MATRÍCULA INMOBILIARIA N.º. **420-109661** como así obra en la **Oficina de Instrumentos Públicos**-es en el Registro Nacional de Avaluadores en donde debía encontrarse registrada la persona natural o jurídica de carácter privado, encargada de realizar dicho Avalúo.

Respecto de la Acreditación por parte de la ONAC al REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, en la cual consta el Alcance de la Acreditación de la misma y que muestra, además, de su relevancia, se permite aportar el SUSCRITO, las **Capturas N.º. 13, 14 y 15**, como adelante se sigue, así: ([14-OCP-008 \(onac.org.co\)](http://14-OCP-008.onac.org.co))

Captura No. 13



Nit. 891.190.246-1

Artículo 209, 267 y 268 Numeral 5 de la Constitución Política

Ley 610 de 2000

Ley 1474 2011

Ley 80 de 1993

También, advierte que, con sustento en el contenido del Artículo 15o de la ley 9 de 1989, reglamentado parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2º del Decreto 4117 de 2006, como se verá en lo sucesivo, en sus consideraciones, la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, encuentra los motivos de reproche en contra de mi Prohijado, por las actuaciones que éste realizó, en punto del Avalúo comercial que se elaboró el 10 de mayo del año 2012 por persona natural de Carácter Privado que contaba con Registro VIGENTE en el Registro Nacional de Avaluadores, y a quien acudió para esa fecha, la Administración Municipal en cabeza de mi Representado. Avalúo que determinó el valor comercial y que en efecto sirvió de base para la adquisición posterior, ya en el año 2013, - (contando eso sí, con la aprobación debida por parte del Concejo Municipal y la supervisión de la secretaría de Planeación Municipal para dicha adquisición) - de predio con extensión de seis hectáreas e identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661.

Es a partir de dicho contenido, es decir, **con apego al contenido normativo de carácter reglamentario respecto del artículo 15 de la ley 9 de 1989 así referido, que termina IMPUTANDO RESPONSABILIDAD FISCAL A TÍTULO DE CULPA GRAVE**, en cuantía por NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE, **en contra del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, mi DEFENDIDO.**

Nótese que, **"En referencia a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales, y con sustento en el artículo 15o de la ley 9 de 1989, reglamentada parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2o del Decreto 4117 de 2006, cuyo tenor es el siguiente:**

Ley 9 de 1989:

"Artículo 15: El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones de conformidad con el artículo 18 de la presente ley...

La ley 9 de 1989 fue parcialmente modificada por el Decreto 855 de 1994, en ella, respecto del articulado anterior, se expresa:

Artículo 15. Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, una persona natural o jurídica experta en la materia.

Luego, dicho articulado así contenido en el Decreto 855 de 1994, fue modificado por el Artículo 2a del DECRETO 4117 DE 2006, en el cual se expresó:

Artículo 2º. El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

"Artículo 15. Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

Parágrafo. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".

la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en su Auto de Imputación N. o001 de fecha 26 de febrero de 2024, manifestó:

"Al respecto evidencia este despacho que no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo que lo acredita como tal (folio 35) tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la conclusión de la denuncia D-003-16 **evidencia este Despacho que no se requirió por**



Nit. 891.190.246-1

parte del municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto geográfico Agustín Codazzi sino al particular facultado por la norma para la expedición del Avalúo comercial del bien inmueble en comento, presentándose un avalúo muy por encima del avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad estatal en orden de importancia autorizada por la ley para realizar AVALÚOS COMERCIALES en el país, generándose un presunto daño patrimonial al municipio de El Paujil, en la cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE.

En ese sentido es preciso indicar que el presente proceso tiene su origen en la conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo 2016, relacionado con presuntas irregularidades ocasionadas por la compra el bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el en el municipio del Paujil, Caquetá; el cual consta de 6 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.681 291.

Lo anterior, como así consta, se encuentra contenido en el Auto de Imputación N°. 001 del 26 de febrero de 2024, en las páginas 13, 14 y 15 del mismo, como en efecto se muestra en las imágenes que se siguen a continuación: (VER CAPTURAS 17, 18, 19, 20 y 21)

CAPTURA No.17

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal determina que el presunto detrimento patrimonial se establece en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, como lo expresó la Conclusión de la Denuncia D-003-16, toda vez que es el resultado cuantificado de la confrontación entre los avalúos realizados por el particular Fernando Gustavo Martínez a quien acudió el Municipio de El Paujil y el solicitado por la Contraloría Departamental del Caquetá ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En cuanto a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales encontramos:

La Ley 9 de 1989, "Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones", en su artículo 15 establece:

CAPTURA N°. 18

CAPTURA N. °17

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

"Artículo 15°.- El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones, de conformidad con el artículo 18 de la presente Ley.

La forma de pago, en dinero efectivo, títulos-valores o bienes muebles e inmuebles, será convenida entre el propietario y el representante legal de la entidad adquirente. Las condiciones mínimas del pago del precio serán las previstas en el artículo 29.

Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura pública de compraventa, la entidad adquirente deberá entregar simultáneamente una garantía bancaria incondicional de pago del mismo. La existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de contrato, sin perjuicio del cobro del saldo por la vía ejecutiva.

Facúltase a los establecimientos bancarios para emitir las garantías de que trata el inciso anterior." (Subrayado fuera de texto).

CAPTURA N°. 19 y 20

se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo, que lo acredita como tal (folio 35), tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la Conclusión de la Denuncia D-003-16, evidencia este Despacho que no se requirió por parte del Municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino al particular facultado por la norma para la expedición del avalúo comercial del bien inmueble en comento, presentándose un avalúo muy por encima del avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad estatal en

CAPTURA N°. 20

se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo, que lo acredita como tal (folio 35), tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la Conclusión de la Denuncia D-003-16, evidencia este Despacho que no se requirió por parte del Municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino al particular facultado por la norma para la expedición del avalúo comercial del bien inmueble en comento, presentándose un avalúo muy por encima del avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad estatal en

CAPTURA N°. 21

orden de importancia autorizada por la ley para realizar AVALUOS COMERCIALES en el país, generándose un presunto daño patrimonial al Municipio De El Paujil en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

En este sentido, es preciso indicar que el presente proceso tiene su origen en la Conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo de 2016, relacionado con presuntas irregularidades ocasionadas por la compra del bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el Municipio de El Paujil, Caquetá; el cual consta de seis (69 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del Municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291.

CAPTURA N. °21

En consecuencia, es con sustento en dicho contenido normativo como así se indicó, de donde se desprenden las siguientes consideraciones:

I. Que el precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones... (Ley 9 de 1989 Artículo 15)

II. Que, para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación y que dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.



Nit. 891.190.246-1

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, una persona natural o jurídica experta en la materia. (Decreto 855 de 1994, Artículo 15)

*III. Que, para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, **dicha persona debe encontrarse registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.***

*A lo que debe sumarse lo contenido en su párrafo y es que, si la entidad pública escoge la opción privada, **corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles.***

*Nótese que es a partir de lo precitado, que se extrae que la honorable **DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, hace la respectiva valoración para argumentar en su Auto de imputación, lo siguiente:*

a) Que no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble. (Auto de Imputación N.º 001 página 14)

b) Que tal como lo adujo el trámite de la conclusión de la denuncia D-003-16 evidencia este Despacho que no se requirió por parte del municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto geográfico Agustín Codazzi sino al particular facultado por la norma para la expedición del Avalúo comercial del bien inmueble en comento. (Auto de Imputación N.º. 001 página 14)

c) Que el presente proceso tiene su origen en la conclusión trámite de la denuncia D- 003-16 de fecha 17 de marzo 2016. (Auto de Imputación N.º 001 página 15)

*d) Que no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, **por tanto, prefirió realizarlo ante un evaluador privado (...)** (Auto de Imputación N.º. 001, Página 21 de 36)*



Nit. 891.190.246-1

e) *Que, se tiene el presunto sobre costo producto del pago el bien inmueble indicado con matrícula inmobiliaria número 420-109661 comprado por el municipio del Paujil Caquetá, sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado (...)* (Auto de Imputación N°. 001, Página 25 de 36)

f) *Que, tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante FEDELONJAS, lo cual, en conjunto con lo anterior, condujo a determinarse detrimento patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá".* (Auto de Imputación N°. 001, Página 25 de 36)

g) (...) *Que no se evidencia el trámite realizado por parte del municipio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el establecimiento de dicho avalúo* (Auto de Imputación N°. 001, Página 27 de 36)

h) (...) *fue una conducta que omitió el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, al no acudir en primera instancia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de establecer el valor comercial del predio que finalmente compró el municipio de El Paujil, conforme a la normatividad y procedimiento, pudiendo haber evitado que se generara el detrimento patrimonial en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE.* (Auto de Imputación N. 0001, Página 30 de 36)

En línea con tales ponderaciones, es que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en alusión a mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y en relación con sus funciones en cabeza de la Administración Municipal de El Paujil, señaló:

a) *Era el encargado de dar cumplimiento los fines del Estado para reservar los recursos del municipio y adquirir bienes y servicios a precios del mercado evitando presuntos sobrecostos en la compra de los mismos"* (Auto de Imputación N°. 001, Página 19 de 36)

b) (...) *Que dentro de sus funciones se precisa la establecida en el numeral 9 del Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia: "Ordenar los Gastos municipales de acuerdo con el Plan de inversión y el presupuesto".* (Auto de Imputación N°. 001, Página 19 de 36)



Nit. 891.190.246-1

c) (...) **Que incumplió con los deberes señalados por la Constitución y la ley Respecto a seguir sus actuaciones a la normativa vigente buscando un avalúo comercial que favoreciera las arcas de la entidad territorial que representaba** (...) (Auto de Imputación N.º 001, Página 20 de 36)

d) (...) **Podemos concluir en primer lugar que la gestión fiscal hace relación con las tareas funcionales concernientes a la administración directa del patrimonio público, administración que debe someterse al principio de legalidad así como a los postulados de la Función Pública en general y la función administrativa** (...) (Auto de Imputación N.º.01, Página 21 de 36)

e) **Citó apartado de la Sentencia C-549 DE 1993, en donde se preceptúa que: "... La vigilancia de la acción fiscal se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal, se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes ... y, finalmente los objetivos planes programas y proyectos que constituyen en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración"** (Auto de Imputación N.º001, Página 23 de 36)

f) **Que se evidencia que en su calidad de gestor fiscal indica que no asumió con la debida responsabilidad la disposición y control de los bienes del municipio sobre los cuales se canceló el pago que se efectuó por parte del municipio del paujil Caquetá al señor HERIBERTO ARCILA PUENTES** (...) (Auto de Imputación N.º. 001, Página 27 de 36)

g) **Que no se evidencia el trámite realizado por parte del municipio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el establecimiento de dicho avalúo y que a la postre una vez realizado por parte de este Instituto determina un avalúo sensiblemente muy elevado próximamente en un 40%, por tanto el señor Rodrigo Andrés Castro Betancourt en su condición de Alcalde del municipio de El Paujil, debió conservar el debido cuidado y manejo dado los recursos de la Entidad territorial al momento de adquirir el lote con destino a la construcción de vivienda, y es quien particularmente debía adoptar las medidas necesarias a efectos de asegurar la compra a precios del mercado, buscando el mejor precio que protegiera las finanzas de la entidad** (...) (Auto de Imputación N.º. 001, Página 27 de 36)

h) (...) **Que la conducta desplegada por el implicado generó una gestión inadecuada que conllevó a incurrir en las conductas determinadas en los artículos 3 y 6 de la ley 610**

537



Nit. 891.190.246-1

de 2000, que se refieren a la Gestión Fiscal y el Daño Patrimonial al Estado" (...) (**Auto de Imputación N. 0001, Página 28 de 36**)

i) Que se quebrantó lo estableció en el artículo 23 "De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales" de la ley 80 de 1993, en punto de los principios de transparencia economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa" (Auto de Imputación N. 0001, Página 29 de 36)

j) (...) Que "En consecuencia no presentó el debido cuidado y la falta de diligencia en la compra del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 420-1109661, en desarrollo de la compraventa, generándose un presunto detrimento en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE., y por cuanto se incurrió en una erogación antieconómica, ineficaz, inoportuna e injustificada, lo que conlleva la certeza del daño" (...) (Auto de Imputación N. 0001, Página 30 de 36)

k) (...) fue una conducta que omitió el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, al no acudir en primera instancia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de establecer el valor comercial del predio que finalmente compró el municipio de El Paujil, conforme a la normatividad y procedimiento, pudiendo haber evitado que se generara el detrimento patrimonial en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE. (Auto de Imputación N. 0001, Página 30 de 36)

También, haciendo énfasis en la compra realizada, la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, entre otros:

a) Indicó que dicha compra presenta presunto detrimento patrimonial al municipio toda vez que por parte de la administración vigente para la época de los hechos no se buscó un avalúo comercial del inmueble que favoreciera los intereses del municipio y preservara los recursos institucionales y optó por solicitar un evaluador privado con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador (folio 35) y no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por tanto prefirió realizarlo ante un evaluador privado, el cual presenta sobrevaloración del precio del valor comercial, además de que presuntamente para la



Nit. 891.190.246-1

época el avalúo no se encontraba certificado por FEDELONJAS según certificación obrante a folio 35. (Auto de Imputación N°. 001, Página 21 de 36)

b) Plasmó que se tiene el presunto sobre costo producto del pago el bien inmueble indicado con matrícula inmobiliaria número 420-109661 comprado por el municipio del Paujil Caquetá, sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado, con quien presuntamente para la época del avalúo no estaba certificado para realizarlo, como tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante FEDELONJAS, condujeron a determinarse detrimento patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá" (Auto de Imputación N.º001, Página 25 de 36)

Y, es que, a partir de todo lo anterior, cuya sustento jurídico de base fue el ya referido en consideración a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales y en punto del artículo 15 de la ley 9 de 1984 y sus modificaciones hasta las contenidas en el Artículo 2º del Decreto 4117 de 2006, es que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, teniéndolo como base, motiva su Auto de imputación N°. 001, en el cual, desde la página 22 de 36 páginas en las que se encuentra contenido, se avizora la procedencia de la IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD en contra de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía número 17.681.291 de Florencia – Caquetá, a TÍTULO DE CULPA GRAVE como así lo expresó el DESPACHO en la página 27 del mismo y que finalmente se RESUELVE en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/Cte. COP.

El problema, es que incide lamentablemente la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en un yerro, equivocación por supuesto que se advierte, por cuanto para la fecha de los hechos que motivaron la Denuncia D-003-16, allegada por persona anónima a la Oficina de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL el 21 de agosto de 2014 y a partir de cuyo trámite se arribó a la conclusión de las "presuntas irregularidades ocasionadas por la compra el bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el en el municipio del Paujil, Caquetá; el cual consta de 6 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el

539



Nit. 891.190.246-1

representante legal del municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.681 291", conclusión a la que hace referencia el DESPACHO en su Auto de Imputación N°. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, la normatividad vigente que amparaba y contenía los parámetros legales a los cuales debía apegarse y a las cuales se sujetó MI DEFENDIDO en sus actuaciones y para el cumplimiento de sus funciones, es en efecto normatividad diferente a la referida por la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ.

Debe advertirse, para encontrar el acierto de tal afirmación, EL DESARROLLO NORMATIVO CORRESPONDIENTE y que se sigue a continuación, por cuanto es de suma importancia señalar que el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, encontró que: "“En referencia a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales, y con sustento en el artículo 15o de la ley 9 de 1989, reglamentada parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2o del Decreto 4117 de 2006, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá, motivó las consideraciones y argumentos para IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL, a TÍTULO DE CULPA GRAVE, en cuantía ya referida, contra mi PROHIJADO".

En punto de dicho contenido legal y el normativo de carácter reglamentario, tomado como sustento para la IMPUTACIÓN de mi DEFENDIDO, (pues así consta y obra en Auto de Imputación N°. 001 de fecha 26 de febrero de 2024), se tiene entonces que:

La Ley 9 de 1989, que establecía en su:

“Artículo 15: El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto “Agustín Codazzi” o por la entidad que cumpla sus funciones de conformidad con el artículo 18 de la presente ley...

Dicha Ley, como en efecto lo señala el DESPACHO, fue parcialmente modificada por el Decreto 855 de 1994, de tal suerte que, en dicho Decreto, respecto del articulado anterior, se expresó:

Artículo 15. Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.

540



Nit. 891.190.246-1

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, una persona natural o jurídica experta en la materia.

Se acota, no obstante, que la Ley 388 de 1997, ya había introducido modificación sustancial, por cuanto ésta, modificó la ley 9 de 1989, en donde a tenor de lo expresado en su artículo 138, las disposiciones de la misma, sustituyeron expresamente las disposiciones contenidas entre otros, en el Inciso 1 del Artículo 15 de la ley 9 de 1989. En la ley 388 de 1997, que ha sufrido adiciones hasta la fecha, se encuentra contenido el Artículo 61, a partir del cual se introdujeron modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9 de 1989 y contenido en su Capítulo III. Así las cosas, destaca en dicho articulado:

L. 388 de 1997/ARTÍCULO 61.- *Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9 de 1989: " El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno"...*

Luego, dicho articulado así contenido en el Decreto 855 de 1994, fue modificado por el Artículo 2a del DECRETO 4117 DE 2006. En dicho DECRETO, se expresó:

Artículo 2º. *El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:*

"Artículo 15. *Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.*

Parágrafo. *Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".*



Nit. 891.190.246-1

Recordemos que es hasta aquí, el sustento legal a que hizo mención el Ente Acusador““En referencia a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales”, esto es, el artículo 15o de la ley 9 de 1989, reglamentada parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2o del Decreto 4117 de 2006, para reprochar la conducta de mi PROHIJADO, quien debía, según el CRITERIO del DESPACHO que hace la IMPUTACIÓN, seguir las reglas que se establecían en su contenido. Sin embargo, debe tener en cuenta el fallador, que la norma preexistente al hecho que se le imputa a mi defendido, no es ésta, pues, como se verá a continuación:

El DECRETO 4117 de noviembre de 2006, fue DEROGADO expresamente por el Artículo 83 del Decreto Nacional 066 de 2008, en los siguientes términos:

“Artículo 83. Derogatoria y vigencias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga expresamente el artículo 25 del Decreto 679 de 1994, los Decretos 855 de 1994, 1898 de 1994, 329 de 1995, 1275 de 1995, 287 de 1996 salvo sus artículos 3o y 4o, 2964 de 1997, 1436 de 1998, 2334 de 1999, 2170 de 2002 salvo sus artículos 6o, 9o y 24; 3740 de 2004, 2503 de 2005, 219 de 2006, 959 de 2006, 2434 de 2006, 4117 de 2006, 4375 de 2006 y 499 de 2007 y las demás normas que le sean contrarias.

Por su parte, el Decreto Nacional 066 de 2008, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones”, contempló en su Artículo 82 “Arrendamiento y adquisición de inmuebles”:

Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con el fin, un experto avalado por el Registro Nacional de Avaluadores. El estudio previo se pronunciará sobre la posibilidad o no de obtener varias ofertas según la necesidad que la



Nit. 891.190.246-1

entidad deba atender, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la adquisición deba tener lugar. Así mismo y en el evento de concluir la posibilidad de obtenerlas, determinará la manera de compararlas.

A pesar de lo anterior, **salvo el Artículo 83, todo lo contenido en el Decreto 066 de 2008, fue DEROGADO en su integridad, por el Artículo 92 del Decreto 2474 de 2008.** En dicho DECRETO, se encuentra contenido el Artículo 83, que fuera posteriormente modificado por el Artículo 4o del DECRETO NACIONAL 3576 de 2009, así:

Artículo 4º. Modifíquese el artículo 83 del Decreto 2474 de 2008, el cual quedará así:

"Artículo 83. Arrendamiento y adquisición de inmuebles. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. (...)

Obsérvese que hasta éste punto los decretos anteriores y que fueran tenidos en cuenta por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá como Sustento jurídico para su argumentación y a partir de las cuales se hacía el Reproche correspondiente a la Administración Municipal en cabeza de mi Prohijado por no acatar lo que éstos contenían y para arribar con ello, finalmente a la IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL a título de CULPA GRAVE, en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/Cte. COP. en su contra, ya se encontraban derogados por la entrada en vigencia del **Decreto Nacional 066 de enero de 2008.**

Pues bien, con la entrada en vigencia del **DECRETO NACIONAL 734 de 2012**, a partir de su publicación en el diario oficial 48400 de abril 13 de 2012, y a partir de lo contenido en su Artículo 9.2, que derogó en su integridad las disposiciones vigentes de un gran compendio de Decretos, entre los que se cuentan: **El Decreto 066 de 2008, Decreto 2474 de 2008 y se daría también, la derogación del decreto 3576 de 2009.**



Nit. 891.190.246-1

Téngase en cuenta, que El Decreto Nacional 734 de 2012, era en efecto el compendio normativo y reglamentario vigente para la época de los hechos, esto es, la vigencia del año 2012. Recuérdese que el Avalúo realizado por el PERITO AVALUADOR, Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, a quien acudiera mi PROHIJADO, como Alcalde y Representante Legal del municipio de El Paujil, elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DEL PREDIO al que se ha hecho mención - y, que fuera adquirido posteriormente por parte del Municipio- el día 10 de mayo de 2012.

De hecho, el Decreto Nacional 734, **"Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones"**, vigente desde el día 13 de abril de 2012 hasta antes del 17 de julio de 2013, fecha en la cual entró en vigor el Decreto 1510 de 2013, señalaba en la Subsección VI "Del Arrendamiento y la adquisición de inmuebles":

Artículo 3.4.2.6.1. Arrendamiento y adquisición de inmuebles. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, **las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa.**

Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.

En contraste con lo argüido por el DESPACHO que hiciera la IMPUTACIÓN, se colige de la normatividad vigente para la época en la cual se realizó el avalúo (12 de mayo de 2012), esto es, la precitada en el Artículo 3.4.2.6.1. del Decreto Nacional 734 y no la referida por la Honorable Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en punto de las reglas contenidas en los Decretos 855 de 1994 y 4117 de 2006, por encontrarse Derogados desde el año 2008, que:

a) Para efectos de la adquisición del inmueble el municipio debía solicitar un avalúo comercial, el cual serviría como base para la negociación. Cosa que, en efecto, así se hizo.



Nit. 891.190.246-1

b) Dicho Avalúo podría ser adelantado bien sea por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado.

Efectivamente, mi Prohijado acudió, con la debida sujeción y apego a lo así establecido, optando por la Persona Natural de Carácter Privado, se insiste, porque así lo permite la norma.

c) La persona natural o jurídica de carácter privado encargada de adelantar el Avalúo, debía estar o encontrarse registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. Cosa que efectivamente se comprobó y se demostró con suficiencia en el Apartado Segundo, Respecto de **"La Idoneidad del PERITO AVALUADOR"**, de quien se corroboró, como así obra en las Capturas de Imagen N.º11 y 12, incorporadas en el presente Escrito, respecto de Certificación Contenida en el Expediente del Proceso de la Referencia y de la Cual se cuestiona el SUSCRITO, no se haya realizado la valoración debida por parte del DESPACHO que hiciera la IMPUTACIÓN, pues, en la misma se aprecia, que el Señor INGENIERO CIVIL **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán, para la época en la que elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, esto es, el día 10 de mayo de 2012, "sí contaba con APROBACIÓN COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA" y contaba con Registro en el **REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A.**, con Matrícula R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012. Registro cuya existencia fue corroborada y Certificada por el **CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA"**, de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004. Razones, todas éstas, para desvirtuar las presunciones manifestadas por el DESPACHO, quien, para IMPUTAR, realizó ponderaciones sin sustento bajo la expresión **"PRESUNTAMENTE NO CONTABA"**, pudiendo con ello, inducir al error y restar el mérito que le corresponde y que debe ser observado, se solicita de manera reiterativa y respetuosa, por el FALLADOR, en punto de la ya ACREDITADA IDONEIDAD del Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, quien, también, acorde con los criterios de contenido reglamentario así contenidos en el Artículo 3.4.2.6.1. del Decreto Nacional 734, "se encontraba facultado y habilitado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general, a nivel Nacional" (Véanse Capturas N.º 11 y 12).

345



Nit. 891.190.246-1

Por tanto, no se hacían necesarias para la Administración Municipal, en cabeza de mi Defendido, como tampoco podía exigírsele a éste, por parte de la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA de RESPONSABILIDAD FISCAL, que obrara de conformidad con los parámetros legales establecidos en norma DEROGADA.

Se tiene, en virtud de lo contenido en el expediente del proceso de la referencia, que mi Defendido, obró con apego a lo establecido en el Decreto Nacional 734 de 2012, vigente para la época de los hechos. Ello, toda vez que acudió a persona natural de carácter privado, esto es, El Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, persona registrada en el Registro Nacional de Avaluadores, quien, como ya se dijo, contaba con APROBACIÓN COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA. Aprobación certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004.

Nótese que, CONTRARIO A LAS MANIFESTACIONES Y ARGUMENTOS esgrimidos por el DESPACHO en su Auto de Imputación del 26 de febrero de 2024, el Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, para la fecha en que elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DEL PREDIO al que se ha hecho mención y que fuera adquirido posteriormente por parte del Municipio, contaba con Registro en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES: R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012.

De lo anterior se colige, como ya fue referido en apartado anterior: i) LA IDONEIDAD del Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, ii) que el mismo se encontraba facultado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional", pues su registro se encontraba vigente (Véase la Captura N.o 11), iii) que contrario a lo manifestado en Auto de Imputación N.o 001, mi Representado, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, obró con estricto apego a lo contenido en Decreto Reglamentario, expedido por el Señor Presidente de la República, en ejercicio de las facultades legales que a éste se le confieren por virtud del numeral 11 del artículo 189 superior y con vigencia en la época en que ocurrieron los hechos. iv) No puede desconocerse entonces, que mi PROHIJADO, **sí cumplió con los deberes señalados por la Constitución y la ley Respecto a seguir sus actuaciones con apego a la normativa vigente**. Es de allí que se predica que el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, "asumió con la debida responsabilidad la disposición y control de los

546



Nit. 891.190.246-1

bienes del municipio", por cuanto, es con apego a la Ley y no de otra forma, como se garantiza el cumplimiento de las funciones encomendadas, incluso, en el ejercicio de la función fiscal. No olvidemos también, que es en la Ley, en donde se prevén, además, los principios que rigen tales actuaciones. Si el honorable DESPACHO consideró la presunta existencia del Daño, debió advertir también, que mi PROHIJADO actuó de conformidad con lo establecido en el contenido de carácter reglamentario que se encontraba Vigente al acto que se le imputa. Lamentablemente, tal IMPUTACIÓN, como se ha visto, no obró de conformidad con las leyes preexistentes y en cambio encontró sustento, en norma DEROGADA, distinta a la que se encontraba vigente para la fecha 10 de mayo de 2012, cuando se realizó el avalúo y la cual se sujetó con apego irrestricto mi Prohijado.

Todas las anteriores, son razones suficientes que desvirtúan lo argumentado por la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá, quien, en desacierto lamentable, imputó responsabilidad fiscal a mi Prohijado, con sustento en las reglas establecidas en contenido normativo que no podía aplicarse, por cuanto se encontraba DEROGADO.

En síntesis: i) Mi prohijado no estaba obligado a acudir exclusivamente ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que previa solicitud a éste, el mismo, realizara el avalúo. ii) Tampoco le era exigible que agotara los términos establecidos de 15 días hábiles en caso de no obtener respuesta por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o esperar pronunciamiento alguno del Instituto, que diera cuenta de la imposibilidad del mismo para hacer dicho avalúo, para poder, en dicho caso, acudir ante persona natural o jurídica de carácter privado y así, adelantar el avalúo requerido. iii) Tampoco se requería que la persona en cuestión, debiera encontrarse registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde se encuentra ubicado el bien para adelantar dichos avalúos, por cuanto sólo bastaba que la persona encargada de hacer el avalúo, se encontrara registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. iv) No se requería elevar solicitud alguna a FEDELONJAS, como tampoco, autorización por parte de esta o que la misma, delegara a dicha persona. Todo lo anterior, se insiste, por encontrarse contenido en los decretos 855 de 1994 y 4117 de 2006, derogados desde 2008, que no eran aplicables y por cuanto los criterios que acogió la administración municipal, en cabeza de mi Defendido y que debían ser acatados, corresponden a los establecidos en el Decreto Nacional 734 de 2012, vigente para la época de los hechos.

Al respecto y en punto del reproche que se le hace a mi Prohijado y por el cual se le imputa RESPONSABILIDAD FISCAL a TÍTULO DE CULPA GRAVE, con sustento en



Nit. 891.190.246-1

compendio normativo DEROGADO, como en efecto ya fue argumentado, se advierte vulneración del Debido Proceso, derecho de carácter fundamental, establecido en el Artículo 29, superior y cuyo tenor señala:

"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En consecuencia, La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica), advierte en su Artículo 25 "que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante jueces o tribunales que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"

Con relación al derecho al debido proceso, derecho fundamental extensible y con aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, en sentencia C-341 de 2014, la honorable Corte Constitucional, ha sido enfática en señalar:

5.3. El derecho al debido proceso:

5.3.1. El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas" ...

5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

En dicha sentencia, también precisó la Honorable Corte:

"Hacen parte de las garantías del debido proceso:



Nit. 891.190.246-1

(i) El derecho a la jurisdicción, ... **a obtener decisiones motivadas** (...)

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, **conforme a los imperativos del orden jurídico**, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Así mismo, es oportuno considerar que, de conformidad con lo Establecido **Sentencia C-710/01, respecto del principio constitucional de legalidad, la honorable Corte Constitucional indicó que dicho principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas.** Señaló, además, que la consagración constitucional del principio de legalidad define la relación entre el individuo y el Estado al prescribir que el uso del poder de coerción será legítimo solamente si está previamente autorizado por la ley. De allí que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.

El solo hecho de haberse imputado Responsabilidad Fiscal en contra de mi Prohijado por parte de la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, con sustento en normatividad cuya aplicación no era exigible al momento de la ocurrencia de los hechos que ésta señala para determinarla, **motivando sus decisiones para IMPUTAR en procedimientos y reglas que se encontraban derogadas y que NO tenían por qué haber sido observadas por mi REPRESENTADO, IMPLICA**, advierte el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, una clara vulneración al principio de Legalidad contenido en el Artículo 29 superior, por cuanto **Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.**

No en vano, lo contenido en el **Artículo 2° de la ley 610 de 2000, "Principios orientadores de la acción fiscal"**, en cuyo contenido se advierte que "En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos, entre otros, en el artículo 29 Superior"

No puede perderse de vista que, al respecto, la **Honorable Corte Constitucional en sentencia C-428 de 2019**, advierte que:

"El principio de legalidad como principio rector del ejercicio del poder estatal para restringir derechos se deriva de los artículos 6°, 29 y 122 de la Constitución e implica que los servidores públicos solo pueden hacer lo prescrito, definido o



Nit. 891.190.246-1

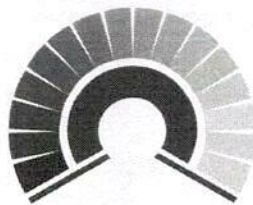
establecido en forma expresa, clara y precisa en el ordenamiento jurídico. De este modo, (i) se protege la dignidad humana, al reconocer la capacidad de las personas para ajustar su conducta a las prescripciones de las normas; (ii) se evita la arbitrariedad, tan ajena a la noción de Estado de derecho; (iii) se asegura la igualdad en la aplicación de las normas y, por esta vía, se refuerza la legitimidad del Estado; y (iv) se fortalece la idea de que en un Estado de derecho el principio general es la libertad"

Contrario al reproche que hiciera la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá, el Señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, Alcalde y Ordenador del Gasto del Municipio de El Paujil Caquetá, obró con apego estricto al contenido de carácter reglamentario que sí estaba vigente y al cual debía sujetarse para el cumplimiento de las funciones respecto del acto que hoy, sin sustento jurídico y, por tanto, faltando al principio de legalidad se le imputa.

Es preciso señalar que en virtud de lo consagrado en el numeral 1 del Artículo 315 Superior. Corresponde al alcalde "Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo". Mi Prohijado, desplegó sus actuaciones, entre ellas, las contenidas también en el Numeral 3 Ibidem, respecto de la dirección de la acción administrativa del municipio, del cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo, con apego a lo establecido en la norma vigente y no tenía por qué sujetarse a los procedimientos establecidos en aquellas que no lo estaban, como así pretende hacerlo ver el Despacho de la Contraloría Departamental en su Imputación.

Nótese que mi Prohijado ordenó los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto, que, para ello, contó con la aprobación conferida por parte del Concejo municipal a través de acuerdo aprobado en dos debates, con consecutivo No.11 de fecha 22 de junio de 2012, "Por medio del cual se autorizó al Alcalde del municipio de El Paujil, Departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda".

Es imperativo traer a colación, que, **si bien la Compra se realizó en el año 2013, tanto el Avalúo comercial, así como las actuaciones que permitieron la aprobación para la compra del bien inmueble, respecto de las cuales hizo reproche el DESPACHO, se surtieron en vigencia del año 2012, de ello, obra constancia suficiente en el expediente del proceso de la referencia, como a continuación se expone a partir de**



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

aportes extraídos de los documentos "INFORME AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES y ACUERDO N°. 011, de fecha 22 de junio de 2012: (Ver capturas 22 y 23)

Captura No. 22

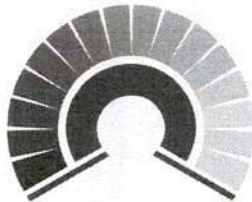
FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
INGENIERA CIVIL

Avalúos en general, interventorias, acueductos, vías, vivienda.

INFORME DE AVALÚOS DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES

| 1. INFORMACIÓN BÁSICA | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------|
| DOCUMENTO SOLICITUD DE AVALÚO | | OFICINA | SOLICITANTE |
| Solicitud de servicio | | FLORENCIA | ALCALDIA DE PAUJIL |
| NOMBRE DEL PREDIO | | ESCRITURA No | |
| LA BONANZA | | 450 | |
| NOTARIA No. | No. CATASRAL | FECHA DE ESCRITURA | MATRÍCULA INMOB |
| Segunda del Circulo de Florencia | (X) 01 00031-0004- (XX) | 19 de Marzo de 2010 | 440 88285 |
| VEREDA: | | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| El Borugo | | El Paujil | Caqueta |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO | | NIT DEL SOLICITANTE | TELÉFONO |
| LUIS FERNANDO LEE DIAZ | | 800005783 0 | 984314080 |
| DIRECCIÓN DEL PREDIO: | | | |
| Dentro de la cabecera Municipal de El Paujil, se toma la vía llana al barrio 1 de Mayo, carrera 4E, hasta llegar al límite del perímetro urbano, en la zona que colinda con la vereda El Borugo. | | | |
| DOCUMENTOS REVISADOS PARA EL AVALÚO | | | |
| Escritura Publica No 450 del 19 de marzo de 2010, Notaria Segunda Florencia. | | | |
| FECHA DE VISITA | | FECHA INFORME | |
| 5 de Mayo de 2012 | | 10 de Mayo de 2012 | |
| 2. INFORMACIÓN DEL SECTOR | | | |
| 2.1 DESARROLLO | | | |
| El sector donde se ubica el predio objeto de avalúo se caracteriza por poseer viviendas dispersas construidas en un solo nivel con techos de Zinc, paredes y piso en maderas cortadas en el mismo sector. Los terrenos con | | | |

Captura No. 23



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

ACUERDO N° 011
(22 de Junio de 2012)

Por medio del cual se autoriza al Alcalde de el municipio de El Paujil, departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda”.

El Concejo Municipal de El Paujil

En ejercicio de sus facultades que le otorga la ley 136 de 1994, la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 13333 de 1986

ACUERDA

Artículo Primero: Autorizar al alcalde municipal de el Paujil, Departamento del Caquetá, para que con el lleno de todos los requisitos legales, presupuestales y técnicos, adquiera a nombre del Municipio un terreno, previos estudios técnicos adelantados por la Secretaría de Planeación Municipal, para ejecutar los programas de Vivienda de Interés Social y/o interés prioritario, consignados en el plan de desarrollo

Artículo Segundo: El presente acuerdo rige a partir de su fecha de sanción y publicación.

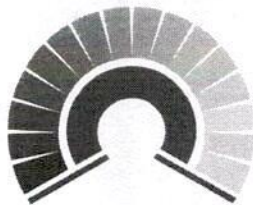
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Presentado al Honorable Concejo de El Paujil, Caquetá a los 22 días del mes de Junio del 2012.


ANGÉLICA MARÍA HENAO TORRES
Presidenta Concejo Municipal


MARY ROMERO PERLA
Secretaria Concejo Municipal

También, que mi PROHIJADO, obrando de conformidad con dicha autorización, acompañado por la supervisión de la Secretaría de Planeación Municipal, estipulando además, **“la obligación al vendedor para que permitiera la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a estas la información y documentación que solicitaran en relación con el contrato que se suscribía y su ejecución, procedió a realizar los actos que materializaron la compra venta del bien inmueble tantas veces referido. De la autorización emitida por parte del Concejo municipal, así como de la Supervisión ejercida por el señor EDINSON CUESTA MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía N.o 91.322.202 de Puerto Wilches, Secretario de Planeación Municipal y de la estipulación contenida en la Cláusula Décimo Cuarta respecto de la vigilancia de las veedurías ciudadanas, obra constancia en apartes de los documentos contrato de Promesa de Compraventa N.o 001**



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

y Escritura Pública N°. 3078 del 26 de diciembre de 2013, que se exhiben a continuación (Ver capturas 24, 25 y 26):

Captura No. 24 y 25


aplicación a lo dispuesto por el artículo 9° de la misma ley.

DECIMA TERCERA. – INDEMNIDAD: EL VENDEDOR mantendrá indemne al COMPRADOR de cualquier daño o perjuicio originado de reclamaciones de terceros que tengan como causa toda acción u omisión del VENDEDOR, subcontratista, proveedores o dependientes a su cargo y que con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios materiales y/o morales en la integridad personal y/o patrimonial de los mencionados terceros durante la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 5.1.6. del Decreto 734 de 2012.

DECIMA CUARTA. – VEEDURÍA CIUDADANA: El VENDEDOR se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución.

DÉCIMA QUINTA. – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El COMPRADOR pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al RUBRO: Código: 020204050201020103, Denominado: "Planes y proyectos para la adquisición de vivienda" del presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia fiscal del año 2013, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 02 de Mayo de 2013.

Captura N.º 24

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0 | CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA |
| | | Página 4 de 4 |
| CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA No. 001 | | FECHA: DICIEMBRE 26 DE 2013 |

Notificación de Supervisor del Contrato:

Mediante mi firma en el presente documento me doy por notificado en la fecha, de mi designación como Supervisor del presente Contrato de Arrendamiento, por parte del señor Alcalde Municipal, por lo cual declaro estar en el deber de asumir las funciones señaladas en el inciso segundo del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Nombre:

Firma:

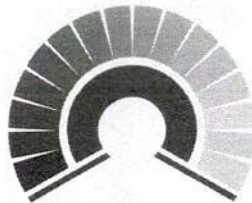
Cargo:

C. C.

Fecha:

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
De *[Firma manuscrita]*
26 de *[Firma manuscrita]* del 2013.

Captura No. 26



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

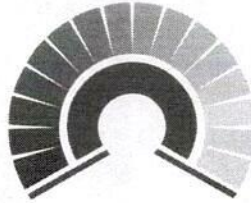
Nit. 891.190.246-1

553

SEGUNDO - Venta Parcial: Que actuando en su condición de Vendedor(a) y debidamente autorizado según Resolución No. 019 del 17 de diciembre de 2013, emanada de Secretaría de Planeación Municipal de El Paujil - Caquetá, Autorización de Fraccionamiento emanada de la Dirección Territorial de Caquetá del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural "INCODER", documentos que se agregan al protocolo del presente instrumento, transfiere a título de compraventa Parcial a favor del MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETÁ,

Identificado con NIT: 800.095.763-0, representado en éste acto por el señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, mayor de edad, domiciliado(a) en el municipio de El Paujil y de paso por ésta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.691.533 expedida en Florencia, en su condición de Alcalde Popular y Representante Legal del Municipio de El Paujil - Caquetá, lo cual acredita con certificación expedida por la Gobernación del Caquetá y debidamente facultado mediante Acuerdo No. 11 del 22 de junio de 2012 emanado del concejo municipal de El Paujil - Caquetá, documentos que se protocolizan junto

Que la compra realizada, fue elevada a instrumento público, de conformidad con la normatividad vigente para la época y que **medió la correspondiente autorización por parte del INCODER, así como de la Oficina de Planeación a través de Resolución 019 del 17 de Diciembre de 2013**, como consta en los apartes de los documentos Escritura Pública N°. 3078 del 26 de diciembre de 2013, Formulario de Calificación CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN F.M.I 420-109661 que se exhiben a continuación (**Ver capturas 27 y 28**):



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Captura N°. 27

PROTÓCOLO

Se presentan para agregar al protocolo: _____

1. Comprobantes requeridos (Art. 44 del Decreto 960 de 1970): - Paz y Salvo Predial del 26 de diciembre de 2.013, expedido por la Oficina de Recaudo Municipal de El Paujil - Caquetá, a favor de LUIS FERNANDO LEE DIAZ identificado con cc: 96.332.390, sobre el predio identificado con Ficha Catastral No. 00-01-0003-0004-000, avaluado en 35.900.000 por el año 2013, válido hasta el 31 de diciembre de 2013. NOTA: No se cobra Valorización.
2. Fotocopias de cédulas de ciudadanía de los comparecientes.
3. Certificación expedida el 26 de diciembre de 2.013 por la Gobernación del Caquetá, en la cual se hace constar que el señor RODRIGO ANDRES CASTRO BETANCOURT, se desempeña actualmente como Alcalde Popular del Municipio de El Paujil - Caquetá.

4. Copia del Put del municipio de El Paujil - Caquetá.

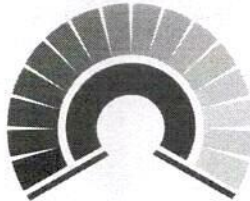
5. Resolución No. 019 del 17 de diciembre de 2013, emanada de Secretaría de Planeación Municipal de El Paujil - Caquetá.

6. Autorización de Fraccionamiento emanada de la Dirección Territorial de Caquetá del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural "INCODER". 7. Constancia de Reparto. 8. Acuerdo municipal No. 11 del 2.012, por el cual se faculta al Alcalde Municipal para firmar el presente Instrumento. 9. Certificado de Libertad y Tradición.

Esta escritura se hizo conforme a datos suministrados por los comparecientes, se autoriza y firma en las hojas de papel Notarial números:

Papel notarial _____ - No tiene costo para el usuario

Captura N°. 28



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Nro Matricula: 420-109661

CIRCULO DE REGISTRO 420 FLORENCIA
MUNICIPIO EL PAULIL DEPARTAMENTO CAQUETÁ VEREDA EL BORUGO TIPO PREDIO RURAL

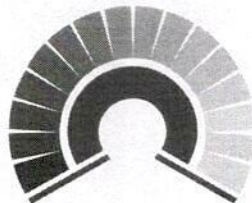
DIRECCION DEL INMUEBLE
1. LOTE 1

| | | |
|--|--|---|
| ANOTACION Nro 3 | Fecha 27/12/2013 | Radicación 2013-420-6-9583 |
| DOC ESCRITURA 3078 | DEL 26/12/2013 | NOTARIA SEGUNDA DE FLORENCIA VALOR ACTO: \$ 240.000.000 |
| ESPECIFICACION | MODO DE ADQUISICION : 0126 COMPRAVENTA PARCIAL - 6 HAS CONFORME A LA RESOL.019 | |
| DEL 17-12-2013 EMANADA DE PLANEACION MPAL Y AUTORIZACION DEL INCODER | | |
| PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto) | | |
| DE ARCILA PUENTES HERIBERTO CC# 6681291 | | |
| I MUNICIPIO DE EL PAULIL NIT# 8000957630 | | |
| FOLIOS DERIVADOS DE LA ANOTACION | | |

Que para el pago de la Obligación por concepto de Compra-venta del bien inmueble adquirido al señor ARCILA PUENTES, la administración destinó los recursos correspondientes para el pago y de ello obra constancia en comprobante de pago N°. 3783, el cual fue firmado también por el señor TESORERO MUNICIPAL, el REVISOR CONTABLE y el beneficiario del pago. Así obra constancia en el documento que se exhibe a continuación (Ver Capturas N°. 29 y 30):

Captura N°. 29

556



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1



DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

TESORERIA MUNICIPAL

NIT: 800.095.763-0

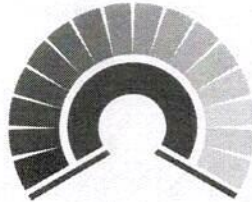
COMPROBANTE DE PAGO No.

3783

| | |
|--|-------------------------------------|
| FECHA: 2013/12/30 | BANCO: CTA 1336-6 BIAGRANIO |
| BENEFICIARIO: ARCILA PUENTES HERIBERTO | CHEQUE: 1296 |
| IDENTIFICACION: 6,681,291 | DEPENDENCIA: Administracion Central |
| DIRECCION | |
| TELEFONO | VALOR DEL GIRO: \$ 237,600,000.00 |

| | |
|--|--|
| LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESO M/CTE | |
|--|--|

| POR CONCEPTO DE: | VALOR |
|---|----------------|
| 2401010100 CANCELA FACTURA No. | 240,000,000.00 |
| 2436120000 Enajenación de propiedades, pl | (2,400,000.00) |
| <p>CONCEPTO:</p> <p>PAGO COMPRAVENTA TERRENO MATRICULA INMOBILIARIA</p> <p>No 420-109661, CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO</p> <p>DE VIVIENDA, SEGUN RECURSOS DE REGALIAS</p> | |



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Captura N°. 30

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
TESORERÍA MUNICIPAL
NIT: 800.095.783-0

COMPROBANTE DE PAGO No. 3783

| | |
|---|--|
| FECHA: 2013/12/30 | BANCO: CTA 1336-6 BIAGRARIO |
| BENEFICIARIO: ARCILA PUEENTES HERIBERTO | CHEQUE: 1296 |
| IDENTIFICACION: 6.681.291 | DEPENDENCIA: Administracion Central |
| DIRECCION | VALOR DEL GIRO: \$ 237,600,000.00 |
| TELEFONO | |
| LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESO M/CTE | |
| POR CONCEPTO DE: | |
| 2401010100 CANCELA FACTURA No. | 240,000,000.00 |
| 2436120000 Enajenación de propiedades, pl | (2,400,000.00) |
| CONCEPTO: PAGO COMPRAVENTA TERRENO MATRICULA INMOBILIARIA No 420-109661, CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA, SEGUN RECURSOS DE REGALIAS | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.783-0 | |
| FIEL COPIA TOMADO DEL ORIGINAL | |
| FECHA: 09 SEP 2014 | |
| FIRMA: [Firma] | |
| SECRETARIO DE GOBIERNO | |
| RODRIGO A. CASTRO ETANCOURT ALCALDE MUNICIPAL Ordenado | JOSE DAIME SANCHEZ TORRES TESORERO MUNICIPAL Elabora |
| EFREN DIAZ GARCIA ASESOR CONTABLE Revisa | |



Nit. 891.190.246-1

Aquí, se hace pertinente señalar, que en consideración de lo precitado en punto de las Atribuciones del Alcalde, contenidas en el Artículo 315 Superior, también, en virtud de lo establecido en el artículo 23 "De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales" de la ley 80 de 1993, así como en lo reglamentado en el Decreto **Nacional 734 de 2012**, se logra establecer que el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, en el cumplimiento de sus funciones y su gestión como Alcalde del Municipio de El Paujil, y respecto de los señalamientos realizados por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá:

PRIMERO: Respaldó su gestión en los conocimientos del **INGENIERO CIVIL FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, persona idónea que reunía los requisitos legales exigidos en el Decreto Nacional 734 de 2012, por cuanto **para la fecha en la cual fuera realizado el avalúo, esto es, el 10 de mayo de 2012:**

a) Se encontraba debidamente registrado en el Registro Nacional de Avaluadores con **MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE para la fecha y habilitado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional", como así consta en CERTIFICACIÓN expedida por la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual era miembro activo desde el año 2004, y en la cual, además, consta que se comprobó su idoneidad como PERITO AVALUADOR PROFESIONAL"**

b) A través de éste **PERITO AVALUADOR PROFESIONAL**, se obtuvo el respectivo informe de **AVALÚO COMERCIAL** del bien inmueble con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, el cual consta de 6 hectáreas, ubicado en la vereda el Borugo del municipio de El Paujil y del cual, posterior a la celebración de la Compra-venta, realizada al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.681 291, contando con la debida autorización por parte de la Secretaría de Planeación, así como la de Fraccionamiento emitida por el INCODER, se desprendería la **MATRÍCULA INMOBILIARIA N°. 420-109661 como así obra en la Oficina de Instrumentos Públicos.**

c) A diferencia del Avalúo realizado por el IGAC, cuya investigación de mercado se hizo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de **INTERNET**", El avalúo realizado por el **PERITO AVALUADOR PROFESIONAL** requerido por la Administración Municipal, cuenta con una investigación económica comparativa de mercados realizada de manera directa en el lugar en donde se encuentra ubicado el predio adquirido, en la cual, "Para efectos



Nit. 891.190.246-1

de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso, estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3 variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación, el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior a 7.5%".

d) El Avalúo elaborado y suscrito por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, requerido por la Administración Municipal, fue realizado con apego al criterio definido en el Artículo 2o del Decreto Reglamentario 1420 de 1998.

SEGUNDO: No obró a su voluntad y desplegó su gestión con la aprobación, acompañamiento y supervisión del Concejo Municipal y de la Secretaría de Planeación, por cuanto:

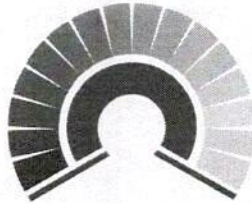
a) Contó con autorización respectiva, emanada del **CONCEJO MUNICIPAL**, quien a través de Acuerdo aprobado en dos debates, con consecutivo N.º 11 de fecha 22 de junio de 2012, "Por medio del cual se autorizó al Alcalde del municipio de El Paujil, Departamento del Caquetá, para adquirir un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto de vivienda"

b) Contó con la Supervisión y la aprobación de funcionarios de la Administración Municipal, como, por ejemplo, la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO**, ejercida por el señor **EDINSON CUESTA MEJÍA**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 91.322.202 de Puerto Wilches, quien acompañó y supervisó el proceso de adquisición del mismo.

c) Como así consta en la cláusula DÉCIMA CUARTA del contrato de promesa de compra venta N.º 001 de fecha diciembre 26 de 2013, estipuló la obligación al vendedor para que permitiera la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a estas la información y documentación que solicitaran en relación con el contrato que se suscribía y su ejecución.

d) La Compra Venta, cuenta, además, con autorización para el Fraccionamiento del predio por parte del INCODER, así como de la Oficina de Planeación a través de Resolución 019 del 17 de diciembre de 2013.

560



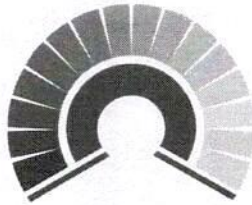
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

TERCERO: Resulta oportuno observar también, los fines esenciales y relativos al ESTADO SOCIAL DE DERECHO que persiguió la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, por intermedio de mi Defendido, en aras de la concreción de lo estructurado en el plan de desarrollo, en materia de proyectos de vivienda de interés prioritario.

En punto de lo referido, hay razones para desvirtuar los señalamientos realizados por el **ENTE ACUSADOR**, pues es claro que mi Prohijado, observó en buena forma una gestión eficiente, responsable y transparente, no sólo actuó con apego a la legalidad como fue referido, también, basó sus actuaciones en la buena fe. Mi DEFENDIDO, obró de conformidad a los postulados de buena fé, por cuanto como así lo consideró la **Sala de Consulta del Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto C.E. 811 de 1996:** "El principio general del derecho engendra una apreciación jurídica de contenido más amplio tendiente a que toda persona en razón de su actividad ejecute actos jurídicos lo haga motivado por una actitud honesta, leal desprovista de cualquier intención dolosa o culposa; lo que jurídicamente implica la honradez de toda relación jurídica manifestada en su doble dirección: el ejercicio del derecho de buena fe o el cumplimiento de la prestación derivada de la obligación que la causa, lo que debe también ejecutarse de buena fe" Nótese, que respecto de las actuaciones adelantadas por mi prohijado, no obra en el expediente prueba que demuestre un obrar contrario a dichos postulados o elementos contrarios a esa actitud honesta, leal al Municipio y desprovista de cualquier asomo de intenciones dolosas o culposas en el ejercicio de sus funciones.

Se destaca en sus actuaciones como Alcalde del Municipio de El Paujil, que buscó, además, garantizar, el principio de economía. Tal afirmación, a contrario sensu a lo argumentado por la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, se evidencia a través del informe de Avalúo que presentara el **INGENIERO CIVIL FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, en quien, por contar con la idoneidad y la acreditación requerida, depositó mi prohijado una confianza legítima y quien, con su informe, aportó a ese ánimo e interés de la administración municipal en evitar una gestión antieconómica, la cual es manifiesta y palpable, precisamente, en virtud de la **investigación económica comparativa de mercados realizada de manera directa en el lugar en donde se encuentra ubicado el predio adquirido, para establecer** el valor real, esto es, el avalúo exacto del predio, que habría de comprar la Administración y que, conforme a los postulados y principios referidos, mi Prohijado, en su calidad de Ordenador del Gasto, así lo hizo.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

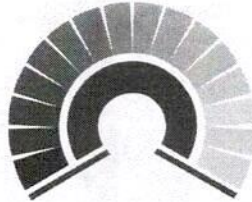
Es claro, a partir de lo señalado, que el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, no buscó, **NI CAUSÓ**, ningún detrimento al patrimonio del **ESTADO**, **NI AFECTÓ al MUNICIPIO DE EL PAUJIL**. No infringió la Constitución ni las leyes, ni tampoco omitió o se extralimitó en el ejercicio de sus funciones.

Que, en virtud de las actuaciones desplegadas por éste, el sustento legal y probatorio al que se ha hecho referencia en el presente escrito, como así se evidencia en las imágenes (CAPTURAS) incorporadas en el mismo y que advierten de la existencia de medios de prueba suficientes para corroborar la idoneidad del Avaluador, la transparencia de lo actuado, en cuya constatación, emerge notoria un gestión económica favorable a los intereses del Estado y del Municipio, que no constituye daño y de la cual, por el apego que se evidencia en su actuación y en la forma como fue llevado a cabo cada procedimiento con estricta sujeción al contenido normativo de carácter reglamentario preexistente al momento de la ocurrencia de los hechos señalados por el ente acusador, permiten colegir que no se puede imputar la responsabilidad fiscal, como así lo expuso en sus consideraciones la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá. Huelga decir, que corresponde al DESPACHO que hizo la IMPUTACIÓN, "observar en sus decisiones y motivaciones, pleno apego al principio de legalidad, cuyo orden es Constitucional y constituye garantía verdadera en la actuación procesal y en el ejercicio de la acción fiscal, de cara a las prerrogativas que le asisten a mi Prohijado".

Nótese que, de conformidad con el desarrollo normativo expuesto, se corrobora en primera instancia, que no hay lugar a la IMPUTACIÓN de mi DEFENDIDO. Que el mismo, contrario a lo referido por el DESPACHO, **cumplió con los deberes señalados por la Constitución y la ley Respecto a seguir sus actuaciones a la normativa vigente. El punto es que mi PROHIJADO así lo hizo**. En segundo lugar, se corrobora que no se actuó por parte del Titular de la Acción Fiscal, de conformidad con los postulados de Legalidad, necesarios en sus actuaciones. **Es por ello y no por otra razón, que Corresponde al DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL**, en ejercicio de la titularidad de la Responsabilidad Fiscal, por cuanto se han aportado en el presente escrito, los argumentos de Defensa con rigor jurídico suficiente y que desvirtúan las imputaciones formuladas por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá en su Auto de Imputación N°. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, obrar consecuentemente como en efecto se solicitará, para que se remedien los actos contrarios a la dignidad de la Justicia, la lealtad, probidad y buena fé, que no fueron observados por parte del Despacho que realizó la IMPUTACIÓN.

Página 60 de 152

"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

En tal sentido, Fundado en la argumentación esgrimida, cuyo sustento jurídico, alcance y efecto, no se puede desconocer, solicitaré el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, se prevea por parte del funcionario Competente, en los términos de lo así estipulado en el **Artículo 25. Protección Judicial de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**, los artículos 29, 122, 230 y 315, de orden Constitucional, los artículos 26, 32 de la ley 610 de 2000, también, del artículo 23 ibidem, por cuanto se requiere de Prueba para responsabilizar que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado, habida cuenta que, demostrándose un obrar recto por parte de mi Defendido, con apego a la Constitución y a la ley, que desvirtúa los elementos Constitutivos de Responsabilidad Fiscal como así se establece en el **Artículo 5° de la Ley 610 de 2000, invocando la necesidad urgente para que en su obrar, el ente acusador observe los principios orientadores de la acción Fiscal, preceptuados en el Artículo 2°, especialmente, los referentes al principio de legalidad implícito en el Debido Proceso**, derecho de carácter fundamental que exige a la Contraloría Departamental del Caquetá, a instancias del Proceso de Responsabilidad Fiscal que se adelanta contra mi Prohijado, "le juzgue de conformidad a leyes preexistentes al acto que se le imputa" y como ha sido ampliamente demostrado en el presente escrito, que la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá se apartó de dichos postulados y que con sustento en norma derogada motivó las decisiones que le llevaron a IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL contra el señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, "proceda a corregir de manera inmediata y aplique, en virtud de la Remisión Normativa contenida en el Artículo 66 de la ley 610 de 2000, lo contenido en el Numeral 3 del Artículo 42 del Código General del Proceso, para que se remedien los actos contrarios a la dignidad de la Justicia, la lealtad, probidad y buena fé, que no fueron observados por parte del Ente Acusador y que invocan la real necesidad de subsanar la falta de legalidad en las motivaciones y cargos enrostrados en contra de mi Representado.

Subsanación y remedio, que encuentra su materialización en lo establecido en los artículos 47 y 54 de la Ley 610 de 2000 y por el cual, el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, de manera respetuosa, se permite allegar las siguientes:

V. SOLICITUDES

PRIMERA: CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL por cuanto, en virtud de lo que se advierte a partir de lo contenido en las TREINTA (30) Capturas de imagen incorporadas en el presente documento y de los argumentos con rigor jurídico suficiente que han sido



Nit. 891.190.246-1

aportados y que las acompañan, se ha probado que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial y en tal sentido, **SE PROFIERA el AUTO DE ARCHIVO del proceso de la Referencia**, con sujeción a lo consagrado en los términos del **Artículo 47 de la ley 610 de 2000**.

SEGUNDA: Como petición subsidiaria, en caso de despachar desfavorable la petición anterior, le ruego en consecuencia, **Se PROFIERA FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL**, en favor del señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.691.533 de Florencia, por obrar elementos de prueba y argumentación jurídica suficiente, que demuestran que no existe prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal y, principalmente, la inobservancia del principio de Legalidad por cuanto no se juzgó a mi **DEFENDIDO** conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y a partir de las cuales se desvirtúan por sí solas, las imputaciones formuladas con sustento en contenido normativo **DEROGADO**, por parte de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, en contra de mi **DEFENDIDO**.

TERCERA: En virtud del Derecho de Defensa y Contradicción contenido en el Artículo 29 Constitucional, también en consideración del Artículo 32 de la ley 610 de 2000, **SEAN VALORADOS**, en su conjunto, para su decisión, conforme a lo preceptuado en el artículo 26 ibidem, todas las capturas de imagen incorporadas en el presente escrito y los argumentos y consideraciones aportados en el mismo, con los cuales se busca la defensa real de las garantías, prerrogativas y derechos de orden constitucional que le son inherentes al señor **RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**, mi defendido y que han sido vulnerados por el **DESPACHO** que profirió la **IMPUTACIÓN**, a instancias del Proceso de Responsabilidad Fiscal N.º 1148 que se adelanta en su contra.

VI. PRUEBAS:

Documentales:

Los documentos mencionados, cuyas capturas de imagen, desde la Captura N.º 1 hasta la N.º 30, en total treinta (30) capturas, fueron incorporadas en el presente escrito De Argumentos de Defensa cuya valoración se solicita, más no su práctica, pues fueron tomadas del expediente que reposa en el Despacho de la Contraloría Departamental y se encuentran por tanto dichos documentos, contenidos en el **EXPEDIENTE del PROCESO de la Referencia PRF-1148**, razón por la cual, los mismos, no se adjuntan en el presente apartado.

Testimoniales:

Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.541.581 de Popayán. Su testimonio es conducente, pertinente y útil, toda vez que esta persona fue quien elaboró y suscribió el **INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES** entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, y se hace indispensable que exponga las razones técnicas, fácticas y jurídicas del por qué presuntamente estableció un precio sustancialmente diferente al emitido por el IGAC y además, se le interrogará por las técnicas y demás métodos utilizados en el peritaje rendido. Todas las demás preguntas e incertidumbres que puedan servir para esclarecer los hechos materia de investigación en favor de mi prohijado.

De dicha persona a partir del Informe de Avalúo de Predios y/o Mejoras Rurales entregado a la Administración y del cual se encuentra copia contenida en el expediente del Proceso de la Referencia, se advierte que éste relaciona Dirección de Oficina en la Carrera 30 bis N.º. 2E-38 de Florencia – Caquetá y número de Celular con Abonado N.º. 312 312 73 02.

9. CONSIDERACIONES ARGUMENTOS DE DEFENSA

A continuación, desatarán los argumentos presentados por el defensor de oficio del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, en los cuales precisó:

IV. CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS:

En punto de lo manifestado por el ente acusador, mi Representado, no observó el principio de responsabilidad, transparencia y economía al adquirir y pagar por el terreno identificado con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 420-109661**, destinado a construcción del proyecto de vivienda de interés social y/o interés prioritario consignado en el plan de desarrollo, un sobrecosto cuya cuantía asciende a **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE. COP**, conllevando con ello, un daño patrimonial al estado y en contra del MUNICIPIO DE EL PAUJIL, materializando además, una gestión antieconómica e ineficiente en los términos prescritos en la ley 610 de 2000.



Nit. 891.190.246-1

Revisado el contenido del Auto de Imputación N°. 001, proferido por la Contraloría Departamental, se evidencia que la misma en sus argumentaciones, señaló presuntas irregularidades respecto de los siguientes:

✓ PRIMERO: EL AVALÚO.

✓ SEGUNDO: LA IDONEIDAD DEL PERITO AVALUADOR.

✓ TERCERO: LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES **DEL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT**

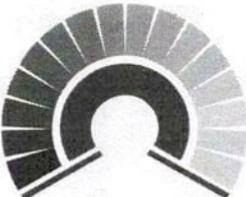
Aquí, es preciso referir, que en línea con lo anterior, el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, en defensa de las garantías, prerrogativas y derechos que le asisten al señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT y en el ejercicio de Defensa y Contradicción que a éste le corresponde, desarrollará el presente escrito en apartados que obrarán en el mismo orden allí referido y que para acompañar los argumentos y consideraciones que a cada uno corresponden, se permitirá incorporar al presente escrito, capturas de imagen, tomadas de los documentos y material probatorio que obra en el expediente del proceso de la referencia, que corroborarán las actuaciones y procedimientos desplegados por la Administración Municipal en cabeza de mi Prohijado. De los elementos de prueba que reposan en el expediente, se infiere, desde ya, no se ha adelantado la correspondiente valoración probatoria, acorde con lo referido en la ley 610 de 2000.

Éste y otros hallazgos importantes respecto de lo actuado por parte de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá, emergerán y se harán notorios, conforme al desarrollo de dichos apartados, en el orden que a cada uno corresponde, así:

APARTADO PRIMERO: DEL AVALÚO:

Sirva precisar que mi PROHIJADO, en primer lugar, acudió ante PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, esto es, el señor **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO, Ingeniero Civil de Profesión, inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, con Matrícula R.N.A/C.C.-25-1885**, para que éste, realizara el informe de **AVALÚO** del predio con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**.

566



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

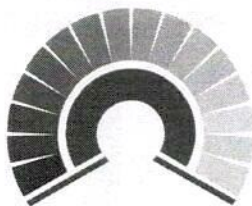
Mencionado PROFESIONAL, en efecto, el día 10 de mayo de 2012, a solicitud de la Alcaldía Municipal del Paujil, presentó informe de **AVALÚO DE PREDIO RURAL**, con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, ubicado en la vereda el Borugo del mismo municipio. En dicho informe destacan, entre otros aspectos, el apartado **"Nº. 5 INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS – 5.1 METODOLOGÍA-COMPARACIÓN DE MERCADOS"**, en donde manifiesta el Ingeniero Civil **FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO**, lo siguiente:

"Para efectos de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso, estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3 variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación, el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior a 7.5%"

Seguido a ello, aprecia el **SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO**, cuadro estadístico contenido en el apartado **"5.2 CUADRO ESTADÍSTICO"**, del cual inserto para su correspondiente corroboración, captura de imagen respectiva, así: **(Ver Captura N°. 1)**

| 5.2 CUADRO ESTADÍSTICO | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
| INFORMANTE | VALOR/ Ha. | MEDIA ARITMÉTICA | | 39.250.000 | |
| Victor Gomez | 38.000.000 | DESVIACION ESTÁNDAR | | 2.061.552,81 | |
| Lazaro Rivera | 41.000.000 | COEF. DE VARIACIÓN | | 5,25% | |
| Alex Moises | 37.000.000 | ADOPTADO | | \$ 39.250.000 | |
| Perito | 41.000.000 | | | | |
| | 157.000.000 | | | | |
| | | 431.034 | | | |
| 5.3 VALOR POR HA. PROPUESTA POR EL ENCUESTADO POR CLASE AGROLÓGICA | | | | | |
| CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE IV | CLASE V | CLASE VI |
| | | | \$ 39.250.000 | | |

Nótese que el Ingeniero **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, consultó el valor por Hectárea con los señores **VÍCTOR GÓMEZ, LÁZARO RIVERA y ALEX MOISES**. Que los valores aportados por éstos, más el que aporta el **PERITO**, dan cuenta de un valor estimado de \$39.250.000 por Hectárea, al cual, se le suman aquellos con ocasión de las mejoras, en virtud de los 1334 metros de Cerca Eléctrica en Alambre Acerado, por valor de \$2.001.000 y \$2.500.000, por los pastos mejorados, presentes en CINCO (5) de las SEIS (6) hectáreas del predio, como así se establece en el apartado **"6. MEJORAS"- 6.1 CERCAS y 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO**. Lo anterior, se puede apreciar en la **Captura N°. 2**.



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO

INGENIERA CIVIL

Avalúos en general, Interventorias, acueductos, vías, vivienda

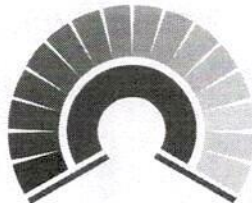
| 1 VALOR INTRÍNSECO DEL TERRENO | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| CLASE AGROLÓGICA | AREA /Ha. | VALOR \$ / Ha. | VR. \$ / por clase agrológica |
| Clase IV | 6,00 | \$ 39.250.000 | \$ 235.500.000 |
| | | SUBTOTAL 1 | \$ 235.500.000 |

| 6. MEJORAS | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.1 CERCAS | METROS | MATERIALES | ESTADO ACTUAL | \$ / M LINEAL | VALOR TOTAL | |
| Cerca eléctrica | 1334 | Alambre Acerado | Bueno | \$ 1.500 | \$ 2.001.000 | |
| | | | | | SUBTOTAL | \$ 2.001.000 |

| 6.2 ESTANQUES O RESERVORIOS | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| DIÁMETROS (MTS) | PROFUNDIDAD (Mts) | MATERIALES Y MANO DE OBRA EMPLEADA | VALOR TOTAL |
| | | | |
| SUBTOTAL | | | |

| 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| CULTIVO | DESCRIPCIÓN ESTADO | ÁREA (HÁS) | \$ POR HECTÁREA | \$POR CULTIVO |
| SEMI PERMANENTES | | | | \$ 2.500.000 |
| PASTOS | Mejorados, Bueno | 5,00 | \$ 500.000 | \$ 0 |
| OTROS: | | | | |
| SUBTOTAL | | | | \$ 2.500.000 |
| SUB TOTAL 2 (6.1), (6.2), (6.3) | | | | \$ 4.501.000 |

568



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Es de todo lo anterior, que se concluye el **"RESUMEN DE VALORES PARCIALES"**, contenido antes de la firma del PERITO AVALUADOR, como adelante se muestra: (Ver **Captura N°. 3**)

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
INGENIERA CIVIL
Avalúos en general, Interventorías, acueductos, vías, vivienda

| RESUMEN VALORES PARCIALES | |
|---|----------------|
| VALOR TERRENO (SUBTOTAL 1) | \$ 235.500.000 |
| VALOR CERCAS, JAGUEYES Y CULTIVOS (SUBTOTAL 2) | \$ 4.501.000 |
| VALOR CONSTRUCCIONES Y ANEXOS (SUBTOTAL 3) | \$ 0 |
| VALOR MAQUINARIA Y EQUIPOS (SUBTOTAL 4) | \$ 0 |
| SUB-TOTAL | \$ 240.001.000 |
| REDONDEO | -1000 |
| VALOR AVALÚO | \$ 240.000.000 |
| SON | |
| DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/Cte | |

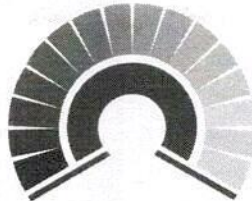
FIRMA PERITO

NOMBRE: FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO.

Perito Avaluador R.N.A.No. CC-25-1885 AFILIADO A CORPOLONJAS

En dicho resumen, se constata el valor total del PREDIO objeto de dicho AVALÚO, por cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/Cte. COP. Es decir, CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/Cte. COP, por hectárea, lo cual es congruente con el análisis del mercado realizado por el PERITO AVALUADOR, de manera directa en la ZONA, como evidentemente se muestra en la **Captura N°. 1** ya referida.

En este punto, es importante destacar que el **AVALÚO REALIZADO POR EL IGAC**, dista de la realidad del mercado en la zona, por cuanto éste, refiere que el AVALÚO de dicho predio, corresponde a la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$143.967.452) M/Cte. COP**, ello, en consideración del "dato de mercado número 10", contenido en la "página 14 de su INFORME DE AVALÚO COMERCIAL RURAL", así: (Ver **Captura N°. 4**)



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

El dato de mercado número 10, corresponde a una finca de menor extensión, topografía plana y ondulada, ubicada adjunta a la zona urbana de El Paujil y al predio de estudio. Valor por hectárea es de \$26.300.000.

Considerando lo anterior, el valor más aproximado por hectárea de terreno para la unidad fisiográfica (1) es de \$26.300.000; teniendo en cuenta el valor de terreno hectárea del dato de mercado número 10, por tener áreas de terreno de menor extensión, topografía similar, ubicarse cerca de la zona urbana de El Paujil y al predio objeto de avalúo.

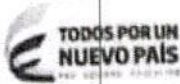
Si bien, se procura dar fundamento al AVALÚO REALIZADO por el IGAC, DEBE ADVERTIR el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, que el AVALÚO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, no fue realizado de manera DIRECTA, por cuanto, como así se advierte en su estudio en la página 12, **"la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA, se llevó a cabo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET", y es por intermedio de éstos datos, que infiere "NO ES NECESARIO REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DIRECTA":** (Ver Capturas N°. 5 y 6)

11. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

11.1 INVESTIGACIÓN INDIRECTA:

Método de Comparación o de Mercado Se utilizó este método para determinar el valor del terreno y se analizó la información de ofertas obtenidas en el sector y por internet de la siguiente manera:

En los antecedentes de avalúos del año 2012 se encontraron avalúos comerciales de predios ubicados en el municipio de El Paujil, se evidenció que para predios ubicados en la zona montañosa rural y a distancias mayores de más de siete kilómetros los valores de terreno oscilan entre \$800.000 y 2.500.000, dependen principalmente de la distancia a la zona urbana y de clase agrológica.



la investigación indirecta se pueden adoptar valores, no es necesario
realizar la investigación directa.

11.3 VALORES ADOPTADOS

Con base en la investigación indirecta, se obtiene el siguiente resultado:

| ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|----------------|
| U.F.1 | Ha | \$ 26.300.000 |

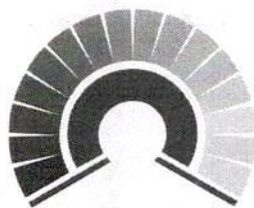
Frente a lo expresado por el defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, en lo cual pretende refutar o invalidar o desacreditar el avalúo comercial realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC., sobre el mismo bien inmueble que avaluó particular de manera comercial el perito avaluador ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo, identificado con Matrícula Inmobiliaria con la Matrícula Inmobiliaria No. 420-88285, tal como consta en el certificado y libertad del bien inmueble obrante a folio 23, y como como equivocadamente invoca el defensor de oficio que la matrícula inmobiliaria corresponde al No. 440.88285; este Despacho se permite precisar que tal como lo precisó el señor perito avaluador del bien inmueble en comento testimonio rendido ante este Despacho el día 29 de abril de 2024, en el mismo precisó ante a folio 449 al 450, manifiesta que *"Las metodologías que establecen el IGAC son válidas tanto la directas como las indirectas. De hecho, las encuestas se hacen cuando no existen puntos de comparación, sin embargo las encuestas directas son más objetivas porque se refieren al bien inmueble como tal no a inmuebles ubicados en diferentes sitios con características diferentes y diferentes usos, lo que nos puede dar un sesgo por encima o por debajo de las realizadas directamente. Los avalúos dependiendo de la fecha de realización pueden variar por factores diversos como el orden público, factores atmosféricos, invasiones, Por lo que no es recomendable comparar dos avalúos de fechas diferentes, porque no hay formula matemática que establezca esas depreciaciones."*; frente a esta apreciación del perito particular avaluador del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420- 88285, evidencia este Despacho que ambas son

correctas y determinadas por la normatividad vigente. Sin embargo, al realizar una confrontación simple de los avalúos tanto el del ingeniero civil como el realizado por el IGAC., encuentra grandes diferencias este Despacho por las siguientes consideraciones:

1. Al punto 5, concerniente a INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS, **5.2 CUADRO ESTADÍSTICO**: del avalúo comercial por parte del perito evaluador se precisa:

| 5.2 CUADRO ESTADISTICO | | | | | |
|--|-------------|-----------|---------------------|---------------|----------|
| INFORMANTE | VALOR/ Ha. | | MEDIA ARITMETICA | 39.250.000 | |
| | | | DESVIACION ESTANDAR | 2 061 552.81 | |
| Victor Gomez | 38.000.000 | | COEF. DE VARIACION | 5,25% | |
| Lazaro Rivera | 41.000.000 | | ADOPTADO | \$ 39.250.000 | |
| Alex Moises | 37.000.000 | | | | |
| Perito | 41.000.000 | | | | |
| | 157.000.000 | | | | |
| | | | 431.034 | | |
| 5.3 VALOR POR HA. PROPUESTA POR EL ENCUESTADO POR CLASE AGROLOGICA | | | | | |
| CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE IV | CLASE V | CLASE VI |
| | | | \$ 39.250.000 | | |

En tanto, que en el mismo ítem denominado de manera igual **11. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA, 11.1 INVESTIGACIÓN INDIRECTA**, se precisó por parte del avalúo comercial realizado por el IGAC., lo siguiente:



CONTRALORÍA

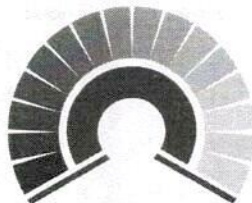
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

| No. | TIPO DE INMUEBLE | UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | FRENTE SOBRE VÍA | VALOR PEDIDO | %. NEG. | VALOR DEPURADO | TERRENO | | Valor Estimado Construcción y cultivos | OBSERVACIONES | CONTACTO | TELÉFONO CONTACTO | FUENTE |
|-----|------------------|---|------------------|------------------|---------|------------------|--------------|--------------|--|--|---------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | ÁREA EN Has. | VHa. | | | | | |
| 1 | Fisca | Venado La Montaña, a 15 minutos de El Paujil | Via carreteable | \$ 180.000.000 | 12,50% | \$ 140.000.000 | 36,50 | \$ 3.661.672 | \$ 10.000.000,00 | Casa en mal estado de conservación | Yesid Murco | 3124000791 - 3133766657 | http://www.dinamex.com.co/de/98178_venado-fisca-quebrada-de-la-montana-caqueta.html |
| 2 | Fisca | A 3 km de El Paujil vía hacia Cartagena del Chaira | Via carreteable | \$ 110.000.000 | 9,08% | \$ 100.000.000 | 33,00 | \$ 3.030.303 | | No tiene casa, terreno ondulado, 80% en pastos | Mario Lopez | 3148541487 | http://co.hogart.com/terreno-venado-fisca-quebrada-de-la-montana-13041365 |
| 3 | Fisca | Venado La Montaña, a 15 minutos de El Paujil vía El Llano | Via carreteable | \$ 1.300.000.000 | 7,68% | \$ 1.200.000.000 | 516,00 | \$ 2.296.822 | \$ 20.000.000,00 | Pasturas en inmediaciones, trapiche, dickeleón, brachinas de curules, Rubenones y Esmalta. Cercas en alambre de púas. Estable de 300 hechas de zinc y la casa en madera tratada. Con 147 hechas de zinc. | Yon Corderas | 314688713 | http://co.hogart.com/terreno-venado-fisca-quebrada-de-la-montana-13041365 |
| 4 | Fisca | A 5 km de El Paujil a la vereda La Sonora, en la zona montañosa | Via carreteable | \$ 250.000.000 | 10,71% | \$ 250.000.000 | 62,00 | \$ 3.387.087 | \$ 40.000.000,00 | Casa en madera, cuatro lagos, un corral, cinco hectáreas de eucalipto, una hectárea de cacao, una hectárea de plátano, una hectárea de yuca | Jose Eudalino | 3123763816 | http://co.hogart.com/terreno-venado-fisca-quebrada-de-la-montana-13041365 |

En los datos de mercado 1, 2, 3 y 4, se evidencia que el valor por hectárea para predios distantes de la zona urbana de El Paujil, de áreas de terreno extensas y/o ubicadas en la zona montañosa, se encuentra entre \$2.220.000 y \$3.600.000. El valor por hectárea en comparación con el predio objeto de avalúo es menor, por las razones anteriores.

523



CONTRALORÍA

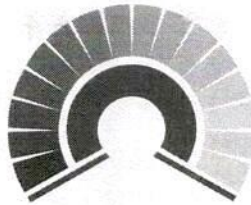
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

| No. | TIPO DE INMUEBLE | UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | FRENTE SOBRE VÍA | VALOR PEDIDO | % NEG. | VALOR DEPURADO | TERRENO | | Valor Estimado Construcción y cultivos | OBSERVACIONES | CONTACTO | TELÉFONO CONTACTO | FUENTE |
|-----|------------------|---|------------------|----------------|--------|----------------|--------------|---------------|--|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | ÁREA EN Hec. | VHa. | | | | | |
| 7 | Fisca | Adyunto a la zona urbana de El Paujil | Via carreteras | \$ 193.300.000 | 3,95% | \$ 190.000.000 | 56,00 | \$ 11.807.143 | \$ 100.000.000,00 | Terreno en un 80% arbolado, casa principal, piscina, corral, manantial, tanque, tasa de exportación y almacenamiento, terreno arbolado. | Henry Loaiza | 3123684329 | Directo |
| 8 | Fisca | A 5 minutos desde El Paujil a la zona pedregosa | Via carreteras | \$ 300.000.000 | 18,67% | \$ 250.000.000 | 16,00 | \$ 15.125.000 | \$ 40.000.000,00 | Terreno arbolado, casa en madera, cuatro hectáreas de caño, dos hectáreas de cacao, dos hectáreas de plátano, dos hectáreas de árboles maderables. | Maria | 3144036375 | Directo |
| 9 | Fisca | Adyunto a la zona urbana de El Paujil, frente de vía a la que conduce a cartagena del Chiriquí, junto al batallón militar | Via pavimentada | \$ 20.000.000 | 5,92% | \$ 19.000.000 | 0,7500 | \$ 23.333.333 | \$ 1.500.000,00 | Casa de materiales de reciclaje y manantiales | Ever | 3108129580 | Directo |
| 10 | Fisca | Adyunto a la zona urbana de El Paujil | Via pavimentada | \$ 180.000.000 | 11,11% | \$ 160.000.000 | 4,7500 | \$ 26.315.789 | \$ 35.000.000,00 | Casa, corral y dos cochinos, una hembra para el resorte de zona de terreno arbolado | Edgar Achuri | 3118820255 | Directo |

| No. | TIPO DE INMUEBLE | UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | FRENTE SOBRE VÍA | VALOR PEDIDO | % NEG. | VALOR DEPURADO | TERRENO | | Valor Estimado Construcción y cultivos | OBSERVACIONES | CONTACTO | TELÉFONO CONTACTO | FUENTE |
|-----|------------------|---|------------------|----------------|--------|----------------|--------------|--------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | ÁREA EN Hec. | VHa. | | | | | |
| 5 | Fisca | A 5 kilómetros desde El Paujil al municipio de Doncello | Via pavimentada | \$ 450.000.000 | 12,22% | \$ 395.000.000 | 46,00 | \$ 7.804.348 | \$ 36.000.000,00 | Casa en material en obra gris, garaje cubierto para cuatro carros, tanque para 3000 litros de agua, es necesario utilizar servidumbre para entrar a la finca | Heriberto Gimado | 3112510219 | Directo |
| 6 | Fisca | A 15 desde Paujil hacia Florencia | Via pavimentada | \$ 240.000.000 | 6,25% | \$ 230.000.000 | 30,00 | \$ 7.666.667 | \$ 3.000.000,00 | Casa en madera adornada, lago de piscicultura | Francisco | 3124041542 | Directo |

Los datos de mercado 5 y 6, corresponden a fincas de mayor extensión ubicadas en distancias menores de cinco kilómetros a la zona urbana de El Paujil; el valor por hectárea oscila entre \$7.500.000 y \$7.800.00. Por las razones anteriores, el valor por hectárea es menor en comparación con el predio de avalúo.



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

| No. | TIPO DE INMUEBLE | UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN | FRENTE SOBRE VÍA | VALOR PEDIDO | % NEG. | VALOR DEPURADO | TERRENO | | Valor Estimado Construcción y cultivos | OBSERVACIONES | CONTACTO | TELÉFONO CONTACTO | FUENTE |
|-----|------------------|--|------------------|----------------|--------|----------------|--------------|---------------|---|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | ÁREA EN Has. | VINZ. | | | | | |
| 7 | Finca | Adyunto a la zona urbana de El Paujil | Via campestre | \$ 780.000.000 | 3,85% | \$ 750.000.000 | 56,00 | \$ 11.607.143 | \$ 100.000.000,00 | Terreno en un 90% ondulado, casa principal, piscina, corral, marmosera, tanque, casa de mayordomo y abstracamiento, terreno ondulado. | Muy Leticia | 3129684329 | Ver foto |
| 8 | Finca | A 5 minutos desde El Paujil a la zona pedemonte | Via campestre | \$ 300.000.000 | 16,57% | \$ 250.000.000 | 16,00 | \$ 13.125.000 | \$ 40.000.000,00 | Terreno ondulado, casa en madera, cuatro hectáreas de cañamo, dos hectáreas de cacao, dos hectáreas de plátano, dos hectáreas de árboles maderables. | Maria | 3144336375 | Ver foto |
| 9 | Parcela | Adyunto a la zona urbana de El Paujil, frente de vía a la que conduce a cartagena del Chama, junto al batallón militar | Via pavimentada | \$ 23.000.000 | 5,00% | \$ 19.000.000 | 0,7500 | \$ 23.333.333 | \$ 1.500.000,00 | Casa de materiales de reciclaje y marmosera. | Ever | 3108125500 | Ver foto |
| 10 | Finca | Adyunto a la zona urbana de El Paujil | Via pavimentada | \$ 180.000.000 | 11,11% | \$ 160.000.000 | 4,7500 | \$ 26.315.789 | \$ 35.000.000,00 | Casa, corral y dos cocheras, una hectárea plana el restante de área de terreno ondulado. | Edgar Achuri | 3118632055 | Ver foto |

El dato de mercado número 7, corresponde a una finca de mayor extensión colindante con el predio de avalúo, se ubica cerca de la zona urbana de El Paujil y el relieve es ondulado en aproximadamente un 90%. Por las razones anteriores, el valor por hectárea es menor en comparación con el predio de estudio.

El dato de mercado número 8, corresponde a una finca de mayor extensión, se ubica cerca de la zona urbana de El Paujil y a la vía principal que conduce a Florencia, la forma del terreno es ondulada. Por las razones anteriores, el valor por hectárea es menor en comparación con el predio objeto de avalúo.

El dato de mercado número 9, corresponde a una parcela de menor extensión, cercana a la zona urbana de El Paujil y al batallón militar. Valor de terreno es de \$23.300.000.

El dato de mercado número 10, corresponde a una finca de menor extensión, topografía plana y ondulada, ubicada adjunta a la zona urbana de El Paujil y al predio de estudio. Valor por hectárea es de \$26.300.000.

Considerando lo anterior, el valor más aproximado por hectárea de terreno para la unidad fisiográfica (1) es de \$26.300.000; teniendo en cuenta el valor de terreno hectárea del dato de mercado número 10, por tener áreas de terreno de menor extensión, topografía similar, ubicarse cerca de la zona urbana de El Paujil y al predio objeto de avalúo.

11.2 INVESTIGACIÓN DIRECTA:

De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución N° 620 de 2008 del IGAC, como se encontraron ofertas de alguna manera comparables y con base en

14

Carrera 30 N.º 48-51 Conmutador: 369 4100 - 369 4000 Fax: 369 4098 Información al Cliente 368 3443 - 369 4000 Ext. 4674 Bogotá, D.C. www.igac.gov.co



la investigación indirecta se pueden adoptar valores, no es necesario realizar la investigación directa.

11.3 VALORES ADOPTADOS

Con base en la investigación indirecta, se obtiene el siguiente resultado:

| ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
|-------|------------------|----------------|
| U.F.1 | Ha | \$ 26.300.000 |

En los determinantes respecto de la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA, en ambos avalúos aprecia este Despacho que si bien el realizado por el perito evaluador particular al que recurrió el señor Alcalde del Municipio de El Paujil para la determinación de la compra del predio que finalmente compró, como el realizado por el IGACA., se denotan grandes diferencias asimétricas. Mientras el primero se limita a mencionar la relación de tres (3) personas sin datos de ubicación, ni de que predios son propietarios, ni en donde están ubicados los mismos, como tampoco aporta datos para contacto personalizado; la encuesta para determinar el precio por parte del IGAC., referencia diez (10) propietarios con la ubicación, nombre de la vereda, área, valor pedido,



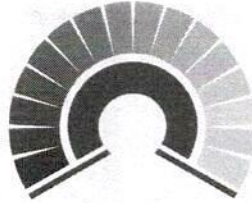
Nit. 891.190.246-1

valoración de las mejoras, nombre del propietario, su respectivo teléfono de contacto y la descripción de cada uno de los predios con su respectiva distancia a la cabecera municipal, estado de la vía de comunicación y entre las cuales se encuentran tanto la investigación directa como indirecta para la determinación del precio del bien inmueble.

Con lo cual se observa por parte de este Despacho, que si bien el avalúo realizado por el IGAC., se realizó de manera indirecta, se evidencia mucha más rigurosidad en la recolección de datos de información que fueron plasmados en el estudio para determinar el precio del bien objeto del inmueble, sin dejar de menospreciar que por tratarse de un avalúo de tipo institucional podría estar desprovisto de cualquier interés en la determinación del precio. Es conveniente de igual manera precisar que de acuerdo con el Decreto No. 2150 de 1995 artículo 27, respecto de los avalúos de bienes inmuebles establece: **"ARTÍCULO 27. AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES.** <Expresiones subrayadas condicionalmente EXEQUIBLES> Los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

PARÁGRAFO. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles." No se evidencia que el investigado en su calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, haya recurrido a la lonja de propiedad raíz más cercana al jurisdicción del bien inmueble, y muy por el contrario se observa que recurrió de manera directa al perito evaluador, violando consigo la normatividad referida por el Decreto 2150 de 1995.

Es claro entonces, de conformidad con lo aportado, que a diferencia de lo actuado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, el AVALÚO realizado por el Ingeniero CIVIL **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, **si cuenta con un estudio de mercado directo, lo cual, incide en la veracidad de los datos que en su informe incorpora** y que a efectos de restar mayores esfuerzos en controversia, **EL SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO**, pudo corroborar que el señor **HERIBERTO ARCILA PUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 6.681.291 de EL PAUJIL- CAQUETÁ, y quien fuera el propietario de la extensión de predio rural, objeto de compraventa con la Alcaldía Municipal del Paujil, como así obra en escritura pública N.º3078, debidamente registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos en Folio de Matrícula Inmobiliaria 420-109661,



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

manifestó en **VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA** rendida el día 06 de febrero de 2024 a las 09:15 a.m., lo siguiente: (Ver Captura N°. 7)


"Preguntado a: A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial **CONTESTÓ:** "No señor eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 millones por hectárea".



PREGUNTADO: A su juicio considera que la venta del predio se realizó por el valor comercial. **CONTESTÓ:** No señor, eso fue muy barato, no recuerdo, pero yo le pedí como a \$50.000.000 por hectárea. **PREGUNTADO:** Ha sido usted llamado a declarar por estos hechos ante la Fiscalía o Procuraduría. **CONTESTÓ:** No señor. **PREGUNTADO:** Sírvase manifestar si tiene algo más que agregar, corregir, suprimir, o enmendar a la presente diligencia. **CONTESTADO:** No señor.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina después de leída y aprobada por los que en ella intervinieron, siendo las 9:40 a.m.

EXPONENTE:


HERIBERTO ARCILA PUENTES
C.C. 6.681.291 de El Paujil.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO:


EDGAR MEDINA PEREZ
Abog. Sustanciador.

Como se precisó los dos (2) métodos para avaluar tanto directa como indirectamente son aceptado por la normatividad vigente al momento de la realización de los avalúos, del cual ya precisó este Despacho que se observa una mayor rigurosidad en el recaudo de información para determinar el valor comercial del bien objeto de estudio por parte del avalúo realizado por el IGAC., respecto de lo mencionado por el vendedor del predio que consideró en la versión libre y espontánea rendida, que la venta fue muy barata, aplica el viejo aforismo que establece que quien vende siempre considera barato la venta realizada, por cuanto quien lo hace siempre aspira a mucho más, apreciación que pierde valor, toda vez que el vendedor estaba sujeto a lo determinado por el avalúo comercial que se determinara en su momento.

De igual manera es importante precisar que para la época del avalúo como en la actualidad la vigencia de un avalúo comercial realizado es de un (1) año desde su realización, tal como lo confirmó el perito evaluador ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo, en su testimonio



Nit. 891.190.246-1

rendido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1420 de 1998 artículo 19 establece: "Artículo 19.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación." (Subrayado y negrilla fuera de texto). Teniendo en cuenta que el informe del avalúo realizado por el perito Fernando Gustavo Martínez Bravo se realizó el día 10 de mayo de 2012 (folio 25 al 34), y teniendo en cuenta que la promesa de venta se suscribió el día 26 de diciembre de 2013, siendo el mismo día en que se llevó a cabo la escritura No. 3078 (folio 41 al 48) y la venta del bien inmueble se registró ante el Circulo de Registro de Florencia, el día 27 de diciembre de 2013 (Certificado Libertad y Tradición folio 49), es claro para este Despacho que el avalúo realizado por el perito Fernando Gustavo Martínez Bravo el día 10 de mayo de 2012, había perdido vigencia, para la fecha de la cristalización del venta del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, el cual fue vendido por el señor Heriberto Arcila Puentes al Municipio de El Paujil Caquetá.

*Manifestación, que por sí sola, da cuenta del valor que estimaba el anterior propietario, el señor **HERIBERTO ARCILA, por su terreno**. Que obra, además, en consonancia con los valores tomados por el **PERITO AVALUADOR de manera DIRECTA** y que incluso, corrobora que la Administración en cabeza de mi PROHIJADO, **"obró de conformidad con los valores contenidos en dicho avalúo y no aceptó o pactó un valor superior al allí establecido, esto es DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$240.000.000) DE PESOS M/Cte. COP"**, resultando por demás excesiva, la forma como la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, constató el presunto detrimento, esto es, "mediante la diferencia establecida entre el avalúo INDIRECTO determinado por el Instituto Agustín Codazzi y el avalúo DIRECTO, realizado por el PERITO AVALUADOR, señor Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO. Lo anterior, por cuanto la forma en la cual fuera realizado el estudio de mercado por parte del IGAC, obedece a uno que no corresponde en efecto, con la realidad. Téngase en cuenta, también, que en virtud del Artículo 2o del Decreto Reglamentario N°. 1420 de 1998, "Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien". Si bien, el señor HERIBERTO ARCILA PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.681.291 de EL PAUJIL- CAQUETÁ, y quien fuera el propietario de la extensión de predio rural, objeto de compraventa con la Alcaldía Municipal del Paujil, consideró que el valor de cada hectárea correspondía a CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000) M/Cte. COP.*



Nit. 891.190.246-1

Se precisó por parte del perito evaluador concomitante con lo establecido en la norma, que ambos avalúos son técnicamente aceptados por la Ley. Sin embargo se reitera que el avalúo realizado por el perito evaluador que dio origen a la compra del bien inmueble, al momento de materializarse y cristalizarse la compra, el avalúo había perdido vigencia, por superar el año de haber sido realizado. De igual manera causa extrañeza a este Despacho que la autorización por parte del Concejo Municipal de El Paujil, Caquetá; se concediera mediante Acuerdo Municipal No. 011 de fecha 22 de junio de 2012 (folio 6 al 7), y el avalúo se realizó el día 10 de mayo de 2012, es decir un (1) mes y diez (10) antes de haber sido autorizado el señor Alcalde para realizar la compra. ¿Cómo inició acciones tendientes a la compra del terrero, cuando aun cuando no estaba facultado para ello?

Por su parte, el estudio de mercado adelantado por el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL y contenido en el avalúo presentado a la Administración Municipal, arrojó un valor en cuantía que daba cuenta de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/Cte. COP, menos por hectárea, respecto del precio considerado por su propietario.

Si se observa con detenimiento, la Administración municipal, en cuanto no pagó por el predio en mención, suma distinta a la contenida en el Avalúo realizado, le ahorró al municipio la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) por cuanto no reconoció el valor que consideraba el propietario, de tal suerte, que dicho predio se comprara en DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.000.000) M/Cte. COP y no en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000) que así consideraba el señor ARCILA PUENTES, era el valor comercial de la extensión de terreno que era de su propiedad.

Tal ahorro, de conformidad con lo contenido en el Artículo 2 del Decreto Reglamentario 1420 de 1998, demuestra que tanto el comprador como el vendedor actuaron libremente y que en todo caso, EL COMPRADOR, - en virtud de la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS y de la METODOLOGÍA empleada para la COMPARACIÓN DE MERCADOS", contenida en el avalúo comercial del predio rural y realizada por el PERITO AVALUADOR requerido, esto es, el Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO, a partir de la cual: "Para efectos de establecer el valor del terreno se tuvieron en cuenta las características propias del mismo, las vías de acceso, estado de aprovechamiento del predio, la consulta de conocedores del sector, con conocedores del mercado inmobiliario. Se trabajó con 3 variables estadísticas una de medida de tendencia central y dos de dispersión que son: Media aritmética, desviación Standard y coeficiente de variación, el cual se acepta en la toma de decisiones por ser inferior a 7.5%", - se

580



Nit. 891.190.246-1

sujetó a los valores allí señalados, respecto de la sumatoria del valor intrínseco del terreno Agrícola Clase IV a razón de \$39.250.000 por Hectárea, más, aquellos con ocasión de las mejoras en virtud de los 1.334 metros de Cerca Eléctrica en Alambre Acerado, por valor de \$2.001.000 y \$2.500.000, por los pastos mejorados, presentes en cinco (5) de las seis (6) hectáreas del predio, cuya descripción obra en el apartado “6. MEJORAS”- 6.1 CERCAS y 6.3 USO ACTUAL DEL SUELO, de dicho avalúo.

Olvida el defensor de oficio que para la venta de bienes inmuebles al Estado es indispensable contar previamente con el avalúo comercial determinado por el IGAC., o por perito designado por la Lonja de Propiedad donde se encuentre el inmueble, y no por el valor que estime su propietario a su libre albedrío, argumento que no es de recibo para este Despacho, y muy por el contrario se encuentra un detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá; toda vez que el avalúo realizado por Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC., estableció un avalúo por debajo del fijado por el perito particular en cuantía de **Noventa y Seis Millones Treinta y Dios Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte.**, toda vez que con el valor del perito Fernando Gustavo Martínez Bravo, la Entidad Territorial no podía comprar el bien objeto de estudio, por cuanto el avalúo realizado por el particular, había perdido vigencia o fenecido el día 10 de mayo de 2013, razón por la cual debió haber recurrido a la realización de otro avalúo que estuviera vigente al momento de la compra; fecha en la cual es probable que las condiciones fueran distintas a las encontradas por el perito evaluador Gustavo Fernando Ramírez Bravo, y bien se hubiesen podido acercar a las encontradas por el avalúo realizado por del IGAC., siete (7) meses y quince (15) días después de ser nulado por la Ley el avalúo y la fecha en la cual se compró el bien. Bien podría concluirse que de no existir el avalúo solicitado por este Ente de Control ante el IGAC., el presente proceso bien debió aperturarse, imputarse y fallarse por el valor total de la compra del bien inmueble por parte del Municipio de El Paujil, Caquetá; es decir en la cuantía de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$240.0000.000) M/CTE.**, toda vez que la compra del bien inmueble que se realizó por este valor, como consecuencia del avalúo comercial realizado por el perito evaluador el ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Ramírez, toda vez que al momento real de la compra, el peritaje había perdido vigencia.

*Que así obrara la Administración en apego estricto a los valores contenidos en el Avalúo, y no de conformidad con los valores estimados por el VENDEDOR, “da cuenta del pago del precio más probable por el cual éste se transaría, y **que se obtuvo a partir de la INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y CÁLCULOS y de la METODOLOGÍA empleada para la COMPARACIÓN DE MERCADOS**” realizada por el PERITO AVALUADOR”, quien era persona natural de carácter privado, inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores con*



Nit. 891.190.246-1

Matrícula R.N.A/C.C-25-1885 vigente a la fecha y que fuera requerido por la Administración Municipal, en cabeza de mi Prohijado.

*Así, efectivamente se constata que se pagó por el bien inmueble con MATRÍCULA INMOBILIARIA N.o 420-109661, "el precio más probable por el cual éste se transaría" (VALOR COMERCIAL ART. 2o DECRETO REGLAMENTARIO 1420 DE 1998). También, al concretarse dicha compra, con apego al contenido normativo de carácter reglamentario así referido y habiendo con ello, dejado de pagar los SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) M/Cte. COP, de más, que consideraba EL VENDEDOR, **(circunstancia que se traduce en un ahorro para el Municipio)**, se desvirtúa en consecuencia la lesión del patrimonio público enrostrada por el ENTE ACUSADOR y que se advierte en punto del **"Artículo 6o Daño patrimonial al Estado (Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020), contenido en la Ley 610 de 2000"**, así: "Lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado... (..) Daño que podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.*

Para este Despacho no existe duda de la idoneidad del perito evaluador el ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Ramírez, toda vez que la misma se acreditó con el registro de Fedelonjas obrante a folio 35 vigente para la época del avalúo, se cuestiona por parte de este Despacho es que quien ejerció la dirección y decisión de la compra del bien inmueble, dicha compra se hubiese realizado sin contar con un avalúo vigente al momento de cristalizarse la enajenación del terreno, hecho por el cual el investigado RODRIGO ANDRÉS CSTRO BETANCOURT debe responder por la lesión al causada al patrimonio del Municipio de El Paujil, Caquetá, toda vez que en desarrollo de su gestión fiscal en su condición de Alcalde causó menoscabo a los recursos de la entidad que regentaba. Su gestión antieconómica, ineficiente e inoportuna toda vez que con su gestión ausó detrimento patrimonial al Municipio del cual era su Alcalde en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

A contrario sensu, se observa en lo actuado por mi PROHIJADO, "apego irrestricto al principio de LEGALIDAD, por cuanto, como se advertirá más adelante, no hay vicios o irregularidades en el procedimiento adelantado por éste, en cabeza de la Administración



Nit. 891.190.246-1

Municipal y como representante legal de la Entidad Territorial de orden municipal. Si bien, se ha querido mostrar por parte del DESPACHO, que era necesario acudir en primera instancia ante el IGAC y agotar términos que ya no se encontraban consagrados en el marco legal vigente para la fecha en que se suscribiera el Avalúo, lo cierto es que, el hecho de que se acudiera a persona Natural de Carácter Privado, registrada en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, configura o constituye, "un obrar de conformidad con el marco normativo que sí le era exigible a la administración en el año 2012".

Yerra el defensor de oficio al argumentar que su prohijado estuvo con apego irrestricto al principio de legalidad, pues bien ha quedado demostrado en párrafos anteriores que dicho principio fue quebrantado al momento de adquirir un bien inmueble con un avalúo no vigente, por cuanto el que se había realizado por parte del perito evaluador Fernando Gustavo Ramírez Bravo que dio origen a la compra del bien inmueble se realizó el día 10 de mayo de 2012, y la compra real de enajenación del terrero ocurrió el día 26 de diciembre de 2013, es decir pasado el año de vigencia que contempla el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998: Decreto 1420 de 1998 artículo 19 establece: "Artículo 19.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación." (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En tal sentido, se solicita a la honorable Contraloría Departamental del Caquetá, que, en virtud de lo argumentado, por cuanto, demostrándose un obrar con apego a la Constitución y a la ley, que desvirtúa los elementos Constitutivos de Responsabilidad Fiscal como así se establece en el **Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal de la Ley 610 de 2000**, ((Modificado por el At. 125 del Decreto 403 de 2020) a saber: " i) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, ii) un DAÑO patrimonial al Estado y iii) el nexo causal entre los dos elementos anteriores, por cuanto los mismos, no se materializan"; toda vez que como así se consagra en el Artículo 122 Constitucional, "Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben", también, porque en sentencia C-341 de 2014, la honorable Corte Constitucional, ha sido expresa en señalar al Derecho al Debido Proceso:

"como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia".



Nit. 891.190.246-1

Manifestó, además, que *Hacen parte de las garantías del debido proceso:*

(i) *El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva el Derecho a obtener decisiones motivadas (...)*

(vi) *el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.*

Razón por la cual, corresponde al DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL, en ejercicio de la titularidad de la Responsabilidad Fiscal, en virtud de lo aportado hasta ahora, más todo aquello que en adelante se argumentará con rigor jurídico suficiente y que desvirtúa las imputaciones formuladas por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento del Caquetá en su Auto de Imputación N.º 001, "se prevea por parte del Funcionario Competente en los términos de lo así estipulado en el Artículo 54 de la Ley 610 de 2000, PROFERIR FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL EN FAVOR DE MI DEFENDIDO".

Petición a la que no accederá este Despacho toda vez que no le asiste razón al defensor de oficio del investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, toda vez que en su calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; quebrantó la legalidad establecida para la adquisición de bienes inmuebles por parte de las entidades territoriales de conformidad con el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, y en consecuencia se procederá a dictar fallo con responsabilidad fiscal.

Ahora bien, respecto del señor Ingeniero Civil FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ, resulta imperativo referir lo atinente a su IDONEIDAD PROFESIONAL y la facultad que en efecto le acudía al momento de suscribir el Avalúo que se ha buscado cuestionar en el proceso de la referencia, como adelante se sigue.

APARTADO SEGUNDO: DE LA IDONEIDAD DEL PERITO AVALUADOR:

Respecto de la IDONEIDAD DEL PERITO AVALUADOR, advierte el SUSCRITO, se cuestiona, señala y afirma por parte de la DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ en el AUTO DE IMPUTACIÓN N.º 001 del 26 de febrero de 2024, lo siguiente: (Ver Capturas N.º. 8, 9 y 10)

En la página 21 de 36:

Dicha compra presenta presunto detrimento patrimonial al Municipio, toda vez que por parte del de la Administración vigente para la época de los hechos, no se buscó un avalúo comercial del bien inmueble que favoreciera los intereses de Municipio y preservara los recursos institucionales y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador folio 35), y no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por tanto prefirió realizarlo ante un evaluador privado, el cual presenta sobrevaloración del precio del valor comercial, además de que presuntamente para la época del avalúo no se encontraba certificado por Fedelonjas, según certificación obrante a folio 35.

Se lee en dicho apartado:

(..) “y optó por solicitar un avalúo privado (con persona presuntamente no facultado para hacerlo con certificación no vigente de evaluador folio 35). (...)

En la página 25 de 36:

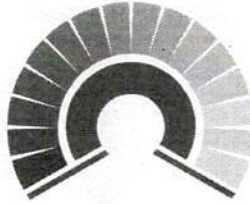
En este sentido, se tiene el presunto sobrecosto producto del pago del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, comprado por el Municipio de El Paujil, Caquetá, sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado, con quien presuntamente para la época del avalúo no estaba certificado para realizarlo, como tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante Fedelonjas, condujeron a determinarse detrimento patrimonial al Municipio de El Paujil, Caquetá.

S

Se lee en dicho apartado:

(...) y en cambio optar por la compra el mencionado bien producto un avalúo comercial privado con quién presuntamente para la época del Avalúo no estaba certificado para realizarlo” (...)

En la página 34 de 36:



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

con matrícula inmobiliaria No. 420-109661, de propiedad del señor Heriberto Arcila Puentes, evidenciándose presunto sobrecosto en la compra del mismo, toda que el Municipio de El Paujil no acudió al avalúo comercial realizado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en su defecto lo hizo a través de avalúo particular que si bien está facultado por la Ley, presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial ni tampoco se evidencia haber acudido a Fedelonjas para que determinara la persona idónea para que lo realizara; sin embargo consultado por la Contraloría Departamental del Caquetá el avalúo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi se evidencia un sobrecosto en cuantía de Noventa y Seis Millones Treinta y Dos Mil Quinientos cuarenta y Ocho Pesos (\$96.032.548) M/Cte.,

Se lee en dicho apartado:

(...) *presuntamente se contrató con una persona no certificada al momento de rendir el avalúo comercial* (...)

Dicha presunción que obra de manera reiterativa en las argumentaciones de la honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Departamento, se resalta, se queda sólo en ello, en la presunción. Advierte el SUSCRITO, que no figura en el expediente, prueba allegada por el ente acusador, que de cuenta de la validez de tal afirmación. Que se diga de manera reiterativa como ya fue expuesto, que **"PRESUNTAMENTE SE CONTRATÓ A UNA PERSONA NO CERTIFICADA AL MOMENTO DE RENDIR EL AVALÚO COMERCIAL"**, es una formulación que pretende hacer caer en error al JUEZ y que da cuenta de un actuar temerario por cuanto carece de sustento, incluso legal, como se demostrará en apartado posterior, respecto de la legalidad de lo actuado.

Bastará aquí, con manifestar que, como se verá, el PERITO AVALUADOR, estaba acreditado **COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES y contaba con Registro en el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A., con Matrícula R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012.** De ello, consecuentemente, lo que sigue.

En punto de las manifestaciones y señalamientos que hace el DESPACHO, que considera de manera respetuosa el SUSCRITO "No cuentan con el debido sustento", debe observar el FALLADOR, que al revisarse los ELEMENTOS DE PRUEBA contenidos en el



Nit. 891.190.246-1

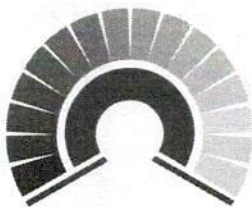
expediente del proceso de la referencia PRF-1148, se advierte que el señor INGENIERO CIVIL **FERNANDO GUSTAVO MARTÍNEZ BRAVO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.541.581 de Popayán, para la época en la que elaboró y suscribió el INFORME DE AVALÚO DE PREDIOS Y/O MEJORAS RURALES entregado a la Administración Municipal, en cabeza de mi PROHIJADO, el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, esto es, el día 10 de mayo de 2012, "sí contaba con **APROBACIÓN COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA**". Aprobación certificada por el **CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA"**, de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004.

Nótese que el Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, para la fecha en que elaboró y suscribió el **INFORME DE AVALÚO DEL PREDIO** al que se ha hecho mención y que fuera adquirido posteriormente por parte del Municipio, **contaba con Registro R.N.A/C.C-25-1885, con vigencia hasta el día 31 de julio de 2012.**

De lo anterior se colige, NO SOLO LA IDONEIDAD del Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, también, que el mismo se encontraba facultado y habilitado para "avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general, a nivel Nacional" (Véase la **Captura N°. 11**).

Lo así referido, consta en la certificación emitida por la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", que el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, reitera, se encuentra contenida en el expediente y controvierte de manera fidedigna e incontestable, las afirmaciones y señalamientos que hace la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ. (VER CAPTURAS N°. 11 y 12)

Captura No. 11



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Certifica además que es **Miembro Activo** de esta Entidad Gremial desde el año **2004** y le fue otorgado el **Registro-Matricula No. R.N.A/C.C-25-1885**, que respalda esta determinación con vigencia hasta el día **31 de Julio de 2012**, lo cual le faculta para **avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional**.

Se expide en Bogotá, D.C., a los **09 días** del mes de **Agosto de 2010**

Patricia Gonzalez Guio
PATRICIA GONZALEZ GUIO

Gerente Administrativo
Junta Directiva

Captura N°. 12



DEPARTAMENTO DE COLOMBIA

Corporación de Colombia

El Presidente de la Junta Directiva, con base en las matrículas de la
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS
"CORPOLONJAS DE COLOMBIA"

CERTIFICA QUE:

FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO
C.C. 10.541.381. Popayán

Presento solicitud de inscripción en esta Lonja, la cual fue estudiada y aprobada por el Consejo Directivo de Avaluadores de CORPOLONJAS DE COLOMBIA Bogotá, D.C., comprobándose su idoneidad como Perito Avaluador Profesional, ejerciendo en las siguientes áreas:

INMUEBLES URBANOS: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA
INMUEBLES RURALES: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA
AVALUOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
AVALUOS MASIVOS - ESPECIALES
AVALUOS ESPECIALES: RONDAS, HUMEDALES, LOTES CUÑA,
SEMOVIENTES Y VALOR DE PLOTTAGE

Certifica además que es **Miembro Activo** de esta Entidad Gremial desde el año **2004** y le fue otorgado el **Registro-Matricula No. R.N.A/C.C-25-1885**, que respalda esta determinación con vigencia hasta el día **31 de Julio de 2012**, lo cual le faculta para **avaluar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional**.

Se expide en Bogotá, D.C., a los **09 días** del mes de **Agosto de 2010**

Patricia Gonzalez Guio
PATRICIA GONZALEZ GUIO

Gerente Administrativo
Junta Directiva

Sede NACIONAL: Carrera 11 No. 95 - 75 Oficina 3095 - P.O. Box 480 50 50 Fax: 333 56 50
Cable: 315 571 12 00 - 300 785 50 44 - 315 315 4305 - e-mail: rdnacional@corpolygon.com
Bogotá, D.C. - Colombia



Nit. 891.190.246-1

Si bien, ha querido la DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, genera confusión a partir de una impresión distinta y apartada de la verdad y la realidad, lo cierto es que dicha CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE y que el REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, R.N.A, es una prestigiosa entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz "FEDELONJAS" y la Sociedad Colombiana de Avaluadores "SCDA", que propende por la profesionalización de la actividad valuatoria en Colombia. Entidad que se ha dedicado desde su fundación a la certificación de avaluadores en el país, buscando brindar seguridad y confianza a los usuarios de avalúos sobre la idoneidad y competencia de los avaluadores inscritos. Registro Nacional de Avaluadores RNA | LinkedIn.

*El REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, R.N.A ha representado a Colombia ante la Asamblea General de la International Valuation Standards Committee – IVSC y a la fecha, se encuentra acreditada en NORMA INTERNACIONAL ISO-IEC17024:2012 por la ONAC – ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA, institución que pertenece al Subsistema Nacional de la Calidad – SICAL-, (Registro Nacional de Avaluadores acreditado por la ONAC - La Lonja) - (https://www.youtube.com/@r.n.a.avaluadores/) y, como se verá en apartado posterior, para la fecha de los hechos, - no en el año 2013 que es cuando se compró el Bien Inmueble, sino, en el año 2012, el 10 de mayo de esa anualidad, precisamente la fecha exacta en la que fue elaborado y suscrito el Avalúo que sirvió de base para la posterior aprobación emitida por el Concejo Municipal (Acuerdo N.º011) para adquirir el bien inmueble con **MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 440-88285**, ubicado en la vereda el Borugo del mismo municipio y del cual se desprendería la MATRÍCULA INMOBILIARIA N.º. **420-109661** como así obra en la Oficina de Instrumentos Públicos-es en el Registro Nacional de Avaluadores en donde debía encontrarse registrada la persona natural o jurídica de carácter privado, encargada de realizar dicho Avalúo.*

*Respecto de la Acreditación por parte de la ONAC al REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES, en la cual consta el Alcance de la Acreditación de la misma y que muestra, además, de su relevancia, se permite aportar el SUSCRITO, las **Capturas N.º. 13, 14 y 15**, como adelante se sigue, así: (14-OCP-008 (onac.org.co))*


Captura No. 13

589

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1



ONAC ACREDITA A

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A
 NIT. 839.038.917-4
 Cl 72 A 6 44 Of 801 Edificio Appa, Bogotá D.C.
 Colombia



La acreditación por parte de ONAC garantiza que los requisitos de la Norma Técnica de Evaluación de Conformidad han sido cumplidos por el organismo, a los estándares establecidos en la norma ISO/IEC 17024:2012.

ISO/IEC 17024:2012
 Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas.

Esta Acreditación es otorgada al organismo establecido en el artículo de este certificado, identificado con el código:


14-OCP-008

Este Acreditado, en cumplimiento de los Acuerdos de Registro, emite el siguiente listado de organismos:

| Fecha de publicación del Otorgamiento: | 2015-06-30 |
|--|------------|
| Fecha de Renovación: | 2023-06-30 |
| Fecha de publicación última actualización: | 2023-08-15 |
| Fecha de vencimiento: | 2028-06-29 |

La vigencia de este certificado puede ser verificada en: onac.gov.co/directorio-de-acreditados/buscador-de-organismo o escaneando el código QR.



Alfonso Giraldo
 Gerente General

Captura N°. 14



ANEXO DEL CERTIFICADO

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A

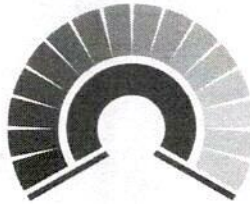
14-OCP-008

Alcance de la acreditación aprobada / Documento Normativo




| Vista de Certificación de Personas | Documento Normativo | Exigencia |
|--|--|--|
| AVALUADOR DE INMUEBLES URBANOS | NIT 839.038.917-4 Norma Técnica de Evaluación de Conformidad para el evaluador que realiza evaluaciones de bienes inmuebles urbanos. | El/los requisitos de Certificación de Personas, Categoría de Especialidad de Avaluadores de Bienes Inmuebles Urbanos, v. 5, artículo 3.1. |
| AVALUADOR DE INMUEBLES RURALES | NIT 839.038.917-4 Norma Técnica de Evaluación de Conformidad para el evaluador que realiza evaluaciones de bienes inmuebles rurales. | El/los requisitos de Certificación de Personas, Categoría de Especialidad de Avaluadores de Bienes Inmuebles Rurales, v. 5, artículo 3.1. |
| AVALUADOR DE MAQUINARIA FULCRANTES Y MAQUINARIA MOVIL | NIT 839.038.917-4 Norma Técnica de Evaluación de Conformidad para el evaluador que realiza evaluaciones de Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil, v. 5, artículo 3.1. | El/los requisitos de Certificación de Personas, Categoría de Especialidad de Avaluadores de Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil, v. 5, artículo 3.1. |
| AVALUADOR DE INMUEBLES ESPECIALES | NIT 839.038.917-4 Norma Técnica de Evaluación de Conformidad para el evaluador que realiza evaluaciones de bienes inmuebles especiales. | El/los requisitos de Certificación de Personas, Categoría de Especialidad de Avaluadores de Bienes Inmuebles Especiales, v. 5, artículo 3.1. |
| AVALUADOR DE INMUEBLES ESPECIALES EN INMUEBLES URBANOS | NIT 839.038.917-4 Norma Técnica de Evaluación de Conformidad para el evaluador que realiza evaluaciones de bienes inmuebles especiales. | El/los requisitos de Certificación de Personas, Categoría de Especialidad de Avaluadores de Bienes Inmuebles Especiales, v. 5, artículo 3.1. |
| AVALUADOR DE INMUEBLES ESPECIALES EN INMUEBLES RURALES | NIT 839.038.917-4 Norma Técnica de Evaluación de Conformidad para el evaluador que realiza evaluaciones de bienes inmuebles especiales. | El/los requisitos de Certificación de Personas, Categoría de Especialidad de Avaluadores de Bienes Inmuebles Especiales, v. 5, artículo 3.1. |

Captura N°. 15



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1



ANEXO DEL CERTIFICADO

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A.

ACREDITACIÓN R.N.A. 780/2704/2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

| Tipo de Certificación de Personas | Documento Normativo | Esquema |
|--|---|---|
| AVALUADOR DE INTANGIBLES ESPECIALES EN MAQUINARIA, PLTA. SOFISTOS Y MAQUINARIA MOVIL | NTS C 001.002-08-13 Norma técnica sectorial de competencia para el evaluador que realiza evaluos de intangibles especiales | SG/DC/08 Esquema de Certificación de Personas, Categoría o Especialidad de Avaluador de Intangibles Especiales Versión 5 Fecha de Aprobación: 2002-05-05 |
| AVALUADOR DE INTANGIBLES ESPECIALES EN INMUEBLES ESPECIALES | NTS C 001.002-08-13 Norma técnica sectorial de competencia para el evaluador que realiza evaluos de intangibles especiales | SG/DC/08 Esquema de Certificación de Personas, Categoría o Especialidad de Avaluador de Intangibles Especiales Versión 5 Fecha de Aprobación: 2002-05-05 |

Sitios cubiertos por la acreditación

Sede principal: Cl 72 A 6 44 Of 801 Edificio Appa, Bogotá D.C., Colombia

FR 35 1-05/11 Aprobación 2011-05-05

Este documento es el número de un conjunto de documentos de procedimiento de acreditación emitidos por ONAC

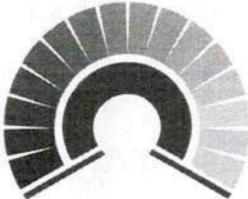


Debe observar entonces el FALLADOR, se solicita respetuosamente, que todos los argumentos aportados e imágenes (capturas) incorporadas, en conjunto, como así se predica en el **Artículo 26 de la Ley 610 de 2000**, deben ser valorados y tenidos en cuenta, por cuanto obra en su contenido, prueba fehaciente que, se reitera:

“desvirtúa lo dicho por la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en aras de restar mérito y credibilidad, presuntamente, tanto a la acreditación como a la facultad que en efecto sí le acudía al PERITO AVALUADOR, Ingeniero Civil FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO, mismo a quien acudiera la Administración del Municipio de El Paujil y quien suscribió el día 10 de mayo de 2012, el AVALÚO que se ha cuestionado desde la Contraloría Departamental y del cual, al parecer, también se ha querido restar el mérito que le corresponde, en consideración de los argumentos en punto del Principio de Legalidad, contenidos en el apartado que me permio exponer más adelante.

Se ha precisado en acápites anteriores que la idoneidad del perito evaluador Fernando Gustavo Martínez Bravo, en su condición de ingeniero civil y debidamente acreditado por parte de Corpo Corpolonjas de Colombia como obra a folio 35, no está en discusión, posición que ha sido corregida por este Despacho.

591



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Sea ésta la oportunidad, para comentar, antes de acudir con el siguiente apartado, " sin ser necesaria la exigencia esgrimida por el DESPACHO respecto de la exclusividad y necesidad de acudir previamente con solicitud ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi", que pese a que no lo refiere ampliamente la **honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL** de la **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ**, en su Auto de Imputación N°. 001, reposa en el expediente, oficio número 7832014EE3493-01 de fecha 17 de octubre 2014, suscrito por el director territorial del **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI**, a través del cual informa que a la fecha no existen avalúos en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria N°440-88285, esto es, el inmueble objeto de controversia y también, documento suscrito por el **DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO**, que da cuenta de la incapacidad de la Dirección Territorial Caquetá del **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI**, para realizar avalúos comerciales, pues no cuentan con personal Idóneo, ni los recursos para realizarlos.

Circunstancia que obra en el oficio 7832015EE1617-01-F:1 – A:0 de fecha 29 de mayo de 2015 y radicado ante la Contraloría Departamental el día 02 de junio de 2015, es decir, dos meses después de ser requerido de manera insistente por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, quien les ofició con antelación en el mes de marzo de 2015, para que se hiciera el avalúo que ésta requería. En dicho documento consta lo mencionado y también, que tuvo que ser direccionado el requerimiento por parte de la Dirección Territorial del IGAC, a la SEDE CENTRAL IGAC "para que ella estudiara la posibilidad de enviar personal que apoyara tales requerimientos". (Ver Captura N°. 16).





6005/

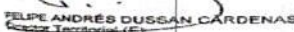
Florencia.

Señor:
CESAR AUGUSTO OVIEDO
Carrera 13 No. 15-00 Piso 3
Tel. 3208559594
Florencia - Caquetá

Asunto: Respuesta a su Solicitud

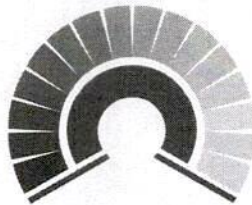
Respetado Señor Oviedo:

Atendiendo sus peticiones con radicados No.7832015ER706, No.7832015ER707 del 24 de Marzo de 2015 y No.7832015ER002, No.7832015ER003 del 13 de Marzo, me permito informarle que esta Dirección Territorial no cuenta con el personal Idóneo ni los recursos para realizar estos avalúos comerciales, por lo tanto se hizo traslado de sus peticiones a la Sede Central IGAC, para que ella estudie la posibilidad de enviar personal que apoye sus requerimientos.


FELIPE ANDRÉS DUSSAN CÁRDENAS
Director Territorial (E)



592



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

Hasta aquí, se han aportado elementos que dan cuenta de lo obrado en punto del Avalúo Comercial cuyo estudio de mercado se hizo de manera directa en el lugar en donde se encuentra ubicado el predio, avalúo elaborado y suscrito el día 10 de mayo de 2012 por Perito Avaluador Profesional. De los dineros que, en virtud de la sujeción a lo contenido en dicho avalúo, efectivamente, le ahorró la Administración al Municipio de El Paujil y con lo cual, se contradice la gestión antieconómica predicada por el Ente Acusador, quien se basó en Avalúo **adelantado por el IGAC y cuya INVESTIGACIÓN ECONÓMICA para determinar el MERCADO, se llevó a cabo de manera indirecta, a través del análisis de ofertas obtenidas en el sector a través de INTERNET.** También, de la Idoneidad del PERITO AVALUADOR PROFESIONAL requerido por la Administración Municipal en cabeza de mi Prohijado, esto es, el Ingeniero Civil **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**, persona natural de carácter privado **certificado por CORPOLONJAS DE COLOMBIA, debidamente registrado en el Registro Nacional de Avaluadores con MATRÍCULA R.N.A/C.C-25-1885 VIGENTE para la fecha en que éste, realizó tal Avalúo y quien se encontraba habilitado COMO PERITO AVALUADOR PROFESIONAL EN INMUEBLES RURALES para AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA. Aprobación certificada por el CONSEJO DE AVALUADORES DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA", de la cual, además, era miembro activo desde el año 2004, misma entidad que corroboró su registro en el Registro Nacional de Avaluadores. También, se incorporó una visión más amplia respecto del Registro Nacional de Avaluadores, prestigiosa entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz "FEDELONJAS" y la Sociedad Colombiana de Avaluadores "SCDA", que se ha dedicado desde su fundación a la certificación de avaluadores en el país, buscando brindar seguridad y confianza a los usuarios de avalúos sobre la idoneidad y competencia de los avaluadores inscritos.**

Todos los anteriores, entre otros aspectos, dan cuenta que no había lugar a generar controversia respecto de lo obrado en el Avalúo, así como no existe sustento para las afirmaciones que lamenta el SUSCRITO, fueran referidas por la Honorable Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá. Para desvirtuar tanto la acreditación como la Idoneidad el PERITO AVALUADOR PROFESIONAL, requerido por la Administración Municipal, pasando por alto también, el mérito que le corresponde al Registro Nacional de Avaluadores, entidad en la cual se encontraba registrado.



Nit. 891.190.246-1

De igual manera hasta aquí este Despacho ha precisado sin necesidad a equívocos que se reconoce la idoneidad del perito evaluador el ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Bravo, y también se ha precisado con calidad meridiana que el avalúo con el cual se procedió a la realización de la compra del lote de terreno por parte del Municipio de El Paujil, Caquetá; estaba sin validez, toda vez que había transcurrido más de un (1) año desde el momento de su realización hasta la fecha en que realmente se realizó la compra del bien inmueble, quebrantándose así el principio de legalidad y generándose consigo el detrimento patrimonial endilgado por este Despacho al investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT., toda vez que al no existir avalúo vigente como referencia para la compra del bien inmueble necesariamente este Despacho se remite al avalúo de terminado por el IGAC., cuya fecha de realización se determinó a diciembre de 2013, realizándose de manera deflactoria desde el 30 de octubre de 2015 a 31 de diciembre de 2013 (folio 79 al 80)., fecha realmente al momento de la realización de la venta.

No debe perderse de vista tampoco, la manifestación a modo de lamentación que hace el Señor ARCILA PUENTES, a quien, cuando se le preguntó si a su juicio consideraba que la venta del predio se realizó por el valor comercial, respondió: “No señor eso fue muy barato...”

Argumento también ya desatado en el entendido que el señor Heriberto Arcila Puentes en su calidad de propietario del bien inmueble, debía someterse a la normatividad vigente para la venta del bien al Ente Territorial y por tanto tampoco podía establecer un precio a su libre albedrío

Abordados los anteriores Apartados, procederá el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, a presentar sus argumentos respecto de la legalidad de lo actuado por el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, mi DEFENDIDO.

APARTADO TERCERO: “DE LA LEGALIDAD DE LO ACTUADO POR EL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT”

Observa el SUSCRITO DEFENSOR DE OFICIO, que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en su Auto de Imputación N. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, en punto de los Fundamentos de Derecho que soportan el inicio de la Investigación, señala los siguientes:

Artículo 209, 267 y 268 Numeral 5 de la Constitución Política

Ley 610 de 2000
Ley 1474 2011
Ley 80 de 1993

También, advierte que, con sustento en el contenido del Artículo 15o de la ley 9 de 1989, reglamentado parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2º del Decreto 4117 de 2006, como se verá en lo sucesivo, en sus consideraciones, la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, encuentra los motivos de reproche en contra de mi Prohijado, por las actuaciones que éste realizó, en punto del Avalúo comercial que se elaboró el 10 de mayo del año 2012 por persona natural de Carácter Privado que contaba con Registro VIGENTE en el Registro Nacional de Avaluadores, y a quien acudió para esa fecha, la Administración Municipal en cabeza de mi Representado. Avalúo que determinó el valor comercial y que en efecto sirvió de base para la adquisición posterior, ya en el año 2013, - (contando eso sí, con la aprobación debida por parte del Concejo Municipal y la supervisión de la secretaría de Planeación Municipal para dicha adquisición) - de predio con extensión de seis hectáreas e identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661.

*Es a partir de dicho contenido, es decir, **con apego al contenido normativo de carácter reglamentario respecto del artículo 15 de la ley 9 de 1989 así referido, que termina IMPUTANDO RESPONSABILIDAD FISCAL A TITULO DE CULPA GRAVE**, en cuantía por NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE, en contra del señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, mi DEFENDIDO.*

*Nótese que, **"En referencia a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales, y con sustento en el artículo 15o de la ley 9 de 1989, reglamentada parcialmente por el Decreto 855 de 1994 y modificado por el artículo 2o del Decreto 4117 de 2006, cuyo tenor es el siguiente:***

Ley 9 de 1989:

"Artículo 15: El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones de conformidad con el artículo 18 de la presente ley...

La ley 9 de 1989 fue parcialmente modificada por el Decreto 855 de 1994, en ella, respecto del articulado anterior, se expresa:



Nit. 891.190.246-1

Artículo 15. Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, una persona natural o jurídica experta en la materia.

Luego, dicho articulado así contenido en el Decreto 855 de 1994, fue modificado por el Artículo 2a del DECRETO 4117 DE 2006, en el cual se expresó:

Artículo 2°. El artículo 15 del Decreto 855 de 1994 quedará así:

"Artículo 15. Avalúo de bienes inmuebles. Para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

Parágrafo. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".

Normatividad mencionada y quebrantada por el investigado RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, toda que en su calidad de Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá; no acredita haber recurrido a la Lonja de Propiedad Raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble para que determinara la persona natural o jurídica que debía realizar dicho avalúo; y en consecuencia recurrió de manera directa al ingeniero civil Fernando Gustavo Martínez Ramírez, que si bien se ha acreditado transparentemente su condición de idoneidad como perito evaluador, no fue la Lonja de Propiedad del lugar en donde se ubica el bien inmueble objeto de compra quien escogiera al perito evaluador del bien inmueble objeto de este proceso, tal como lo determina la Ley, sino que fue el propio Alcalde quien lo escogió al perito evaluador para realizar el avalúo objeto del reproche fiscal que se hace a su prohijado

la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, en su Auto de Imputación N. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, manifestó:

596



Nit. 891.190.246-1

*"Al respecto evidencia este despacho que **no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble** y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo que lo acredita como tal (folio 35) tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.*

Efectivamente para este Despacho es absolutamente claro que el Alcalde del Municipio de El Paujil, Caquetá nunca requirió a la Lonja de Propiedad Raíz para que seleccionar el perito para avaluar el bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 420-109661, que bien hubiese podido ser una persona natural o jurídica. Así mismo se reconoce la imprecisión establecida en el Auto de Imputación No. 001 de fecha 26 de febrero de 2024, tal como lo manifiesta el defensor de oficio, cuando en realidad lo que se quiso precisar por este Despacho sin lograr hacerlo, es que no existía validez del avalúo al momento de la compra del bien inmueble en comento, toda vez que el avalúo realizado por el perito Fernando Gustavo Ramírez Bravo se realizó el día 10 de mayo de 2012, y la compra real del bien se realizó el día 26 de diciembre de 2013, violándose lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1420, vigente para la época de los hechos, acerca de la vigencia del avalúo comercial realizado.

*Teniendo en cuenta lo anterior es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la conclusión de la denuncia D-003-16 **evidencia este Despacho que no se requirió por parte del municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto geográfico Agustín Codazzi** sino al particular facultado por la norma para la expedición del Avalúo comercial del bien inmueble en comento, presentándose un avalúo muy por encima del avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad estatal en orden de importancia autorizada por la ley para realizar AVALÚOS COMERCIALES en el país, generándose un presunto daño patrimonial al municipio de El Paujil, en la cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE.*

En ese sentido es preciso indicar que el presente proceso tiene su origen en la conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo 2016, relacionado con presuntas irregularidades ocasionadas por la compra el bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el en el municipio del Paujil, Caquetá; el cual consta de 6 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.681 291.



Nit. 891.190.246-1

Lo anterior, como así consta, se encuentra contenido en el Auto de Imputación N°. 001 del 26 de febrero de 2024, en las páginas 13, 14 y 15 del mismo, como en efecto se muestra en las imágenes que se siguen a continuación: **(VER CAPTURAS 17, 18, 19, 20 y 21)**

CAPTURA No. 17

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal determina que el presunto detrimento patrimonial se establece en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**, como lo expresó la Conclusión de la Denuncia D-003-16, toda vez que es el resultado cuantificado de la confrontación entre los avalúos realizados por el particular Fernando Gustavo Martínez a quien acudió el Municipio de El Paujil y el solicitado por la Contraloría Departamental del Caquetá ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En cuanto a las normas que regulan la compra y enajenación de bienes inmuebles para las entidades estatales encontramos:

La Ley 9 de 1989, "Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones", en su artículo 15 establece:

CAPTURA N°. 18

CAPTURA N. °17

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

"Artículo 15°.- El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones, de conformidad con el artículo 18 de la presente Ley.

La forma de pago, en dinero efectivo, títulos-valores o bienes muebles e inmuebles, será convenida entre el propietario y el representante legal de la entidad adquirente. Las condiciones mínimas del pago del precio serán las previstas en el artículo 29.

Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura pública de compraventa, la entidad adquirente deberá entregar simultáneamente una garantía bancaria incondicional de pago del mismo. La existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de contrato, sin perjuicio del cobro del saldo por la vía ejecutiva.

Facúltase a los establecimientos bancarios para emitir las garantías de que trata el inciso anterior." (Subrayado fuera de texto).

CAPTURA N°. 19

CAPTURA N°. 20

se encuentra ubicado el bien inmueble y además el certificado presentado por el Evaluador del bien inmueble el señor Fernando Gustavo Martínez Bravo, que lo acredita como tal (folio 35), tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2012, siendo expedido el informe del avalúo en la fecha 10 de mayo de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso advertir que tal como lo adujo el trámite de la Conclusión de la Denuncia D-003-16, evidencia este Despacho que no se requirió por parte del Municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino al particular facultado por la norma para la expedición del avalúo comercial del bien inmueble en comento, presentándose un avalúo muy por encima del avalúo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien es la entidad estatal en

CAPTURA N°. 21

orden de importancia autorizada por la ley para realizar AVALUOS COMERCIALES en el país, generándose un presunto daño patrimonial al Municipio De El Paujil en la cuantía de **NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$96.032.548) M/CTE.**

En este sentido, es preciso indicar que el presente proceso tiene su origen en la Conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo de 2016, relacionado con presuntas irregularidades ocasionadas por la compra del bien inmueble Lote No. 1, ubicado en el Municipio de El Paujil, Caquetá; el cual consta de seis (69 hectáreas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 420-109661 del Círculo Notarial de Florencia, Caquetá; el cual fue adquirido por el representante legal del Municipio de El Paujil, al realizarle la compra al señor Heriberto Arcila Puentes, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.681.291.

CAPTURA N. °21

En consecuencia, es con sustento en dicho contenido normativo como así se indicó, de donde se desprenden las siguientes consideraciones:

I. Que el precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad que cumpla sus funciones... (Ley 9 de 1989 Artículo 15)

II. Que, para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación y que dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad.



Nit. 891.190.246-1

Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, una persona natural o jurídica experta en la materia. (Decreto 855 de 1994, Artículo 15)

III. Que, para efectos de la venta o adquisición de bienes inmuebles, los avalúos que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, dicha persona debe encontrarse registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.

A lo que debe sumarse lo contenido en su párrafo y es que, si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles".

Nótese que es a partir de lo precitado, que se extrae que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, hace la respectiva valoración para argumentar en su Auto de imputación, lo siguiente:

- a) Que no obra solicitud a la Lonja de propiedad raíz donde se encuentra ubicado el bien inmueble. (Auto de Imputación No. 001 página 14)*

Hecho que no ha sido desvirtuado procesalmente hasta el momento, situación que evidencia que tanto en la conclusión de la Denuncia, como en el Auto de Imputación en el presente proceso asiste razón a este Ente de Control, toda vez que dentro del proceso de peritaje se violó flagrantemente la norma invocada por el defensor de oficio, siendo en consecuencia un peritaje que no se ajustó a la norma vigente para la época de los hechos, sumado a que la compra se realizó posteriormente al año de vigencia del mismo; tal como lo precisó el propio perito evaluador en su testimonio rendido ante este Despacho al manifestar que la vigencia de un peritaje, su validez es de un año.

- b) Que tal como lo adujo el trámite de la conclusión de la denuncia D-003-16 evidencia este Despacho que no se requirió por parte del municipio de El Paujil el avalúo del respectivo bien inmueble objeto de compra al Instituto geográfico Agustín Codazzi sino al particular facultado por la norma para la expedición del Avalúo comercial del bien inmueble en comento. (Auto de Imputación N°. 001 página 14)*



Nit. 891.190.246-1

Se reitera por parte de este Despacho que si bien el Municipio de El Paujil podía acudir al avalúo comercial ante un particular autorizado, este debía realizarse ante la Lonja de Propiedad Raíz donde se ubica el bien inmueble, para que la misma determinara quien debía realizarlo, hecho no acreditado procesalmente por el defensor de oficio en sus descargos o argumentos de defensa en favor de su prohijado.

- c) *Que el presente proceso tiene su origen en la conclusión trámite de la denuncia D-003-16 de fecha 17 de marzo 2016. (Auto de Imputación No. 001 página 15)*
- d) *Que no acudió a un avalúo comercial ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, **por tanto, prefirió realizarlo ante un evaluador privado (...)** (Auto de Imputación N°. 001, Página 21 de 36)*
- e) *Que, se tiene el presunto sobre costo producto del pago el bien inmueble indicado con matrícula inmobiliaria número 420-109661 comprado por el municipio del Paujil Caquetá, **sin acudir ni solicitar avalúo comercial ante el Instituto geográfico Agustín Codazzi, y en cambio optar por la compra del mencionado bien, producto de un avalúo comercial privado (...)** (Auto de Imputación N°. 001, Página 25 de 36)*
- f) *Que, **tampoco se evidencia la solicitud por parte del señor Alcalde realizar solicitud ante FEDELONJAS**, lo cual, en conjunto con lo anterior, condujo a determinarse detrimento patrimonial al municipio de El Paujil, Caquetá". (Auto de Imputación N°. 001, Página 25 de 36)*
- g) *(...) **Que no se evidencia el trámite realizado por parte del municipio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el establecimiento de dicho avalúo** (Auto de Imputación N°. 001, Página 27 de 36)*
- h) *(...) **fue una conducta que omitió el señor RODRIGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT, al no acudir en primera instancia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de establecer el valor comercial del predio que finalmente compró el municipio de El Paujil, conforme a la normatividad y procedimiento, pudiendo haber evitado que se generara el detrimento patrimonial en cuantía de NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos (\$96.032.548) M/CTE. (Auto de Imputación N. o001, Página 30 de 36)***

En línea con tales ponderaciones, es que la honorable DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ,